**Paper - El “riquismo” -brazo pícaro del “pobrismo”- que se “hinca” ante los gobiernos populistas (la “patria contratista” y otros, que “pastan” en los Presupuestos del Estado)**

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c) conversa con la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín (d), y el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán (i, de espaldas), entre otros asistentes, tras la conferencia. Nota: al lado de Ana Botín está en vicepresidente (comunista) del Gobierno de España, Pablo Iglesias (d) (enemigo declarado de las grandes empresas cotizadas en la bolsa española, conocida como Ibex 35).

**- Introducción: hacer todo lo necesario para poder seguir “mamando” del presupuesto**

- Sánchez garantiza a los líderes empresariales un Gobierno estable tres años más (Cinco Días - **1/9/20**)

El líder del Ejecutivo pide unidad política a las fuerzas parlamentarias en la víspera de iniciar la negociación de los Presupuestos con el PP y Cs

(Por R. Pascual)

“Elegimos unidad, unidad y unidad”. Esa fue la palabra más dicha ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la conferencia titulada España puede y que pronunció para reclamar alto y claro y, sobre todo, de manera pública, cohesión política, económica y social para encarar la recuperación del país azotado por la pandemia de Covid-19. “Si España quiere, España puede, eso sí, tenemos que querer todos, cuantos más mejor”, dijo el presidente del Gobierno que también apeló en varias ocasiones a la necesidad de que se establezca un “nuevo clima político marcado por la unidad y la estabilidad para afrontar la recuperación”.

Este mensaje de Sánchez pidiendo unidad tenía fundamentalmente dos destinatarios a los que no citó expresamente pero a los que todos los asistentes tenían en mente: los dirigentes del PP y de Ciudadanos, necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado que sustituyan a los actuales (aprobados por el anterior Gobierno popular y prorrogados desde 2018). Sacar adelante estas cuentas públicas será imprescindible para el uso y gestión de los 140.000 millones de euros que España va a recibir de Bruselas para paliar los efectos de la crisis sanitaria. Y esto ocurría, justo el día antes de que Sánchez se entreviste hoy con el líder del PP para intentar conseguir su apoyo.

Para reforzar este mensaje de unidad política para reflotar el país Sánchez se rodeó ayer en la Casa de América de la plana mayor empresarial, con, entre otros, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el consejero delegado de Inditex, Pablo Isla; los presidentes de Telefónica José María Álvarez-Pallete, y BBVA, Carlos Torres; o los presidentes de Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ACS, Florentino Pérez. Tampoco faltaron los líderes de los agentes sociales, con la presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez.

Ante ellos y un centenar más de personalidades del mundo económico, académico y cultural el mensaje fue claro y reiterado con una fórmula que ya usó en su última intervención antes de las vacaciones de verano: “Hay que arrimar el hombro; si no todos, los más posible. Cuanto más ancho sea el apoyo de la base parlamentaria, más pronta será la recuperación, más vidas salvaremos, más empresas mantendremos y más empleos crearemos”.

En ese sentido, explicó que los ciudadanos están viendo a la economía desplomarse dos dígitos “y no por razones de su productividad o su trabajo”, dijo Sánchez, para acto seguido asegurar que “esto no puede superarlo media España, dando la espalda a la otra media y menos una España contra la otra” (...) “No hay virus de izquierda o derecha, no hay contagiados, hospitalizados o fallecidos de izquierda o de derecha y del mismo modo deben comportarse las instituciones públicas y así garantizo que se comportará el Gobierno”, añadió.

De hecho, lo que ofreció ayer Sánchez a cambio de esa unidad demandada fue estabilidad en el Gobierno, al no ser ajeno a las últimas tensiones entre socialistas y los ministros de Unidas Podemos a cuenta del futuro pacto presupuestario. “Puedo garantizar la estabilidad en el Gobierno de coalición -aseguró el presidente- pero esto no basta es preciso una unidad que se imponga a los viejos hábitos y clichés de los partidos políticos previos a la pandemia”. Además, este llamamiento a un consenso político abarca no solo a la negociación presupuestaria si no también -y esto sí lo mencionó Sánchez- a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Así como otros organismos como el Defensor del Pueblo o RTVE.

Legislatura larga

Es más, el líder del Ejecutivo sugirió que esta oferta de Gobierno estable se mantendrá para los “40 meses” que restan de legislatura aunque no se aprobaran unos nuevos Presupuestos. Así apeló a las fuerzas parlamentarias a que decidan si “además de estable y larga (la legislatura) será también fecunda y fructífera”. De esto se desprende que no vincula la duración de su mandato a la obtención o no del fruto presupuestario.

Aunque, dicho todo esto, Sánchez, reconoció no ser “inocente” y recalcó que pide “unidad y no unanimidad”. Así, precisó que el apoyo al Ejecutivo respecto a las cuestiones citadas no implica “renunciar a los valores o ideologías sino acompasarlas a un bien superior: la recuperación del país”.

Sánchez adelantó también que el objetivo del Gobierno es que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presentará a la Comisión Europea, eleve la capacidad de crecimiento del país: “Será el plan que llevemos a las instituciones comunitarias, a Bruselas, un plan que según las estimaciones del Gobierno impulsará el crecimiento económico en el largo plazo en nuestro país en un 2% del producto interior bruto, por encima del 2% del producto interior bruto”, dijo de forma algo confusa e imprecisa. Fuentes próximas al Ejecutivo aclaran que lo que quería transmitir el presidente es que el Gobierno espera que el plan eleve el crecimiento potencial español a una tasa que se sitúe por encima del 2% anual.

Pero para ello consideró “inexorable” e “inapelable” acelerar varias reformas de la economía y la sociedad española. Se refirió en concreto a “cuatro vías de actuación”. La primera de las que citó fue la “transformación digital” porque es dónde está, según dijo, “el futuro de nuestras empresas”. El presidente aseguró que alrededor del 40% del PIB europeo estará digitalizado en 2021, por lo que dijo que será esencial “transformar la capacidad digital de los trabajadores, las pymes y la economía social”.

La segunda de estas cuatro vías de actuación afecta a la “transición ecológica”. De ella dependerá en España “el crecimiento económico potencial, la creación de empleo y la perdurabilidad de las empresas”.

En tercer lugar se refirió a la “cohesión social y territorial”. En este punto pidió que España que siga la lógica del fondo de recuperación europeo, basada en que “no se ensanchen las diferencias entre los países”. En este caso, abogó “acabar con la pobreza severa”. Sobre esto último, Sánchez se refirió al ingreso mínimo vital, que se aprobó “gracias al Gobierno de coalición”, reconociendo así la insistencia de los ministros de Podemos para sacarlo adelante durante la pandemia. Y, finalmente, apuntó a intensificar la agenda feminista del Ejecutivo.

Empresarios y políticos acuden a la cita con Pedro Sánchez

Personalidades del mundo económico, social y cultural han acudido hoy (1/9/20) a la Casa de América en Madrid.

La Patria Financiera: José Ignacio Goirigolzarri (presidente de Bankia), Ana Patricia Botín (presidenta de Banco Santander) y Carlos Torres (presidente de BBVA) durante la conferencia.

La Patria Contratista: La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo (de espaldas) y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversan con el presidente de ACS, Florentino Pérez (también presidente -cuasi vitalicio- del Real Madrid, club de fútbol)



La Patria Sindical: El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (1i); charla con el secretario general de CCOO, Unai Sordo (1d), tras la conferencia ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los grandes del Ibex

El discurso de Sánchez estaba así más dirigido a los políticos que no acudieron a que las grandes personalidades presentes. Entre ellas se encontraban alto dirigentes del Ibex 35 como Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander; Florentino Pérez, presidente de ACS; José Ignacio Galán (Iberdrola), el consejero delegado de Inditex, Pablo Isla; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri; Carlos Torres Vila (BBVA), el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales; Isidre Fainé (Caixabank), Antonio Brufau, presidente de Repsol; Beatriz Corredor (REE), Ignacio Madridejos, consejero delegado Ferrovial; o Maurici Lucena (Aena), entre otros. Todos ellos aprovecharon los minutos previos al evento para saludar a los ministros e intercambiar impresiones aunque las mascarillas, que no siempre estaban bien puestas, han impedido atisbar el tono de los encuentros.

No acudió al encuentro, sin embargo, el presidente de Iberia y futuro consejero delegado de IAG, Luis Gallego. Tampoco se pudo ver a Francisco Reynés, presidente de Naturgy o al jefe de Colonial.

Dentro del mundo económico, también acudió al encuentro Eduardo Abad, presidente de UPTA, que aprovechó la ocasión para denunciar que el colectivo está “tocado de muerte”. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y los representantes de los sindicatos UGT (José María Álvarez Suárez) y CCOO (Unai Sordo) también escucharon el discurso del presidente. Tras el mismo, Sordo compareció ante los medios y apoyó el mensaje de Sánchez de pedir unidad a los partidos y agentes sociales para que “la legislatura sea fecunda”, pero con matices y siempre dependiendo de las políticas y los Presupuestos que se promuevan. “La unidad se tiene que definir con políticas y en los presupuestos generales. La clave es qué componen los presupuestos y no con quien se aprueban”, aseguró Sordo, que pidió evitar vetos.

**Los empresarios del Ibex, ante el Presidente “rana”**

(Lo que sigue, es parte del artículo de Jesús Cacho publicado en Vozpópuli - **31/8/20**, bajo el título de: “La desvergüenza de Pedro y la falta de vergüenza del Ibex”

(…)

Lo del presidente fanfarrón y su “Conferencia España puede” fue un insulto a la inteligencia del español medio. Un sermón lleno de tópicos de todo a cien, propio de tienda de chinos. Puro bullshit. El político que deliberadamente ha divido a la sociedad española en dos bloques irreconciliables como nunca antes lo había estado, reclamando cien veces unidad, no se sabe bien para qué aunque se adivina, para caminar tras sus botas cual ratoncitos persiguiendo miguitas, que no para acabar con la pandemia y su destrozo económico, cosa que no parece importar mucho a quien ha tenido los santos bemoles, en el peor momento imaginable, de irse tres o cuatro semanas de vacaciones. Tan moreno, tan pintón, tan repeinado ha vuelto el gachó, tan campante, mientras el país entero asiste, el corazón en un puño, al torrente de los rebrotes y a una crisis a la que no sabe cómo hacer frente, porque a su imperial majestad solo le importa reinar aunque sea sobre un montón de escombros, eso sí, con los gloriosos empresarios del Ibex por testigos, ¿pero qué hacen ahí esos mamones?, postrados a sus pies, que alguno solo le ha faltado la genuflexión.

¡Una de propaganda, marchando! Un prodigio de talento y resiliencia (la palabra que le tiene encandilado) para lo suyo, exclusivamente para lo suyo. El sujeto tapa su inanidad intelectual y política con sobredosis de supuesta actividad, reuniones y convocatorias, citas y conferencias, ruido, mucho ruido, ruido silente y vacío. Una interminable campaña de marketing destinada a gestionar su imagen, porque es lo único que sobradamente ha demostrado saber hacer con la ayuda de los Media y la televisión por fiel infantería. Sermón absurdamente triunfalista, capaz de avergonzar a cualquier cabeza decentemente amueblada, sobre esta pobre España postrada en la UCI de los países sin futuro. Ni asomo de autocrítica en este narciso pagado de sí mismo.

Sánchez pide el apoyo de Casado a unos Presupuestos que nadie conoce. A falta de ese encuentro previsto para el miércoles, Su Señoría no ha hecho ningún acercamiento, ni banal ni serio, ninguna oferta o propuesta, ni siquiera sondeo o consulta, para ver de lograr el apoyo del PP a los Presupuestos, cosa que seguramente resultaría reconfortante para millones de españoles. El que no se cansa de pedir “unidad” ya ha dicho que jamás pactará nada con la derecha. Y para que no quepan dudas, se lleva del brazo a su conferencia, a esa hortera convención american style, a los señores marqueses de Galapagar, para dejar claro a Casado que nuestros Ceaucescu no van a salir del Gobierno mientras yo les necesite, como tampoco esos amigos de la felicidad y el progreso de los españoles que son los separatistas catalanes y los nacionalistas y bildutarras vascos.

Particular asombro producen esos empresarios de cuerpo presente reunidos tras la incuria que nos gobierna, arropándolo, haciéndose cómplices de su no-gobierno, alineándose con la mentira después de haber acabado con ese ejemplo de dignidad política que es, que fue, Albert Rivera. El presidente los utiliza como un clínex de usar y tirar. Botín, Isla, Fainé, Pallete, Galán o Garamendi. A él solo le importa el marketing, la propaganda. Ellos lo saben y por eso les abochorna comparecer acabado el acto para valorar lo escuchado. La desvergüenza de Pedro y la falta de vergüenza del Ibex. Todos hacen mutis por el foro lo más rápidamente posible, sabiéndose en el fondo humillados tras haber tomado parte en este teatro de marionetas en el que nadie cree.

El Sánchez “sobrao” en la desgracia ajena ha terminado su sermón recordando a la gran mayoría de españoles que no le votó, 120 diputados os contemplan, que la legislatura va a ser “larga y estable” (“Tenemos por delante 40 meses decisivos”). Larga y estable, ha repetido dos veces en hispánico trágala, o lo que es lo mismo, no me queréis, lo sé, pero me vais a tener que soportar durante 40 meses y lo que venga. De modo que a los españoles senior no nos va a quedar más remedio que jodernos y aguantarnos; a los jóvenes bien formados y con ganas de labrarse un futuro les queda la alternativa de salir corriendo de este país condenado a la irrelevancia y a la miseria. Mientras España se desliza por la cuesta abajo, una nueva sesión de propaganda. Eso ha sido todo. Y mañana será otro día.

**“España puede. Recuperación, Transformación, Resiliencia” (sic). Los empresarios sumisos, lacayos y genuflexos, “arriman el hombro” para salvar al “soldado” Sánchez**

(Los ‘palmeros’ del Ibex, felices de haberse conocido, y el ‘talk show’ del presidente ‘rana’)

El Ibex al completo estuvo presente en la puesta de largo del curso político de Pedro Sánchez. La Casa de América en Madrid fue testigo de un acto con poco contenido, pero con un importante gesto, el de los empresarios que acompañaron al Presidente del Gobierno a la espera de que el Ejecutivo de coalición no pierda el norte de la recuperación, genere certidumbre, mantenga la estabilidad económica y respete el compromiso de contar con ellos para decidir el destino de los fondos europeos.

En el acto de este lunes titulado España Puede, acudieron a la cita con Sánchez primeros directivos como José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Pablo Isla (Inditex), Ana Botín (Santander), Carlos Torres Vila (BBVA), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Manuel Entrecanales (Acciona), José Bogas (Endesa), Marta Álvarez (El Corte Inglés), Florentino Pérez (ACS), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), e Isidro Fainé (Criteria Caixa).

El presidente del Gobierno pidió a los líderes de las empresas más importantes de España “unidad” para impulsar su agenda política y prometió que el plan de recuperación que mandará a Bruselas impulsará un 2% el PIB si sale adelante. No lo dijeron en público, pero los empresarios piden a cambio que este sea el punto de partida para que Sánchez ponga fin a los mensajes contrarios al sector y cuente con la empresa para ejecutar su plan económico.

Todos los empresarios confiaron en que la petición de apoyo planteada por el Gobierno, que ha quedado plasmada con su asistencia generalizada al evento, sea correspondida con el freno de los cambios estructurales que puedan enturbiar la recuperación económica y -lo que es más importante- con su colaboración para decidir cuáles y cómo serán las transformaciones que debe llevar a cabo nuestro país en materia económica.

Los grandes empresarios quieren que se deje de hablar de cambios en la reforma laboral y de subir impuestos, pero en especial demandan un compromiso activo y hechos que demuestren que los 141.000 millones de euros que entregará Europa a nuestro país se sometan a un gran debate de colaboración público-privada.

A mediados de junio (2020), la patronal CEOE organizó un gran evento de dos semanas en las que todos los líderes de las grandes empresas -de todos los sectores- dieron sus recetas para reconstruir España. A modo de conclusión de estos encuentros, los empresarios solicitaron al Gobierno de Pedro Sánchez que contara con el sector para decidir el destino de los fondos europeos.

Los empresarios no piden participar a título personal, sino que sean representados por expertos independientes en todos los sectores. Según medios especializados, ya se han realizado los primeros contactos para constituir estos grupos sectoriales interdisciplinares que, con miembros del sector público y privado, dibujarán las líneas básicas de la reconstrucción del país: ese gran plan de recuperación al que se refirió Sánchez en su “talk show” (Aló Presidente).

El nuevo departamento encargado de decidir el destino de los fondos europeos estará coordinado por la Oficina Económica de Moncloa, dirigida por Manuel de la Rocha, aunque con representación de todos los ministerios y departamentos, en especial de sectores como Digitalización o Transición Ecológica.

Del lado de los empresarios, se ha creado la nueva Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos con la que tratarán de impulsar la presencia de las empresas españolas en el reparto de los esperados fondos de la Unión Europea. Según los medios, el encargado será Luis Socías Uribe.

No obstante, desde la empresa esperan que estos grupos comiencen a trabajar y a sacar conclusiones lo antes posible. El primer horizonte es 2021, año en que se recibirán al menos 31.000 millones de euros del primer tramo de ayudas europeas.

En la empresa esperan gestos reales por parte del Presidente. De hecho, algunos ya manifestaron públicamente sus preocupaciones. Minutos antes de participar en el acto de Moncloa, el presidente del BBVA, Carlos Torres, pidió estabilidad fiscal y presupuestaria para generar confianza económica.

A su juicio, generar confianza “es la mejor manera para potenciar la inversión privada, que en el medio plazo es la que ayuda a crear empleo”. Para ello, aboga por implementar desde ya reformas estructurales apelando a la seguridad jurídica, una fiscalidad eficiente y un compromiso firme con la estabilidad presupuestaria.

Respecto del reparto de los fondos europeos, ha indicado que serán claves para poner en marcha las reformas estructurales necesarias. A su juicio, lo ideal sería destinar los fondos a pymes y sectores con mayor efecto multiplicador a largo plazo, también con inversión en otros sectores ya consolidados como sanidad, energía, transporte, turismo e investigación.

Por su parte, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha hecho hincapié en la importancia de realizar una serie de reformas que permitan dejar atrás parte de las ineficiencias de la economía española. El directivo, al igual que Torres, participó en la inauguración de los cursos de verano de la APIE.

Huertas también ha llamado a aprovechar la próxima inyección de fondos fruto del acuerdo europeo de este verano para abordar una reconstrucción del modelo productivo español. “Tenemos la oportunidad de aprovechar el dinero europeo para saltar hacia el futuro con un nuevo contrato económico y social”, ha indicado. Torres y Huertas no son los únicos que están preocupados.

Los capataces del Ibex, son fieles adoradores del poder que emanan los altares del BOE.

Que el anfitrión del entente sea el presidente de Gobierno más fatuo, endiosado y despótico de la historia reciente de España, no es problema. Todo se resume a un ejercicio de flagrante hipocresía, de farisaica desvergüenza, que los allí congregados, que oficiaban el papel de meros comparsas, sonrientes y sumisos, campanilleros y palmeros, acogieron con entusiástico asentimiento, como si se les estuviera convocando a una gesta prometeica.

**Todo lo que sea necesario para mantener los contratos públicos, las subvenciones, las prebendas, las connivencias, las corruptelas, los chiringuitos y las mamandurrias…**

**Todo lo que sea necesario para mejorar la cotización de las acciones, aumentar los dividendos, asegurar la retribución variable, alcanzar los “bonus” esperados, mantener puestos los “paracaídas de oro”, y bien engrasadas las “puertas giratorias”…**

**En definitiva: Todo sea por la Patria (Financiera, Contratista, o Sindical…). Todo sea para poder seguir metiendo la cuchara en la sopa boba del puchero público.**

**Lo de siempre en España: el Poder Económico (perenne) comulga con el Poder Político (temporal)… Pero ¿con todo Poder Político? Inclusive ¿con un régimen iliberal? ¿con unos líderes liberticidas? ¿con aquellos que quieren acabar con el capitalismo?**

**¿Cualquier cosa a cualquier precio? Evidentemente, NO.**

**Lenin dijo: “los capitalistas nos venderán la soga con que los ahorcaremos”.**

**Tal vez, los líderes del Ibex 35 (grandes aplaudidores de los “Leninines” celtibéricos), deberían reflexionar al respecto.**

**Tal vez, los líderes del Ibex 35 deberían preguntarse si no están buscando la rentabilidad empresarial en los lugares equivocados (o con la gente equivocada).**

**De seguir en la misma, apoyando a cualquier “illuminati” que ocupe la Moncloa, si no están dispuestos a quitarse la careta, y defender la propiedad, la libertad económica, la igualdad ante la ley, la inversión, el mercado, la creación de empleo… más les vale ir ahorrando para el entierro. Los “Leninines” ya tendrán la soga que le vendió el Ibex 35.**

**- Viajando en el tiempo: la “peronización” de España (Parte II). Los “cortesanos” del poder (la orquesta del Titanic): Patria Financiera, Patria Contratista, Patria Sindical…**

- Los empresarios españoles piden unidad y consenso para la reconstrucción económica (Cinco Días - **4/9/20**)



La orquesta de Titanic: José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Valencia; Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; Ana Botín, presidenta de Santander; Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; Carlos Torres, presidente de BBVA; y Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Granada.

Ana Botín, la presidenta de Santander, ha respaldado el discurso de unidad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la recuperación tras la crisis y ha instado a un acuerdo entre los grupos políticos: “Hay pocas personas en España que puedan estar en desacuerdo con el presidente. Hay más cosas que nos unen y si nos vamos a los principios el futuro está en Europa, en una economía más sostenible, más digital y más feminista”.

La presidenta de Santander ha participado esta mañana en la primera mesa de debate del pleno extraordinario de la Cámara de Comercio de España dedicada a la reconstrucción y recuperación de la economía, en la que también han intervenido Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra, e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.

En este encuentro, Botín ha reafirmado la necesidad de un plan de vivienda para el colectivo joven en el que se facilite una entrada para adquirir una casa además de la inversión de proyectos que generen un efecto tractor sobre otros sectores. “Todos los proyectos que van a generar empleos y que van a pagar impuestos y pensiones tiene que ser sostenibles. El Gobierno va a presentar una gobernanza para que haya responsabilidad y se pueda seguir el efecto de los fondos”.

Por su parte, Abril-Martorell ha pedido que en el plan de recuperación en el que trabaja el Gobierno se impulse la reindustrialización y la formación en capacidades digitales para garantizar la mayor empleabilidad. “La actividad se va a recuperar pero nadie garantiza que el empleo se recupere en los mismos términos. Si no mejoramos la productividad y el valor añadido acabaremos compitiendo solo a base de salarios bajos y devaluaciones y el objetivo es mejorar la vida de las personas”, ha expresado.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, en el discurso inaugural del pleno, pidió a los grupos políticos un acuerdo en cuanto los presupuestos generales del Estado además de colaboración entre empresas y administración para superar la crisis. “En la colaboración público-privada está la clave para salir airosos de este trance. Sin la participación decisiva de las empresas no habrá solución a la crisis”.

En el cierre de la primera mesa, Ignacio Sánchez Galán ha reclamado un esfuerzo por crear un marco regulatorio predecible para atraer inversiones que permitan obtener liquidez y evitar despidos o paralización de las empresas. “Hay que tener marcos atractivos y predecibles que atraigan y no asusten, porque si no lo hacemos lo harán otros”.

En ese sentido ha destacado las medidas de alivio acometidas por Iberdrola durante la gestión de la crisis: “Estamos poniendo nuestro balance a disposición de las empresas. Hemos duplicado el volumen de inversión estos meses para evitar que las empresas proveedoras recurrieran a ERTE y hemos adelantado pedidos. Además estamos acelerando todo lo que podemos la formación de la plantilla”.

Mismas reglas para todos

En la segunda mesa de debate, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, reclamó también un marco regulatorio europeo para que todas las compañías tecnológicas y digitales compitan en las mismas condiciones. “Mismas reglas, mismos servicios, mismas obligaciones. Nosotros competimos con gente que no está regulada, y yo no quiero que les regulen, pero si ellos no están regulados, desregúlame a mí porque es imposible competir en desigualdad de oportunidades”, ha destacado.

En ese sentido ha valorado que Europa “puede ser pionera en establecer las nuevas reglas del juego” del mercado de las telecomunicaciones y además de una constitución que regule la de los datos personales de los usuarios. “Los datos son propiedad de las personas y en estos momentos se expropian datos sin una contrapartida clara”, ha defendido.

Por su parte, la presidenta de HP en España, Italia, Francia y Portugal, Helena Herrero, ha asegurado que en un contexto como el actual ha terminado la era de la globalización tal y como la entendíamos antes, ya que a partir de ahora va a ser digital, sostenible y centrada en las personas. Además, ha instado a acelerar el proceso de digitalización en las pymes para que crezcan en tamaño y formen parte del ecosistema global, lo que redundará en “el empleo, la riqueza, el talento y la competitividad”.

Finalmente, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha pedido al Gobierno que se apoye en la iniciativa privada para garantizar que se da un uso correcto a los fondos europeos para la recuperación y tengan así un efecto multiplicador, al tiempo que ha reiterado la importancia de generar confianza inversora con seguridad jurídica, estabilidad presupuestaria y una fiscalidad eficiente. “Tenemos una oportunidad histórica de invertir los 140.000 millones de fondos europeos, lo que tenemos es que apalancarnos en la iniciativa privada para que ese dinero sea diez veces más y las inversiones tengan buen fin”, ha expresado el directivo.

Al igual que los ponentes que le precedieron, Torres ha llamado a poner el foco en las pymes, que suponen dos tercios del empleo en España y son las que presentan mayores carencias de competitividad. En este sentido, el presidente de BBVA ha apuntado a garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible, así como un modelo productivo que abrace las nuevas tecnologías.

“La digitalización reduce los costes de intermediación. Se abre un nuevo mundo, todas las empresas tienen que estar viendo eso”, ha apostillado Torres, quien ha recordado que solo el 10% de las empresas de menos de 10 empleados utilizan tecnologías en la nube.

**Los empresarios con “código de barras” y el “dilema del prisionero” (o tal vez sea el, ¿síndrome de Estocolmo?)**

El **dilema del prisionero** es un problema de la teoría de juegos. El dilema del prisionero analiza los incentivos que tienen dos sospechosos de un crimen para delatar a su compañero o proclamar su inocencia.

El **síndrome de Estocolmo** es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro, o persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía.

Neurociencia. Ciencia que estudia cómo funciona el sistema nervioso. Intenta dar respuesta a cuál es la estructura del cerebro, cómo se desarrollan las capacidades cognitivas y de qué forma surgen las enfermedades cerebrales. Se nutre de la biología, la psicología o la neurotecnología, entre otras.

¿A falta de inteligencia personal (y empatía) los empresarios del Ibex 35, podrán reemplazarla con inteligencia artificial?

¿Es posible que el empresariado español acepte que los problemas económicos (muchos de ellos causados por el gobierno que jalean) se resuelvan por medio de la “realidad virtual”?

¿Se puede apoyar a un gobierno por reducción al absurdo?

**Realidad virtual**: cuando la rehabilitación se convierte en un juego (**gamificación**)



Algunas tecnologías se están reinventando: sucede con la **realidad virtual**, que está vinculada al mundo del entretenimiento y los videojuegos pero también resulta ser prometedora para rehabilitar a pacientes con enfermedades neurológicas. Esta patología puede provocar problemas de movilidad, de equilibrio, problemas con las extremidades, alteraciones sensitivas, visuales, cognitivas y fatiga.

La doctora Virginia Meca, neuróloga y coordinadora de la Unidad de Enfermedades Desmielinizantes del Hospital de la Princesa, propone utilizar las gafas de realidad virtual para rehabilitar a los pacientes con esta enfermedad. “Antes de iniciar este proyecto veíamos dificultades en los pacientes para mantener la rehabilitación. Pensamos que convertir el proceso en un juego podría ser atractivo para que cumplieran esta parte de su tratamiento”, cuenta Meca. Al ponerse las gafas, los pacientes pueden elegir entre varias pantallas que les proponen distintas actividades que les sirven para ejercitarse. “Aunque no sustituye a la rehabilitación convencional, nos ayuda a mejorar la adherencia”, cuenta la doctora Arancha Vázquez, médico rehabilitadora del mismo hospital. El objetivo es que los pacientes puedan hacer los ejercicios en casa. “Intentamos adaptar los recursos de la Seguridad Social, porque este tratamiento se aplica en la sanidad pública”, cuenta Vázquez. En un futuro, también buscan poder aplicarlo a otras enfermedades con síntomas similares.

“Podemos coger algunas de las lecciones que hemos aprendido de la gamificación y aplicarlas a las intervenciones médicas para fomentar la adherencia y facilitar la participación”, coincide Walter Greenleaf, erudito del Virtual Human Interaction Lab en la Universidad de Stanford, que realiza investigaciones sobre nuevas intervenciones para la depresión, el autismo, el síndrome de Asperger y las adicciones.

“A la hora de tratar adicciones, podemos ofrecer al paciente un entorno virtual para practicar sus habilidades de rechazo o su confianza; con pacientes con trastorno del espectro autista, podemos ensayar las interacciones sociales y exagerar la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, las expresiones faciales…”, explica Greenleaf. Las aplicaciones de esta tecnología para ayudar en la recuperación de los pacientes son múltiples.

Ahora que la realidad virtual ha dejado de utilizarse solo para jugar, las grandes tecnológicas han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de esta tecnología. “Y no van a recuperar esa inversión a través de la industria del entrenamiento y de los videojuegos”, asegura Greenleaf. “El sector médico es uno de los que más está invirtiendo en este ámbito”.

¿Será esta la solución económica que propone el “iluminado” Sánchez a los empresarios del Ibex 35? Que la “realidad virtual” (feliz) sustituya a la puta realidad” (infeliz). Maravilla.

Y mientras tanto, el “pueblo” de verdad, ese que está en un ERTE (rezando para que no se convierta en un ERE), ese que tiene un empleo precario, ese que es un falso autónomo, ese que se quedó sin trabajo, ese que es un becario eterno, ese que es “rider” de Glovo o Delivery, ese que es un personal de usar y tirar, está “todo contento, de ver tanta maravilla”.

**Remembranzas: “todos unidos triunfaremos” (lema peronista, de la primera época)**

Como dice el viejo chiste, la predicción es difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Nadie puede decir a ciencia cierta lo que sucederá en los próximos meses y años, porque las acciones y las crisis actuales (sanitaria y económica), están cambiando constantemente los posibles resultados. Aun los planes más meticulosos podrían frustrarse frente a acontecimientos inesperados. Pero lo que los responsables de las políticas pueden y deben hacer es considerar diferentes escenarios basados en las características y tendencias actuales.

Cuando se trata de España la estrategia más sensata es mirar primero por el retrovisor, para “recordar”, y luego mirar para adelante e “imaginar” todas las posibilidades, por más inverosímiles que puedan parecer hoy. Y ahí aparece la “larga sombra” de Argentina.

Mirando el pasado uno puede imaginarse algunas de las cosas que pudieran ocurrir, hasta dónde la vista alcanza. Y ahí aparece el “fantasmón” de Argentina.

Mirando el pasado de despilfarro fiscal en España (ganar las elecciones a fuerza de gasto público), uno puede anticipar un proceso acelerado de argentinización (en su faceta peronista, que es la más nefasta y prolongada). Por eso, es importante recordar los peligrosos “lados oscuros”, y presentir las “siniestras pesadillas”, de Argentina… Por sí, más que probable (casi seguro) a España se le diagnosticara un “peronavirus” metastásico.

Tal vez la vieja creencia de los socios económicos de España en que “al final harán lo correcto”, ya sea cosa del pasado. Por eso hay que mirar la experiencia de Argentina, por si España, se infecta del mismo “ceteris paribus”… por si España, sigue demorando su propio momento de decisión. Por si los avestruces siguen sin sacar la cabeza del agujero.

Para no aparecer como un pesimista patológico o un alarmista excesivo, prefiero que un periodista argentino (que leo con frecuencia, admiración y respeto) les haga algunas precisiones, sobre la “sensación térmica” de la crisis en Argentina. Cualquier paralelo con la España presente (y peor aún, con la futura), lo dejo a juicio del lector.

- La Argentina sufriente (La Nación - **4/9/20**)

La sociedad agotada y dolorida, se vuelve hacia el gobierno y sólo encuentra la mirada gélida del desinterés, un presidente contradictorio y ningún liderazgo ni empatía en qué apoyarse.

(Por Dardo Gasparre)

Lacerado, atemorizado, agredido, enojado, desesperado, dividido, sufre el cuerpo social argentino. Le duele lo que le está pasando, o lo que le están haciendo, cómo piensan muchos. Lo golpea la pandemia, que lo llenó de miedo verdadero y de miedo fomentado, un miedo sincronizado, que nació en la OMS y en miles de opinadores que poblaron los medios mundiales y que localmente se aviva con cada admonición o reto de cualquier funcionario de primera o de cuarta. Lo hiere no saber, escuchar tantas versiones y no creer en ninguna, le duelen, con razón, las muertes y la muerte, el riesgo de su propia vida y la de sus seres queridos, y más lo hiere cuanto menos recursos intelectuales y económicos tiene, cuanto más precarias son sus condiciones de vida; y tiene razón. Lo aterroriza adivinar que puede morir de cualquier otra cosa porque los hospitales están retaceando las intervenciones a pacientes de otras patologías graves, o porque teme salir con bien de una operación pero contagiarse y morir de Covid.

Paralelamente, el argentino también está enfermo de cuarentena, que percibe como una enfermedad distinta inducida. Padece y se indigna. Por la negación dialéctica del presidente, al borde del absurdo cuando grita que la cuarentena no existe y a continuación amenaza con retrotraer a Fase 1 por recomendación de consejeros ad hoc. Ese argentino que se exaspera cuando intuye que se perdió inútilmente el tiempo de encierro y que no se fue eficiente en el objetivo que se le dijo que se buscaba: aplanar la curva de contagios y preparar el sistema de salud para poder atender a quienes lo requiriesen. Percibe que ha pagado un duro precio, pero la ineficacia o la inutilidad de los funcionarios no estuvo a la altura de ese esfuerzo…

Difícil no sentir miedo e incertidumbre, no desesperarse, no enardecerse, no gritar, no padecer. Y entonces los ciudadanos escuchan a los gobernantes que les dicen que tienen la culpa del recrudecimiento de los contagios, y se llenan de desesperanza y bronca.

La cuarentena inexistente tiene otras consecuencias dolorosas indelebles. La de los niños sin escuela, con lo que eso significa en los sectores marginales y pobres al quebrarse el único brote de esperanza. El daño irrecuperable de un niño sin estímulos sinápticos. El de las familias rotas por la cercanía o por la lejanía. La tragedia de no poder acompañar en la muerte a un ser querido. (…) Sin embargo, el presidente dijo no estar muy al tanto del tema. ¿Es una excusa o es cierto? Las dos cosas son indefendibles.

Y en otra realidad paralela, los vecinos haciendo de policía y la policía haciendo de Gestapo de cabotaje. Un gueto de Varsovia en cada edificio o cada barrio, con denuncias, ataques, vejaciones, muy lejos de la compasión, el respeto y el derecho. Consecuencia de la falta de autocontrol, liderazgo y templanza de las autoridades. Peligroso momento en que el miedo y el sufrimiento pueden transformarse en odio o venganza. La contagiada también fue la Patria.

El trabajador que ha visto desaparecer sus ahorros, su empleo y su futuro, tiene miedo y sufre su impotencia. Como la Pyme que ve que su negocio ha muerto y que debe echar a sus empleados de toda la vida. O el agricultor que sabe que ha perdido lo que su familia construyó. Aún el más encumbrado sabe que será despojado con algún impuesto a mano armada, alguna regulación o algún cepo que no servirá para nada. Un famoso economista sugiere que para aliviar la demanda de dólares se debe pedir a los exportadores que liquiden anticipadamente las ventas de los próximos meses. Nadie se salva de sufrir. Ni de que lo tomen por idiota. Todos saben que el futuro está vacío.

¿Qué siente el que ve que se muere su bar, su restaurante, su empresita, que además es peloteado cada vez que algún Kicillof (\*) decide que para salvar su ropa de las críticas va a retroceder la fase y lo va a mandar a la casilla uno del juego de la asfixia paulatina?...

Y también sufre y se agita la Nación. Los terrenos alevosamente usurpados en el conurbano, con la anuencia de cómplices punteros y de gobernantes que ofendieron a la sociedad al sostener que se trataba de una cuestión habitacional constituyen mucho más que un negocio perverso que burla al derecho y fomenta el delito. Son un mecanismo más de disolución de las instituciones, de ataque frontal a la libertad y al derecho de propiedad, base de nuestra Constitución y de nuestro contrato social, elemental para una inversión privada que se declama promover, pero que en los hechos se ahuyenta por simple presencia… Fue humillante y penoso que los dueños de casas tomadas en la costa mendigaran por un permiso para ir a recuperarlas. No son millonarios con mansiones en el Caribe, sino gente que ahorró años para comprarlas. Aún no se lo dieron, por el sistema de aduanas interiores que tolera el gobierno…

Una opción durísima pero posible

Ante tal suma de frustraciones y avasallamientos, no sorprende que muchos argentinos hayan empezado a pensar en emigrar, una alternativa que parecía muy remota cuando la utilizaban los cubanos, los venezolanos, o los sirios. Pero que ahora se ha transformado en una opción durísima pero posible. La reacción de muchos miembros del gobierno es decir que se trata de ricos que se quieren salvar de los impuestos supuestamente justos e imprescindibles inspirados por el máximo heredero presidencial. El hubris del poder les impide comprender el enorme dolor que significa el autoexilio.

Mientras hace creer a los ilusos que lo único que quiere es su impunidad y alguna venganza, Cristina Kirchner avanza en realidad con un plan -el único que vale y no cambia- que pasa por la pulverización de la república, la sumisión de la justicia, el cambio de las reglas electorales para entronizar a su hijo en la presidencia, la reforma de la Constitución si puede coimear con populismo a la ciudadanía para convocarla y la Patria Grande que soñó con sus socios y amigos. Con su fría mirada incapaz de empatía, grita “que coman brioche”, si le dicen que el cuerpo social argentino cruje de dolor y que la población pide clemencia, como alguna vez lo hizo María Antonieta cuando el pueblo le pedía pan. No sólo no leyó las materias finales de su seudocarrera. Tampoco leyó historia.

(\*) Kicillof (anterior ministro de economía en el gobierno de Cristina Kirchner y actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, con el gobierno de Fernández y Fernández)

**¿Cómo se puede saber si España (ya) padece un “peronavirus” metastásico?**

La autocracia no es el término adecuado para describir este fenómeno, sino más bien la “degradación, corrosión y debilitamiento de la democracia”. Siguiendo la enumeración que hace, Mark Leonard (Director of the European Council on Foreign Relations), sobre el “catálogo de trapos sucios de la política” (Project Syndicate - 3/9/20), podemos resumir:

El primero es la demonización de la historia. Los líderes populistas promueven sus plataformas políticas mediante la polarización y la división social. No les importa alejar e insultar a algunos votantes si con ello energizan a su propia base.

Un segundo enfoque relacionado se podría llamar la política de la posverdad, Estos líderes prefieren comunicarse directamente con los votantes mediante videos profesionales de propaganda y las redes sociales, ya que así pueden evitar hechos inconvenientes que los expertos puedan plantear. En este ecosistema mediático, la comprobación de hechos no tiene mucha demanda, ya que la gente que tiene que conocerla no está dispuesta a escuchar, o se niega a creer cualquier cosa que digan los medios “liberales”.

Una tercera táctica es enfrentarse a su propio gobierno. Al culpar al “estado profundo”, personajes sin rostro y sospechosas camarillas que operan en las sombras, todos estos líderes tienen una excusa lista para cualquiera de sus fallos.

Un cuarto elemento es la supresión de votos. Para un potencial hombre fuerte que ya está en el poder, la necesidad de inclinar las bazas electorales abre la puerta a todo tipo de ataques a los procesos democráticos.

Un quinto artificio relacionado es la “tecnología política”, término para los trucos sucios relacionados comúnmente con la política postsoviética.

Otra táctica autoritaria común es jugar la carta de “la ley y el orden”. Al calificar las protestas sociales como una erupción de actos violentos y saqueos urbanos, se facilita su neutralización por el miedo que causan en el resto de la sociedad.

Creo que España puntúa con nota en los seis trapos sucios de la política. Diagnóstico: “peronavirus” metastásico. Pronostico: “argentinización” terminal.

Una pregunta para los empresarios “palmeros” del Ibex 35: El gobierno de España, ¿impulsa la innovación, capacita a la fuerza laboral y ofrece un ambiente de negocios atractivo? NO. Y entonces por qué carajo aplauden, a quien carajo aplauden, y por cuánto tiempo más, van a seguir aplaudiendo. Sí, ya sé: business are business. Pero muchos funambulistas, se la pegan.

**- El “riquismo” (obesidad mórbida) y el “pobrismo” (adicción extrema), ante la “asnoterapia” del populismo. Agentes sociales: “pleno apoyo” al gobierno, no vaya a ser que alguien mueva el andamio. Hay que mantener sin modificación la “ley del gallinero” (el de arriba caga al de abajo -mientras el gobierno reparte el alpiste).**



Intentando meter de nuevo la pasta de dientes en el tubo

“Saldremos mejores y más fuertes”, decían las coplas del presidente con música de los teclistas del régimen. Nada más falso. Apagados los aplausos, cerrados los balcones y despojados de cánticos y caretas, emerge el auténtico rostro de los estragos de la crisis. El rictus del mal.

Tolerando la incompetencia no se salvan los negocios. El cortoplacismo (miope) y la ceguera (voluntaria), de los empresarios “cortesanos” no mejoran el valor actual de las rentas futuras. Y si no al tiempo…

Nos hemos alejado tanto de la realidad que admitimos una sociedad donde nadie parece hacerse cargo de nada. Una sociedad con “obsolescencia programada” de la responsabilidad.

Y así, entramos en el reino de los profetas, políticos o tecnológicos, para el caso, donde los niños enseñarán al mundo de los mayores que los videojuegos constituían una asignatura universal para manejarse por la economía, la cultura y la estupidez humana. Esa realidad virtual, anhelada. Una economía de “ficción”, apoyada en una economía de “facción”.

Cuando la sensación de euforia bursátil choca con la terrible realidad de caídas masivas de la producción y del empleo, entonces debemos preocuparnos. Y preguntarnos quiénes son los verdaderos responsables de una desconexión que provocará mucho más daño que el dolor que pretende aliviar.

El pecado de vuestra estupidez: como unos empresarios de “pacotilla”, están atentando contra su rol principal, la sobrevivencia de la especie; como clase empresarial, por avaricia, miopía, arrogancia, y cinismo, están cabalgando contradicciones, que atentan contra la supervivencia del capitalismo. Todo para seguir viviendo del manejo desparejo de los fondos públicos.

Vuestras “posiciones en corto” (por decirlo en un idioma bursátil, tan caro a sus intereses), se han separado de los fundamentos económicos y corporativos. Deberían tomar nota… los cheques en blanco, tienen unos riesgos, que no se resuelven con “derivados” o imaginarios “rallies bursátiles” puntuales.

Vuestro “exceso de confianza”, y sobre todo, la inexistencia de “controles y balances” (check and balances), no les podrá librar de las pérdidas, por subirse al tren del populismo, por meterse en la cama con el enemigo.

Estáis (están) haciendo el ridículo, sin frenos, ni ritmo. La relación del “capital” con el “estado” (para asegurar la continuidad del capitalismo) debe ser una relación entre iguales (ni por encima, ni por debajo). Uno debe hacer sus negocios y el otro debe moderar los excesos del mercado. Nada más y nada menos. Todo lo demás, son relaciones peligrosas.

- La corrupción y la COVID-19 (Blog del FMI - **28/7/20**)

(Por Vitor Gaspar, Martin Mühleisen y Rhoda Weeks-Brown)

La corrupción -el abuso de la función pública para beneficio propio- es algo más que un desperdicio de dinero: erosiona el contrato social y corroe la capacidad del gobierno de contribuir a que la economía crezca en forma tal que todos los ciudadanos se beneficien. La corrupción ya era un problema antes de la crisis, pero la pandemia de COVID-19 ha acrecentado la importancia de una gobernanza más sólida, por tres razones.

Primero, los gobiernos de todo el mundo están desempeñando un papel más importante en la economía para combatir la pandemia y tender un salvavidas a las personas y las empresas. Esta mayor intervención es crucial, pero también abre más oportunidades para la corrupción. Para garantizar que los fondos y las medidas ayuden a quienes más lo necesitan, es preciso que los gobiernos cuenten con procedimientos oportunos y transparentes de presentación de informes, realicen auditorías ex post y apliquen mecanismos de rendición de cuentas, y que actúen en estrecha cooperación con la sociedad civil y el sector privado.

Segundo, al deteriorarse las finanzas públicas, los países deben impedir la evasión tributaria y el derroche y la pérdida de fondos que acarrea la corrupción en el gasto público.

Tercero, las crisis ponen a prueba la confianza de la gente en el gobierno y las instituciones, y el comportamiento ético adquiere más relevancia en momentos en que la demanda de servicios médicos es tan elevada. La comprobación de hechos de corrupción podría socavar la capacidad de un país de responder a la crisis con eficacia, profundizando así el impacto económico y poniendo en riesgo la cohesión política y social.

Durante esta crisis, el FMI no ha perdido de vista su labor en lo concerniente a la gobernanza y la lucha contra la corrupción. Nuestro mensaje para todos los gobiernos ha sido claro: gasten todo lo que necesiten, pero guarden los recibos, porque no queremos que en ese proceso la rendición de cuentas quede en el olvido.

En cuanto a la concesión de préstamos, hemos realizado rápidos desembolsos de financiamiento para atender necesidades urgentes. Al mismo tiempo, se ha previsto una ampliación de las medidas de gobernanza para rastrear el gasto relacionado con la COVID-19 como parte del financiamiento de emergencia concedido a los países para combatir la pandemia.

Los países prestatarios se han comprometido a i) realizar y publicar auditorías independientes ex post respecto al gasto relacionado con la crisis y ii) publicar en el sitio web del gobierno las compras y contrataciones vinculadas con la crisis, incluyendo la identificación de las empresas adjudicatarias y sus beneficiarios efectivos. El FMI también se aseguró de que los recursos de emergencia estén sujetos a la política de evaluación de salvaguardias de la institución.

Una reforma a largo plazo más allá de la crisis

Las salvaguardias en materia de gobernanza para la asistencia de emergencia en el marco de la COVID-19 son parte de una iniciativa más integral del FMI orientada a mejorar la buena gestión de gobierno de sus países miembros y sus esfuerzos para combatir la corrupción.

En los últimos años, el FMI ha intensificado significativamente su foco en la gobernanza y la corrupción. En 2018, adoptamos un marco reforzado a fin de lograr que nuestra labor con los países sea más franca, imparcial y eficaz. Esto sentó las bases para nuestra política y respuesta de financiamiento ante la COVID-19, ámbito en el cual una gobernanza más sólida tiene aún mayor importancia.

Recientemente evaluamos los avances logrados en los últimos años y publicamos nuestras observaciones en un análisis del personal técnico. Los aspectos más destacados son los siguientes:

Mantenemos con los países un diálogo más franco y profundo sobre temas de gobernanza. Según muestra un análisis con minería de textos, aumentamos la cobertura de temas relativos a la gobernanza y la corrupción en nuestras evaluaciones anuales de la salud económica de los países y en nuestros programas de préstamo. Las referencias relacionadas con la gobernanza se duplicaron con creces en los informes del personal técnico durante los 18 meses posteriores a la aprobación de dicho marco por el FMI, en comparación con 2017. En 2019, el FMI debatió con los países el tema de la gobernanza con una frecuencia cuatro veces mayor que el promedio registrado en los diez años anteriores. Muy recientemente -por ejemplo- nuestra labor de supervisión se ha centrado en la gobernanza y las operaciones del banco central en Liberia, la fiscalización del sector financiero en Moldova y las normas anticorrupción en México. El personal técnico del FMI está proponiendo recomendaciones más concretas en materia de gobernanza y lucha contra la corrupción.

Los programas de préstamos respaldados por el FMI incluyen una condicionalidad específica relacionada con reformas en el ámbito de la gobernanza y la lucha contra la corrupción, y ahora las mejoras relativas a la gobernanza son un objetivo central de muchos programas

Hemos intensificado las actividades de asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países a fortalecer su gestión de gobierno y sus medidas de lucha contra la corrupción. Procuramos ayudar a los países a mejorar la gobernanza en ámbitos tales como administración tributaria, fiscalización del gasto, transparencia fiscal, supervisión del sector financiero, instituciones de lucha contra la corrupción, y declaración de bienes por parte de los altos funcionarios. Esta labor incluye misiones de diagnóstico de gobernanza en una decena de países, las cuales comprenden un análisis detallado de las deficiencias en materia de gobernanza teniendo en cuenta los marcos jurídicos, y la propuesta de soluciones y su orden de prioridad.

Asimismo, hasta ahora diez economías avanzadas -Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido, la República Checa y Suiza- han participado en la evaluación voluntaria de sus marcos nacionales para limitar las oportunidades de corrupción transnacional. El propósito de las evaluaciones, realizadas por el FMI, es determinar el grado en el cual un país hace dos cosas: 1) penaliza y persigue judicialmente los actos de cohecho cometidos por funcionarios públicos extranjeros y 2) impide que los funcionarios extranjeros oculten el producto de la corrupción en su propio sistema financiero o en la economía nacional. El FMI insta encarecidamente a los países miembros a que se ofrezcan voluntariamente para participar en estas evaluaciones en el marco de los exámenes anuales de la salud de su economía.

Poner freno a la corrupción exige que haya gobiernos comprometidos con las reformas, la cooperación internacional y un esfuerzo conjunto con la sociedad civil y el sector privado. También requiere voluntad política y tenacidad en la implementación de las reformas durante meses y años.

Esta crisis nos llevará a agudizar nuestro enfoque en la gobernanza durante los próximos años debido a los devastadores efectos y costos de la pandemia para las personas y las economías. Los países no pueden permitirse perder valiosos recursos en los mejores momentos, y menos aún durante y después de la pandemia. Si alguna vez ha habido un momento propicio para adoptar reformas anticorrupción, ese momento es ahora.

- El 15 % del gasto público en infraestructuras acaba en la corrupción (Redacción Catalunyapress - **4/9/20**)

La inversión que hacen los estados en infraestructuras no está suficientemente controlada por los gobiernos, lo que provoca que mucho dinero acabe en manos de corruptos. Esta es una acusación que hace el Fondo Monetario Internacional, que asegura que el 15 % del dinero que se destina a infraestructuras acaba en manos de corruptos.

“La inversión pública en infraestructuras jugará un papel clave en la recuperación. Pero con los recursos limitados, los Gobiernos deben gastar el dinero de los contribuyentes sabiamente en los proyectos correctos. Para ello, los países necesitan una buena gobernanza de la infraestructura: instituciones y marcos sólidos para planificar, asignar e implementar una infraestructura pública de calidad”, afirma el FMI en un informe titulado “Bien gastado: cómo una sólida gobernanza de la infraestructura puede acabar con el desperdicio en la inversión pública”.

Además, denuncia que “con demasiada frecuencia, la inversión pública genera una infraestructura cara y de mala calidad, con beneficios limitados para las personas y la economía. Tiende a involucrar proyectos que son grandes, a largo plazo y complejos, todo terreno fértil para la corrupción, las demoras y los sobrecostos. Una sólida gobernanza de la infraestructura es clave para reducir este desperdicio”.

Referencias a España

En el informe también se hace referencia a España. En concreto asegura que durante las dos décadas que van desde 1995 a 2016 “la falta de transparencia en las licitaciones públicas condujo a prácticas corruptas”. Cita el caso del aeropuerto de Ciudad Real “que no pudo garantizar un mínimo de demanda y tuvo que cerrarse unos años después de su construcción”. También hace referencia a la quiebra de las autopistas y el rescate que el Estado ha tenido que hacer de muchas de ellas.

Además, el informe considera que hay soluciones para evitar que este tipo de corrupción se repita. “Liberar este potencial debería desempeñar un papel importante a medida que los países se recuperan de la pandemia. La buena noticia es que las pérdidas de eficiencia y el despilfarro en infraestructura no son inevitables. Nuestras estimaciones muestran que más de la mitad de estas pérdidas podrían compensarse mediante una mejor gobernanza de la infraestructura”, dice.

Y añade: “La inversión en sistemas de salud, infraestructura digital y sostenible con el medio ambiente puede mejorar la vida de las personas, conectar los mercados y mejorar la resiliencia de los países al cambio climático y las pandemias futuras”.

¿Es posible saber si los empresarios “cortesanos” (que le bailan el agua a los gobiernos populistas -de derecha o izquierda- están haciendo lo correcto?

¿Cómo interpretamos los intentos de los empresarios por “convivir” (y medrar) con el gobierno de turno? ¿Están haciendo lo correcto, en lo económico, en lo ético, o en lo social?

La crisis financiera (2008), o sanitaria (2020), han resaltado ciertos asuntos éticos que son muy difíciles y que justifican soluciones de compromiso, concesiones.

Algunos de esos problemas se presentan en tiempos de normalidad, pero quizás de una forma no tan visible o dramática.

Por ejemplo, evaluar el costo en la economía, en términos de dinero, de salvar vidas (crisis sanitaria), o empleos (recesión - depresión) es un planteamiento con el que no están muy familiarizados los gobiernos (por su costo electoral), y muy poco interesados los empresarios (si no les afecta directamente). No es una pregunta muy cómoda de responder:

¿Cuánto dinero invierto en mejorar las carreteras para prevenir accidentes de tránsito? ¿Cuánto invierto en fármacos o en el sistema sanitario en general para mejorar la salud de las personas y evitar muertes? ¿Cuánto dinero dedico a sostener el desempleo? ¿Cuántos fondos debo aplicar para recuperar la economía?...

Le tienen que poner un precio a la cantidad que están dispuestos a pagar para salvar una vida, un empleo, un pobre, una empresa, un banco, una escuela, un puente, un camino, un puerto…

Este tipo de cálculos son los que deben (deberían) hacer los gobiernos todo el tiempo, pero en el contexto de las crisis (económica o sanitaria) se hacen muy visibles.

En ese contexto, los diferentes gobiernos tomarán decisiones distintas y no sabremos hasta dentro de muchos años, cuando miremos hacia atrás, qué país hizo la elección que resultó más ventajosa, aunque de momento es muy difícil saber cuál es la decisión correcta.

Creo que en ese momento (de decisión) es donde adquiere importancia fundamental la acción o inacción, la connivencia o la crítica, el contubernio o el examen, del empresariado, sobre la actuación gubernamental.

Puede darse el caso que el gobierno esté tomando decisiones de buena fe, sobre la base de las motivaciones y las intenciones correctas y con la información con la que se cuenta. Pero puede pasar que la información que tiene sea incorrecta, que las estimaciones de las diferentes opciones terminen siendo erróneas, por lo que no puede tomar decisiones sobre la base de información que desconoce.

Algo que tiene que hacer es tomar en cuenta la posibilidad de que pueda estar equivocado. Por eso, los gobiernos tienen que mirar un abanico de diferentes resultados potenciales y la incertidumbre que rodean las estimaciones. Y el sector empresario, por experiencia y personal idóneo, puede ayudar mucho (muchísimo) en el proceso de decisión óptima.

Esa es una de las razones por las cuales no se trata simplemente de seguir la ciencia porque la ciencia no da una sola respuesta sobre lo que pasará o cuál podría ser el efecto de una particular acción. Se trata más bien de una gama de diferentes posibilidades y sobre la base de eso, tomar las decisiones.

Dado el número de decisiones que los gobiernos tienen que tomar y de lo cambiante de la situación que están enfrentando, es inevitable que no opten por algo determinado. Y podrían llegar a tomar resoluciones que serán criticadas y que podrían terminar siendo, a la luz del conocimiento adquirido con posterioridad, no las mejores opciones.

La política está familiarizada con la idea de que no puede complacer a todo el mundo. Por eso, tienen que estar preparados para cambiar de idea, para revisar sus puntos de vista a medida que la ciencia evoluciona y para admitir que tomaron una decisión que no fue la mejor.

La ciencia no genera valores éticos, la ciencia nos ayuda a entender los hechos. Cuando queremos actuar en relación a ellos: ¿qué deberíamos hacer?, aparecen los valores éticos. Por esa razón la ciencia no nos puede decir qué hacer o que deberíamos hacer, la ciencia sólo nos puede decir qué pasaría si actuamos de determinadas maneras.

Es profundamente engañoso sugerir que la ciencia, en sí misma, es la base de la toma de decisiones. Son las personas las que tienen que decidir cómo balancear diferentes valores éticos que podrían estar en riesgo: cuál es el más importante, a cuál le vamos a dar prioridad, cuál precio estamos dispuestos a pagar y cuál no, y, entonces, tomar una decisión.

La ciencia tiene que estar en el corazón de la toma de decisiones pero no te puede decir, por sí sola, qué decisión tomar. Eso se debe hacer sobre la base de la ética. En la situación actual de crisis (sanitaria y económica) los gobiernos tienen más de una opción razonable para escoger. Pero decir que hay potencialmente más de un enfoque razonable no significa que cualquier enfoque es aceptable.

Claramente hay algunas respuestas que no son razonables y que se deben rechazar, incluyendo las que se apartan significativamente de una comprensión científica de lo que se pone en riesgo o de lo que puede ser útil. Por ello es importante criticar cuando gobiernos o personas que hablan en público recomiendan cosas que son irrazonables. Ese es el papel necesario (e importante) que deben desempeñar los “agentes sociales”, en particular los empresarios.

Estando en medio de una crisis (sanitaria o económica), es difícil conocer todos los impactos de las decisiones que se van tomando, algunos no serán visibles por años. Las comparaciones entre países, por ejemplo, sólo se harán patentes con el tiempo. Los efectos de las medidas tomadas no se sabrán hasta después de un tiempo, cuando se tenga suficiente información para juzgar.

En una situación tan crítica (sanitaria y económica), es casi imposible saber quién está haciendo lo correcto. Aun así, vale la pena señalar que se puede distinguir entre una decisión correcta y un proceso correcto para tomar esa decisión. Y otra vez aparecen los empresarios (que no deben guiarse por encuestas de opinión del electorado), como potenciales colaboradores en el proceso correcto de toma de decisiones racionales.

En las decisiones (racionales, consensuadas) que se van tomado de una manera transparente, el público puede ver por qué los gobiernos están optando por determinadas alternativas, que se trata de decisiones guiadas por la evidencia científica y que son susceptibles a los cambios que se producen en la ciencia y a la incertidumbre que puede conllevar.

Que son decisiones que están abiertas a las revisiones y al cambio de opinión en el futuro en caso de que varíe la información. Todas esas características son positivas en el proceso de toma de decisiones y los países en los que se den esos elementos, tendrán una mejor probabilidad de justificar sus decisiones, incluso si, en retrospectiva, se les pueda cuestionar por haber tomado las decisiones equivocadas.

Es posible que con este comportamiento (propuesto) de colaboración crítica y racional con el gobierno de turno (de izquierda o derecha), los empresarios dejen de hacer negocios tan fáciles (y rentables) como solían hacer cuando actuaban como “cortesanos” del poder y “palmeros” del sátrapa al mando, pero estoy seguro que, aseguraran la perdurabilidad de la empresa, en el largo plazo, mejorando el valor actual de las utilidades futuras.

Tal vez, sea la única forma de “asegurar” el capitalismo… para sus nietos.

Si se quiere tener alguna esperanza de crear los puestos de trabajo necesarios para salir de esta crisis, se necesita una enorme “liberación” de energía empresarial. Y esa energía no se libera con “bailes” de salón, “atrezzos” tras bambalinas, prevaricaciones, connivencias, corruptelas, puertas giratorias, o aceptando a sabiendas, decisiones equivocadas del gobierno.

Tampoco riéndole las gracias al demagogo de turno. O arrodillados eternamente ante el “escriba” del Boletín Oficial del Estado. O alcanzando cumbres inaccesibles en el arte del escaqueo, el subibaja y la paradoja paralizante. Tampoco rumiando uno de los más peregrinos razonamientos que se recuerdan: que con Podemos (comunistas) en el gobierno (del PSOE) se evitará que la tensión social (que se vislumbra) gane las calles (un otoño caliente).

¿Aplausos?

Nos esperan los peores meses de nuestra historia reciente. Tal y como muchos nos temíamos, 2008 nos va a parecer una anécdota, comparado con lo que vamos a comenzar a ver ya en el cuarto trimestre del año.

Mientras la minoría selecta de los empresarios (Ibex 35) que rodea a nuestro gobierno continúa aplaudiendo y desplegando su performance, la inmensa mayoría observamos la crónica de una crisis anunciada.

En tanto el gobierno de España continúa en su representación particular para esconder la realidad (el margen de actuación es nulo porque las arcas públicas están en los huesos) la crisis avanza y nadie es capaz de imponer cordura, orden ni concierto.

“Admitamos pulpo como animal de compañía y concedamos que el dinero siempre colabora con el poder político, sea del signo que sea, al punto de que sería una incongruencia, además de un suicidio, suponer al empresariado enfrentado a quien dispone de firma en el Boletín Oficial del Estado, dicho lo cual, llama poderosamente la atención la falta de rigor y/o el bajo nivel de auto exigencia de un empresariado que, a menos que disponga de información confidencial de la que el resto de los mortales carece, no sabe una palabra de los planes de este Gobierno para sacar a España de la crisis abismal que se avecina, no tiene idea de qué tipo de proyectos piensa presentar en Bruselas capaces de merecer el nihil obstat de la Comisión para cobrar los 140.000 millones en los que tiene puestas todas sus esperanzas, y tampoco conoce las líneas maestras -techo de gasto, senda de déficit- de los próximos PGE, dice Jesús Cacho en su artículo de Vozpópuli (5/9/20)

“Es un caso extraordinario de apoyo a ciegas del mundo del dinero -en realidad meros gestores en su mayoría, empleados cualificados de los grandes fondos que hoy son los dueños de las empresas, colgados de la brocha, también la Botín, de esos escandalosos sueldos que se adjudican, entre salario y bonus, para seguir manteniendo el carísimo nivel de vida al que están acostumbrados- a un Gobierno situado, por lo demás, en las antípodas ideológicas que se suponen han guiado la actividad empresarial desde que el mundo es mundo. ¿Han perdido la cabeza estos romanos?, agrega Jesús Cacho.

¿Y quién piensa en España?

Del lado oficial, en España no hay nada. Hay humo de discursos vacuos. La niebla de una ignorancia supina. Silencio.

De lado de los ricos (Ibex 35): se ponen en fila para el besamanos de un gañán que se ha instalado en la Moncloa, demostrando que el tejido empresarial, liderado por unos enemigos de la prosperidad, presenta un encefalograma plano.

Es el eterno problema de España con sus elites, hoy responsables en buena medida de la ausencia clara de una alternativa liberal al inane Gobierno social-comunista que soportamos. Siempre dispuestos a imaginar que aquello no pasa de ser un capítulo más del “business as usual”. Siempre dispuestos a viajar con sus calculadoras hasta las puertas del infierno.

Les propongo hacer un “acertijo” empresarial: como soy aficionado a la música clásica, me valdré de ella.

**Stábat Mater** (“Estaba de pie la Madre”, en latín) es una secuencia (himno o tropo del Aleluya gregoriano) atribuida al papa Inocencio III y al franciscano Jacopone da Todi. Se la data en el siglo XIII. Comienza con las palabras Stábat Mater dolorosa (“De pie la Madre sufriendo”). Como plegaria medita sobre el sufrimiento de María, la madre de Jesús, durante la crucifixión de su hijo.

Él **Te Deum**, conocido en español como “A ti, Dios”, es uno de los primeros himnos cristianos conocidos. Es común que este sea recitado en las comunidades monásticas durante la liturgia de las horas, el conjunto de rezos y oraciones oficiales de la Iglesias católica, ortodoxa y anglicana fuera de las misas; sin embargo, este es ampliamente conocido por ser la liturgia tradicional de la Acción de Gracias o en momentos de celebración. Se entona, de igual forma, en las misas celebradas en ocasiones especiales, tales como las de canonización o cuando un Papa es elegido (los cardenales se encargan de entonar el cántico y, luego, en las catedrales de todo el mundo, se canta para agradecer por el nuevo pontífice).

En la liturgia romana, el **réquiem** (del latín Requiem, “descanso”), también misa de réquiem (en latín, Missa pro defunctis o Missa defunctorum), es la misa de difuntos, un ruego por las almas de los difuntos, llevado a cabo justo antes del entierro o en las ceremonias de recuerdo o conmemoración. Este servicio suelen observarlo también otras iglesias cristianas, como la Iglesia anglicana y la Iglesia ortodoxa. Su nombre proviene de las primeras palabras del introito: “Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis” (“Concédeles el descanso eterno, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua”). Por antonomasia, se asocia casi exclusivamente a cualquier forma de dar una despedida a los difuntos o de recordarlos por cualquier medio, sea material o simbólicamente.

**¿Si ustedes tuvieran que seleccionar una partitura para el “concierto” de los empresarios del Ibex 35 ante el “okupa” de la Moncloa, que elegirían: el Stábat Mater (sufrimiento), él Te Deum (agradecimiento), o el réquiem (despedida a los difuntos)?**

**- La cobardía orgánica de los empresarios (todo sea por la pela): súbditos de Rama X**

La general Suthida Vajiralongkorn hace una reverencia al rey Maha Vajiralongkorn, coronado hoy en Tailandia. (El País - 4/5/19)

“**Primero vinieron**…” es un poema escrito por el pastor luterano alemán Martin Niemöller (1892-1984). Trata sobre la cobardía de los intelectuales alemanes tras el ascenso de los nazis al poder y la subsiguiente purga de sus objetivos escogidos, grupo tras grupo. Muchas variaciones y adaptaciones en el espíritu del original se han publicado en varios idiomas. Trata de temas como la persecución, culpa y responsabilidad.

Las versiones más conocidas del discurso son los poemas que comenzaron a circular en los años 1950.​ El Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos cita el siguiente texto como una de las muchas versiones poéticas del discurso:​

“Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí”.

Versión grabada del poema presentado en el Memorial del Holocausto de Nueva Inglaterra:

“Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.

Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.

Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.

Así como antes recurrí a la música clásica para hacer un “acertijo” empresarial, ahora voy a valerme de la literatura (otra de mis pasiones), para “magnificar”, la cobardía de los empresarios tras el ascenso al poder de políticos “iliberales” y la subsiguiente eliminación (depuración, evaporación) de sus objetivos económicos, sector tras sector, grupo tras grupo.

**Y el mañana llegó, sin haber pensado nada…**

La marcha de los enanos (me permito recordarles)

A los empresarios españoles (especialmente a los Santones del Ibex 35), ya les pasó, con el presidente Rodríguez Zapatero (PSOE), al que también le “bailaron el agua”, hasta que metió a España en la crisis financiera del año 2008, hubo que pedir un “rescate” a la Unión Europea para salvar a la banca, padecer una depresión (de caballo), que llevó el déficit público por encima del 6% del PIB, la deuda pública casi al 70% del PIB, y dejó 5 millones de parados.

Todo ello, con el mayor recorte del gasto social de la historia reciente. Un “recortazo” al Estado del Bienestar de 15.000 millones. Y con la mayor subida de impuestos de la Democracia. Un año antes del “recortazo” de 2010, el presidente anunció en la Cámara Baja un aumento de la presión fiscal de 15.000 millones, la mayor de la historia reciente. ¿El objetivo? Parar in extremis un déficit que alcanzó niveles de alarma en el 11,1% del PIB.

Cuando aún, 12 años después, no se han podido recuperar los parámetros fiscales anteriores a la crisis del 2008, un nuevo presidente socialista Sánchez Castejón (en coalición con comunistas y separatistas), vuelve a meter a España en una crisis (sanitaria y económica) más profunda, que puede llevar el déficit público a superar el 17%, la deuda pública a superar el 130% del PIB, el desempleo al 20%, con un retroceso del PIB del orden del 18,5%.

Tras ya más de dos años como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tiene que enfrentarse a los datos de su gestión también en su vertiente económica. Es obvio que la crisis sanitaria ha impactado en la economía española, pero hay que realizar dos matizaciones: ni todo el empeoramiento económico se debe a la crisis provocada por el coronavirus, pues la ralentización se intensificaba cada vez más desde finales de 2018 sin que el Gobierno hiciese nada positivo para frenarlo, cuando no incentivaba la desaceleración con sus medidas de incremento de gasto, ni el impacto del virus en la economía ha tenido la misma fuerza en todos los países, pues quienes han sido previsores y han gestionado mejor, han podido tomar medidas más suaves, incluso no cerrar la economía y ahora cuentan con una fortaleza económica estructural muy superior a la española.

En este balance pesa, y mucho, la forma de hacer política de Pedro Sánchez, aplicada también a la política económica. Su problema es de origen, del momento y modo en cómo llegó a la presidencia del Gobierno. Una coalición de intereses centrífugos y disolventes, insostenible.

Todo eso, lo que ha desatado no es otra cosa que la desconfianza en la política económica que se aplicará ahora. Las familias y las empresas, han intensificado su prudencia ante el empeoramiento de expectativas. Ése es el balance que deja Sánchez hasta el momento (septiembre 2020). Una economía atenazada por la incertidumbre, con su estructura económica muy dañada.

**Supongo que los empresarios españoles “aplaudidores”, “apoyadores”, y “agradadores” estarán pensando: “Primero vinieron por…, y yo no dije nada, porque yo no era... Luego vinieron por… y yo no dije nada, porque yo no era…**

**Y el mañana llegó, sin haber “pensado” nada… Entonces qué “entonará” el coro de los “agradadores” ¿un Stábat Mater, un Te Deum, o un réquiem?**

**- El “profit warning” de la inteligencia (y la decencia): comulgar con ruedas de molino**

El rey Rama X es transportado en el Gran Palacio durante la visita al Templo del Buda Esmeralda. (El País - 4/5/19)

**La cara oculta de los negocios**

¿Cómo amasaron sus fortunas? ¿Cómo levantaron sus imperios?

¿Los amos de la economía se parecen a Dios: porque están en todas partes?, o como dijo el presidente ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, sobre los banqueros: ¿(porque) hacen el trabajo de Dios?

Los grandes empresarios trascienden a los gobiernos (democráticos, autocráticos, o fallidos), a las catástrofes naturales y a las crisis (financieras, sanitarias, o económicas). Son impermeables a casi todos los modelos económicos, y resultan inalcanzables para el resto de los mortales.

Se valen de todos los recursos, de instrumentos legítimos e ilegítimos, de mecanismos transparentes y corruptos, para amasar sus fortunas y levantar sus imperios, sin omisión de lo bueno que hacen por sus semejantes y por el país.

Son la muestra contundente de que el capitalismo prebendatario convive con el capitalismo de riesgo. La prueba irreversible de que mientras existan funcionarios incapaces de defender al Estado y a su población, seguirá habiendo empresarios capaces de aprovechar esa debilidad para hacer buenos negocios (aunque sean malos para el país).

Se puede decir que una persona forma parte del establishment cuando accede a la clase dirigente. Su pertenencia no debe darse solamente porque tiene poder económico, sino por ser lo que es. Se ingresa al establishment como premio al esfuerzo y al éxito. No importa que sea hijo de un tendero o de un aristócrata. Esto -el premio al esfuerzo, al trabajo y al éxito- hace que algunos países se conviertan en imperios a lo largo del tiempo.

En otros países, España es un ejemplo, Argentina es el paradigma, los empresarios pierden una cantidad enorme de tiempo en hacer de cortesanos… Son el séquito del poder de turno. En la medida en que en esos países (España, o Argentina) haya menos regulación de la economía, más libertad de empresa, habrá menos cortesanos y más compañías dedicadas a producir riqueza y mejorar la eficiencia. A esos aspectos (y no al lobby) debería estar más dirigido el alto management y la dirección.

¿Cuántos grandes empresarios, de España o Argentina, para seguir con el ejemplo, pueden decir que nunca tuvieron una subvención del Estado? ¿qué nunca han necesitado al Estado? ¿qué no le deben nada al Estado?

**Cuestionario imaginario a un “contratista tipo”**

¿Sus comienzos como contratista? ¿Cómo empezó?

¿Cuál fue el primer contrato que hizo? ¿Cómo y dónde vivía entonces?

¿Cuándo empezó, realmente, a ser lo que es?

¿Cuándo estuvo seguro que construiría un imperio?

Alguna vez dijo que sus empresas tenían un manual de procedimientos. ¿Puede mostrar uno?

Los códigos de ética. Las reglas de oro de cada una de las empresas.

¿Cómo y quienes deciden los asuntos estratégicos y los tácticos? Ejemplos concretos.

¿A cuántas licitaciones se presentaron en los últimos años?

¿Cuántas obras públicas ganaron por licitación? Monto de la inversión. Detalle de las tratativas.

¿Cuántas les fueron adjudicadas directamente? Monto de la inversión. Detalle de las tratativas.

Lista completa de funcionarios o ex funcionarios que además fueron o son directivos de las empresas del grupo.

Las relaciones con el gobierno de turno desde 1978 (inicio de la democracia) hasta ahora.

Todo el lobby del grupo.

¿Cuánto dinero suministró para las distintas campañas electorales?

Explicación sobre el aprovechamiento de las subvenciones del Estado.

Evolución de cada una de las empresas del grupo

¿A cuánta gente da trabajo directamente? ¿A cuánta en forma indirecta?

Sueldos que se pagan en cada una de las empresas. ¿Cuánto gasta en ayuda social por año?

¿Cuánto dinero paga el grupo en impuestos? Detalle de cada una de las empresas.

¿Cuánto le debe el Estado al grupo? ¿Cuánto le debe el grupo al Estado?

**Respuesta “más probable” del “contratista tipo”: No sabe, No contesta.**

**Estructura de negocios “tipo”, de un grupo empresario “aprovechategui” (información privilegiada, tráfico de influencias, y alta dependencia del Boletín Oficial del Estado)**

Entidad financiera (banco comercial, banco de inversión, o fondo de inversión)

Empresa constructora (obra pública y privada)

Actividades relacionadas con el desarrollo de infraestructuras como autopistas, obras ferroviarias, marítimas y aeroportuarias

Contratos de prestación de servicios de minería, así como las infraestructuras necesarias para la actividad minera

Empresa de servicios industriales

Servicios y actividades de mantenimiento de redes de distribución eléctricas, gas y agua

Actividades de construcción, instalación y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión, de sistemas de telecomunicaciones, de instalaciones ferroviarias, instalaciones eléctricas, montajes mecánicos, y sistemas de climatización

Provisión de ingeniería, instalación y explotación de sistemas de control para la industria y los servicios urbanos, entre los que destacan los sistemas de control de tráfico y transporte y los sistemas para el mantenimiento integral de infraestructuras públicas

Desarrollo de proyectos “llave en mano” o EPC, en los que se realiza el diseño, suministro, construcción y puesta en marcha de proyectos relacionados con el sector energético e ingeniería aplicada a la industria

Empresa productora de materiales para la construcción (cemento, tuberías, asfalto)

Empresa de servicios públicos (limpieza viaria, recogida de residuos, reciclaje de residuos)

Engloban aquellas actividades dirigidas a la conservación y cuidado de los espacios públicos como la gestión del alumbrado público que incluye la inversión en el cambio de luminarias, los servicios medioambientales y los servicios aeroportuarios

Empresa petrolera y negocios derivados (refinerías, gasolineras)

Empresa naviera, servicios en puertos y aeropuertos

Empresa de servicios de comunicación (telefonía fija y móvil)

Empresa de gestión integral de aguas (potabilización, desalación, depuración, reutilización,

Empresa productora y distribuidora de electricidad (centrales eléctricas, energías renovables)

Empresa transportadora y distribuidora de gas

Empresa prestataria de servicios ferroviarios (pasajeros, carga y metro)

Empresa de construcción y explotación de carreteras por peaje (concesiones viarias)

Centros comerciales (construcción, explotación, y renta)

Empresas de medios de comunicación (prensa, radio, televisión)

Empresas de turismo (hoteles, campos de golf, resorts, Spa, talasoterapia, termas)

Empresas de servicios médicos y hospitalarios (hospitales, ambulancias, helicópteros)

Como pueden observar la orquesta es amplia y diversa. Casi pueden interpretar cualquier partitura. Desde el concierto más difícil, hasta una verbena en las fiestas populares. No dejan palo sin tocar, ni puerta sin abrir, ni bolsillo sin hurgar, ni moneda caída, por el suelo.

Uno de los “tinglados” que suelen montar los “dueños del dinero”, que les asegura impunidad (por popularidad y electoralismo) y buena cercanía al Poder Político (por contacto de platea y entretiempo de vinos y rozas) es el de la presidencia de algún importante club de fútbol de su país (en España, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y hasta el humilde y eterno inquilino de la 2º B, el Deportivo Las Palmas; en Argentina -maestra de todos los esperpentos-, Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, y otros más modestos, tienen o tuvieron grandes empresarios de la construcción, en la poltrona presidencial, haciendo o pidiendo favores, rodeado por lo más representativo del mundo de los negocios, y por los -corruptos- políticos de turno, y férreamente protegidos por los -esbirros- de la barra brava).

Este modelo de empresario constructor, presidente de un gran club de fútbol, tampoco es exclusivo de España o Argentina, también, lamentablemente, está difundido en Italia (Berlusconi), Inglaterra (mafia rusa y sátrapas petroleros), Francia (Tapie)… y tal vez, más allá. Impunidad (privada), e inimputabilidad (pública). Y la gente saltando en las tribunas cuatro o cinco veces por semana. Creyendo a los políticos y a los empresarios, que les mean en la cabeza y les dicen que es lluvia. Encantados que les roben. Volviendo a votarles.

Así y todo, algunos “contratistas”, “con más cara, que espalada”, hacen “Declaraciones de cumplimiento anticorrupción de su Consejo de Administración”.

Transcribo una de esas “Declaraciones” del Consejo de Administración, aunque censuro nombres (vergüenza ajena), porque no me gusta, que intenten ofender nuestra inteligencia.

El Consejo de Administración de… reconoce que la corrupción es una práctica extremadamente perjudicial, que erosiona la competencia y la reputación de aquellos organismos públicos y privados que se ven envueltos en la misma. La presente declaración de cumplimiento demuestra nuestro compromiso para prevenir la corrupción. Actuar con integridad es una parte nuclear de nuestra política y no toleraremos ninguna forma de corrupción. Implementaremos y aplicaremos sistemas efectivos para combatir la corrupción.

Hemos adoptado una Política de Compliance Penal y Anti-Soborno que establece los procesos diseñados para prevenir que cualquier persona relacionada con nosotros lleve a cabo un acto de corrupción.

Aplicaremos en todos los aspectos de nuestro negocio toda la normativa nacional e internacional relacionada con la lucha contra la corrupción. De conformidad con la normativa española los actos de corrupción llevan aparejados una pena de prisión de hasta seis años para personas físicas y para las personas jurídicas, además multas de hasta el quíntuple del beneficio obtenido, un daño reputacional incalculable. Por ello nos tomamos nuestras responsabilidades legales muy en serio. Cualquier acto de corrupción cometido por un miembro de esta organización conllevará la adopción de medidas disciplinarias y será tratado severamente por el Consejo de Administración. Exigimos que todos los socios de negocios vinculados con nuestra organización demuestren, para poder hacer negocios con nosotros, que tienen un compromiso semejante al nuestro para prevenir la corrupción.

Creemos firmemente que una tolerancia cero hacia la corrupción apoya nuestra reputación como entidad que actúa ética y honestamente. Asimismo inspira confianza en los destinatarios de nuestras prestaciones y el público en general. Como parte de nuestro compromiso para la prevención de la corrupción dentro de nuestra organización, el Consejo de Administración ha establecido una serie de Políticas y Procedimientos de Compliance, parte de los cuales están disponibles en la página web corporativa…, siendo los más relevantes la Política de Compliance Penal y Anti-Soborno y el Código de Conducta para Socios de Negocio. El Consejo de Administración, cuenta para la implantación del sistema de gestión de compliance penal, con la asistencia del Comité de Compliance, dependiente de la Comisión de Auditoría del Consejo de Administración, entre cuyas funciones se encuentra el desarrollo, la implementación, el seguimiento y la revisión de los procesos internos de prevención de la corrupción.

Madrid, a 26 de marzo de 2020.

**Y todos muy “compliances” se van al fútbol, a compartir “vinos y rozas” con los políticos ¿incorruptibles?, para hacer negocios de “tolerancia cero con la corrupción”, evitando “daños reputacionales incalculables”.**

**Siento sus rizas desde aquí, y eso que estoy a más de tres horas de vuelo, del hecho de la causa.**

**Qué les puedo decir, estimados y pacientes lectores: esta pura mierda, “es lo que hay”.**

**Son demasiados “negocios” con pecado concebidos. No hay (y posiblemente, no habrá), examen de conciencia, ni pedido de perdón, ni arrepentimiento, ni espíritu de enmienda.**

**El peligroso negocio de la adicción… (la insoportable levedad de los que “pastan” en el presupuesto, por defecto -pobrismo-, o por exceso -riquismo-)**

**¿Tenencias demoníacas? Los unos (pobres), están poseídos por el miedo, y los otros, (ricos) están poseídos por la avaricia. ¿Les interesa a los políticos el exorcismo? Jamás.**

**¿Están pensando en dejarlo? Lo dudo, lo dudo, lo dudo… Les va la vida en ello (son “yonquis” de la teta del Estado). Prefieren morir de sobredosis, que padecer un síndrome de abstinencia. Según un “grande” del Ibex 35: “administración y empresas se necesitan mutuamente” (sic). Lo dicho, señores: es el peligroso negocio de la adicción…**

**No sean hipócritas. Díganlo sin máscara. Están obsesionados por la doctrina de Bossuet: “el mundo lo perdona todo cuando se triunfa”. En ese caso, deberían ser susceptibles de crítica, porque desconocen que el perdón nunca es un asunto de una colectividad sino de un compromiso personal.**

**Y aunque así fuera, olvidan una parte fundamental de la fórmula de la cultura cristiana (“perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”), pretendiendo que les perdonen vuestras deudas, sin perdonar las de vuestros deudores.**

**Si no hay arrepentimiento y propósito de enmienda, por parte de los “dueños del dinero” (Patria Contratista), entonces de qué sirve que redacten, firmen, y juren declaraciones de cumplimiento anticorrupción. Seguirán siendo unos míseros perjuros.**

**- Las tragaderas asombrosamente resilientes del empresariado (gargantas profundas)**



**La idea es ganar… ¿no? (pero me gustan más, los empresarios “inconformistas”)**

**Me gustan más los empresarios que cuidan el patrimonio (a largo plazo), en vez de priorizar la rentabilidad y el dividendo (a corto plazo). Que cuidan más la estructura del balance, que la raya de abajo. Que no caminan de rodillas para hacer negocios. Que no transforman la economía en un casino, que no practican el gansterismo de mercado, y que no apoyan, toleran, o consienten, a gobiernos que hunden la economía y el empleo…**

**En los “estados fallidos”, y en las “economías de casino”, la cuestión principal es: ¿cómo ser un empresario de verdad, y no morir en el intento?**

**En los “estados fallidos”, y en las “economías de casino”, una cuestión complicada (casi imposible) es: que las empresas no tengan nada que ocultar, nada de qué avergonzarse.**

**En los “estados fallidos”, y en las “economías de casino”, la cuestión definitiva es: cómo hacer negocios, sin necesidad de “masajear” (o sobornar) al poder político de turno.**

**En definitiva: cómo vivir en el capitalismo, sin necesidad de matar al capitalismo. Acabar con el obsceno espectáculo de los políticos “liberticidas”, que llenan el terreno de obstáculos, mientras pregonan la libertad de mercado y el estado de derecho.**

**El empresario cortesano: ¿ausencia de instinto capitalista? ¿falta de carácter? ¿escaso de reflejos? ¿carentes de un organigrama profesional cualificado, capaz de ayudarle a perfilar un proyecto de futuro para la empresa, para un país liberal, y de llevarlo adelante? ¿desconectados de la sociedad civil? ¿conformes con ser los herederos de una escombrera? ¿aceptando en papel de ser unas (míseras) ratas de las cloacas?**

**Esa es la sensación de indigencia, de desvalimiento, de silencio, de resignación, que me producen los “empresarios cortesanos”. Puede, que caminar de rodillas, de espalda, o postrarse, ante el Poder Político, sean los mejores movimientos estratégicos, torres mayores han caído, pero dudo que, de cara al largo plazo, sea la jugada perfecta que los accionistas bendigan, que sea una victoria inapelable del capitalismo.**

**En los “estados fallidos”, y en las “economías de casino” hay demasiadas amenazas tangibles, y puede que alguna se convierta en un estruendo insoportable. Ya se encargarán los voceros oficiales de calificar de “neurosis obsesiva”, “victimismo” o “disparatadas invenciones” las quejas que, de cuando en cuando, se escuchen desde el sector empresarial.**

**Aunque en los “estados fallidos”, y en las economías de casino”, el empresario aprende a desenvolverse con soltura en la cuerda floja de ese abismo infernal, nunca debería olvidar que: “la primera condición de un político es saber soportar atrocidades”, (aconsejaba Azaña). Y a la hora de “salvar el culo” el político depende del voto clientelar (largamente regado con el dinero del contribuyente), mientras el empresario depende de los accionistas, que no le permitirán “salvar el culo”, con simples migajas.**

¿Cómo pudo ocurrir esto?

Hay, por supuesto, muchas razones, que no son exclusivas de los países en cuestión (España, o Argentina): aumento de la desigualdad económica, instituciones esclerosadas, élites complacientes y animosidad contra los cambios estructurales, entre otras; pero yo diría que los problemas actuales en ambos países están vinculados a la mayor corrupción.

Los políticos “liberticidas” han apelado a los electores de zonas suburbanas, a menudo con poca educación formal y profundamente resentidos con las élites económicas e intelectuales, y los empresarios han apelado a los políticos “ilibrales”, para conservar sus negocios, privilegios, subvenciones, prebendas y canonjías. Una fórmula de prevaricación bilateral, que lleva, inevitablemente, a una economía bipolar (donde muy pocos ganan mucho y donde muchos ganan muy poco).

Y en ese “negocio de amiguetes”, el que sufre una derrota absoluta, sin atenuantes, es el capitalismo. Eso está llevando a ambos países (España, y Argentina, para el caso) al borde de la bancarrota.

Así que, aquí están (estamos), con una España mendicante y una Argentina en concurso de acreedores, cada vez más alejadas de las economías avanzadas, albergando el germen de futuros desastres (en medio de un presente miserable).

Nada de esto es inevitable, la deficiente respuesta a la crisis (financiera, sanitaria, económica) es un problema de liderazgo, no de gobierno.

El problema reside en el estilo particular de liderazgo populista extremadamente evidente, y en una elite empresarial, intelectual y judicial, acomodaticia, dependiente, sumisa, lacaya y genuflexa, que medra en la periferia de un sistema económico liberticida. Unos líderes que abordan las dificultades culpando a otros y procurando fortalecer su apoyo dentro de un subgrupo particular, repartiendo prebendas, favores, contratos, subvenciones, y “paguitas”, mientras fomentan la división de aquellos sectores que le son críticos.

Quienes se beneficiaron por la generación de riqueza en la era clientelar (riquismo y pobrismo) están muy lejos de pagar la parte que les corresponde de los costos heredados en la presente crisis. Los pobres cegados por su indigencia, y los ricos pringados por su codicia.

Este esquema político y económico, evita y destruye, cualquier idea de sacrificio compartido.

Ciertamente, la solidaridad es mucho más difícil de sostener cuando el sacrificio es desigual.

**El oscuro mundo de los intereses cruzados (cuando los negocios dependen de la política)**

Indefinición, tibieza, cautela... Son muchos los adjetivos que se han ido poniendo para definir el comportamiento de las empresas en el oscuro mundo de los intereses cruzados (negocios / política) y tratar de explicar la falta de una tendencia definida en sus actitudes y marcha.

Algunos críticos denuncian el riesgo de **que los negocios dependan demasiado de socios políticamente poco confiables. Los defensores responden que los negocios deben ser vistos como un asunto separado de las complicidades necesarias con el Poder Político.**

**Mientras unos critican la “connivencia” con el Poder Político y otros la consideran “peccata minuta”, los “dueños” del dinero, con soltura, desparpajo, arrogancia, soberbia, y fatuidad, afirman: “Porque todos ustedes saben que peleamos las licitaciones con fuerza y dureza, pero también saben que nunca hicimos una maniobra, una patraña, una cosa rara. Que ganamos porque tenemos la mejor oferta, y el mejor precio. Y nada más”… (sic).**

**Aunque a veces, la justicia -siempre lenta, muchas veces politizada, y casi siempre influenciable por ricos y poderosos- pone las cosas en su lugar y da o quita razón: “La Comisión (investigadora) concluyo que la compañía… ha contribuido a prostituir en propio beneficio a partidos políticos y poderes del Estado, siendo por ello no solo un foco de explotación pública sino también de corrupción política y administrativa”… (sic).**

**Otro empresario no espera la acción de la justicia, y dice: “Yo no justifico dar coima en ningún caso. Pero tampoco juzgo. Yo nunca di dinero a un funcionario a cambio de nada. En el fondo uno cuando da, da a los partidos políticos y no a los funcionarios… ¿no es cierto? El dinero no va a las campañas políticas, sino directamente a los partidos. Lo sé, porque yo tengo los recibos de las fundaciones de los partidos”… (sic).**

**Un caso digno de mencionar es el siguiente: (la frase no es un chiste y fue pronunciada por un concejal con mandato cumplido) “Esa empresa contratista, más que un grupo económico serio y pujante, es un emporio jurídico cuya mayor virtud es ganar juicios contra el Estado”…**

**También parece un chiste, pero resulta verdad: La empresa contratista cobraba por tonelada de basura levantada y no por un monto fijo por calle. Según decían la empresa era capaz de levantar una vieja barriendo la acera y cargarla en el camión, con tal de facturar más toneladas de basura. A lo que agregaban: que la empresa recoge la basura los días de lluvia, cuando pesa más, para cobrar el doble”…**

**La “Patria Contratista” y “la zona” (donde ya no se puede salir del laberinto)**



Los empresarios son adictos a los negocios y los políticos hacen su negocio de esa adicción.

¿Por qué no pueden parar de jugar? La fuerza de la adicción

Los jugadores nunca necesitan moverse; entran en lo que algunos especialistas llaman “la zona”, un estado de absorción similar a un trance donde el resto del mundo se disuelve.

Ganar simplemente significa más crédito, y más crédito significa más “T.O.D”, el acrónimo de “time on device” o tiempo en el dispositivo (que podríamos interpretar como más tiempo para seguir jugando).

B.F. Skinner, uno de los psicólogos más famosos del siglo XX, no se habría sorprendido. En la Universidad de Harvard, Skinner solía investigar el comportamiento, dándoles a ratones que apretaban una palanca la recompensa de una bolita de comida.

En una ocasión, les dio la recompensa de forma intermitente: a veces la bolita salía, otras, no. No había forma de que el ratón lo supiera. Sorprendentemente, la recompensa impredecible fue más motivadora que una recompensa generosa y confiable.

Los adictos a las tragamonedas, por ejemplo, están igualmente enganchados, absortos en “la zona”. La antropóloga Natasha Dow Schüll una vez vio imágenes, capturadas con la cámara de seguridad de un casino, de alguien que sufría un ataque cardíaco en una máquina tragamonedas:

“Él... colapsa repentinamente sobre la persona a su lado, que no reacciona en absoluto... dos transeúntes lo estiran, uno de ellos es una enfermera de emergencias fuera de servicio. Pocos jugadores en las inmediaciones se mueven de sus asientos... en menos de un minuto, un oficial de seguridad aparece en la escena con un desfibrilador, le da dos descargas eléctricas al hombre... A pesar del hombre inconsciente que yace literalmente a sus pies, los otros apostadores sigue jugando”.

¿Podemos estar seguros que a los empresarios de la “Patria Contratista” no les pasa?

Las investigaciones sugieren que las máquinas tragamonedas pueden crear adictos mucho más rápidamente que otras formas de juego, como loterías, juegos de casino o apuestas deportivas. Pero igualmente desconcertante es la sensación de que en los últimos años, la psicología de la máquina tragamonedas se ha escapado del casino y ha migrado a nuestros bolsillos.

Los adictos en recuperación evitan ir a lugares donde podrían ver máquinas tragamonedas, pero no hay ningún lugar al que podamos escapar de nuestros teléfonos, y hay muchas buenas razones para estar mirándolos. Todos hemos visto gente “en la zona”, ajena a sus compañeros o al tráfico porque el teléfono es lo único que importa. Es ese refuerzo intermitente de nuevo: ¿hay más correo electrónico? ¿algún “me gusta” en Facebook? Muchos juegos de computadora son más descarados en el uso de refuerzo intermitente, ofreciendo “cajas de botín” con esos destellos familiares y recompensas impredecibles.

**Si arrojamos una pelota al piso, rebota. Pero si tiramos una taza de café, se hace trizas. Las economías de muchos países están en caída libre. ¿Rebotarán o se harán añicos? ¿qué se puede hacer para garantizar una recuperación sólida? ¿quién desempeñará un papel constructivo? ¿quién ejercerá un liderazgo efectivo? ¿cuánto dependerá de la acción, o reacción, de los “losers”, y cuanto de la acción, o reacción, de los “winners”?**

**- Losers y winners: la “justicia” de la pobreza, o cómo “seguir empujando la soga” (ceguera voluntaria de los unos y avaricia extrema de los otros)**

Primero les muestro algunas fotos (que valen más que mil palabras), luego, les dejo unos minutos para que reflexionen… y después, paso a desarrollar este Apartado:

**Los “losers” (los “perdedores” de la pasada crisis -2008-, de la presente crisis -2020- y de próxima crisis, con absoluta seguridad)**













**Los “winners” (los “ganadores” de la pasada crisis -2008-, de la presente crisis -2020- y de próxima crisis, con absoluta seguridad)**









Los “winners” afirman que los intentos de reducir la desigualdad implican una pérdida de crecimiento económico.

“Mi tesis en respuesta a esto (que he expuesto en detalle y que ha sido ampliamente corroborada) es que la causa real de la gran desaceleración de la productividad no hay que buscarla en programas como la iniciativa Gran Sociedad, sino en la pérdida de personas capaces de crear nuevos productos y métodos comerciales. Es indudable que mal pueden tener la culpa los beneficiarios de esos programas. En cualquier caso, no parece haber estudios econométricos que muestren que los países que ayudan más a la población desfavorecida crecen menos”, sostiene Edmund S. Phelps, (2006 Nobel laureate in economics, Director of the Center on Capitalism and Society at Columbia University, and author of Mass Flourishing and co-author of Dynamism), en un reciente artículo publicado en Project Syndicate - La pobreza como injusticia (**28/8/20**)

“En la lucha contra la pobreza, tan importante como saber qué hacer es saber qué no hay que hacer. Debemos oponernos a la idea de ingreso básico universal, que supone un uso lamentable de fondos públicos, ya que sería mejor asignarlos a incrementar los ingresos de los trabajadores mal remunerados hasta un nivel compatible con la automanutención, que es esencial para la autoestima. Además de que alejaría o mantendría alejadas a las personas (y a sus hijos) de la experiencia del trabajo, que es en muchos casos la única fuente de realización personal e involucramiento satisfactorio en el mundo”, concluye Phelps.

El Nobel de economía critica, primero lo que hacen los empresarios españoles (winners) y segundo lo que hace el gobierno español (que supuestamente protege a las personas de bajos ingresos (lossers), cuando en realidad está comprando los votos de los pobres con la sopa boba de la “paguita” fiscal).

Pero abrazar la solidaridad ofrece a todas las democracias aquejadas por tensiones raciales y étnicas -ya sea al interior de las poblaciones nativas, o entre quienes se consideran nativos y los inmigrantes- una posible salida. En su libro de próxima publicación sobre “raza, solidaridad y el futuro de Estados Unidos”, el veterano de la marina estadounidense y ex miembro del programa White House Fellow (una iniciativa extremadamente competitiva de la Casa Blanca, que otorga experiencia de primera mano en el funcionamiento del gobierno federal) Theodore Johnson define la solidaridad nacional como “la versión cívica de la regla de oro”, que exige que todos “defendamos activamente el derecho a la igualdad y la libertad” para nosotros y nuestros conciudadanos.

“A lo largo de su historia, la democracia estadounidense ha innovado para ajustarse al cambio tecnológico, las guerras, las pandemias y otras conmociones. Su permanencia demuestra que una sociedad que se rige por principios liberales, el estado de derecho y los representantes electos puede existir y prosperar durante siglos”, concluye.

La política populista es una política de división que define “al pueblo” que los líderes populistas afirman representar en contraposición con otros: extranjeros, elitistas, cosmopolitas, globalistas, urbanitas o personas de otro color, raza o credo. Por el contrario, la política de la solidaridad es una política de unidad que nos recuerda la amenaza al planeta que nos pone a todos en peligro. Eligiendo una respuesta que combine la equidad y el existencialismo podemos salvar tanto a la democracia como a nuestro planeta.

España se ha convertido en “el enfermo de Europa” después de años de estatismo, de un déficit fiscal descontrolado, de miles de empresas públicas subvencionadas, de servicios administrativos elefantiásicos e ineficientes y de un asistencialismo masivo que ha fomentado la holgazanería, la ilegalidad, y el clientelismo (de pobres -pobrismo- y ricos -riquismo-).

Lo que no hizo el gobierno del Partido Popular, con Rajoy, respaldado por una mayoría absoluta, como nunca se había alcanzado desde el comienzo de la democracia: una revolución conservadora y liberal que habría supuesto la mayor contribución práctica de la filosofía política al progreso de España. No aprobó un presupuesto de guerra que aunque hubiera hundido al país en una mayor recesión, pasado un breve período hubiera empezado a revitalizar la economía, porque hubiera generado expectativas positivas y sobre todo la confianza que faltaba a la nación. No redujo drásticamente el gasto público, no rebajó los impuestos, no decretó el fin del estatismo y de los subsidios generalizados, no privatizó las empresas públicas, no promovió el capitalismo popular y no devolvió la libertad a los ciudadanos, con el acompañamiento de responsabilidad individual que lleva aparejada.

Lo que hará el gobierno del Partido Socialista, con Sánchez, respaldado por comunistas, y separatistas, es seguir manteniendo una sociedad moldeada desde hace décadas por el paternalismo franquista y luego por el socialismo protector y un Estado de Bienestar infame. Donde no haya ciudadanos sino súbditos y dependientes, acostumbrados a la muleta pública desde que nacen hasta que mueren, inscritos en el victimismo, siempre dispuestos a echar la culpa a los demás de su mala fortuna y propensos a la queja permanente. Con una mayoría que aspira a un empleo público de por vida y sólo piensa en las vacaciones; el ocio y la diversión, que no el trabajo -trasmutado en un castigo divino- se han convertido en la meta.

Lo que no hicieron ni el uno (Rajoy), ni el otro (Sánchez), y tampoco harán (quienes les sucedan en el PP o en el PSOE, hasta donde la vista alcanza) es devolver la libertad a los individuos para que saquen lo mejor de sí mismos, un desafío colosal que exige un gobierno pequeño y eficaz, un sistema de controles -los famosos “checks and balances”- que permitan la auditoria continua del poder público así como un modelo fiscal que propicie que la gente se lleve a casa la mayor parte del fruto de su trabajo, pagando los menores impuestos posibles.

Y no lo hicieron, ni lo harán, porque no confían en la capacidad de los individuos para generar riqueza si se eliminan los obstáculos convencionales que los gobiernos de la (acomplejada) derecha y de la (falsa) izquierda, han puesto a su paso.

Aceptar el mantra de que la sociedad española es de izquierdas es inaceptable. Equivale a darlo todo por perdido. Hay que aprender a escuchar el malestar generalizado entre mucha gente harta de la tiranía de la corrección política y deseosa de expresarse en libertad; gente que cree en la fortaleza innata de las personas cuando son puestas a prueba, no cuando su ímpetu se apaga con la subvención estatal y su servidumbre ciega al poder público a cambio de una obediencia sin límites.

España afronta un desafío existencial ayuno de los referentes que podrían ayudar en esta ingente tarea, que son los empresarios y los ejecutivos, que desgraciadamente no piensan más allá de su cuenta de resultados y que han renunciado a cualquier clase del liderazgo moral que tanta falta hace.

Cuando leo que los empresarios más encumbrados del país (Ibex 35), dicen estar muy de acuerdo con el discurso de Sánchez, que la reconstrucción económica debe de ser “sostenible” y por supuesto “feminista”, no se me ocurre que haya muchos líderes empresariales, en los países avanzados, capaces de afirmar estas cosas tan prescindibles e irrisorias. Y no digan que eso lo hacen para que los “perdedores” de la crisis no incendien las calles. Tanta docilidad, cinismo, miopía, o ceguera voluntaria, ofenden la inteligencia.

**¿Cuantos pasajeros se salvaron en el hundimiento del Titanic?**

De los que iban en Primera (clase alta), en Segunda (clase media), en Tercera (clase baja), y de la tripulación (oficiales, marineros, músicos, cocineros, camareros, operarios, telegrafistas, mecánicos, electricistas…)… ¿cuántos sobrevivieron al naufragio?



¿Cuántos pasajeros se podrán salvar en el hundimiento de España?

¿Cuántos pasajeros se podrán salvar en el hundimiento de Argentina?

¿Alcanzarán los botes para todos? ¿Quiénes subirán primero a los botes? ¿Cuánto tiempo podrán sobrevivir los que tengan que lanzarse al mar? ¿Llegarán pronto a rescatarlos?

Cuando sólo se han recuperado menos del 50% de los puestos de trabajo destruidos por la crisis pandémica (confinamiento feroz), lanzar mensajes desde el Gobierno de España a los agentes económicos sobre una pronta recuperación resulta temerario e inverosímil.

Pero que los grandes empresarios (Ibex 35), se lo crean, ayuden a difundirlo, o “templen gaitas”, con quienes mienten a sabiendas, resulta surrealista, cínico, lesivo, miope, connivente, vejatorio, ofensivo (con la inteligencia) y sospechoso (¿a cambio de qué?).

El frenazo del empleo desde el inicio de la crisis requiere mayor flexibilización, adecuación, y libertad económica, y no más reglamentaciones intrusivas, rigideces distorsionadoras e involuciones estatistas. ¿Y qué dicen los empresarios? Mudos… cómo momias egipcias.

La “moderación” tiene un límite, el “gradualismo” tiene una lógica, y la “avaricia”, cuando fuerza a arrodillarse demasiado (ante el Poder Político, la mafia, o la cloaca), puede terminar metiendo al codicioso en un callejón sin salida.

Una pregunta para los “muditos” del Ibex 35: ¿Cómo creen que pueden hacer más y mejores negocios: con una España, única e indivisible, o con una Cataluña independiente, unas Islas Baleares independientes, una Valencia independiente (o las tres regiones unidas en los Países Catalanes), un País Vasco independiente, una Galicia independiente, y un España “residual”?

Otra pregunta para los “muditos” del Ibex 35: ¿Les parece muy “técnico” (profesional e idóneo) un gabinete de ministros, donde el ministro de sanidad es un filósofo, la ministra de hacienda una médica, el ministro de consumo dice que su modelo de consumo es ¡Cuba!, la ministra de educación sostiene que los hijos no son de los padres, además de tolerar que en varias comunidades autónomas no se pueda estudiar en español, una ministra de trabajo que prohíbe despedir personal hasta 2021, devuelve la ultraactividad de los convenios colectivos y recupera los convenios sectoriales, un ministro de universidades que está “missing”, un ministro de cultura que también está “missing”, uno de los vicepresidentes que es un comunista “republicano”, que apoya a los independentistas vascos y catalanes, y así podría seguir… donde, los iletrados son mayoría, los analfabetos funcionales dirigen los debates, los sectarios marcan el rumbo y donde la superioridad moral de la izquierda, es divisa, dogma, paradigma, y guion del relato oficial, en los medios afines o cautivos?

No se puede negar la evidencia. No se puede aducir ignorancia. Hay lealtades que resultan miserables.

Tal vez tengan que repensar el modo de convivir con el Poder Político. Al menos, con este…

**La “peronización” (argentinización) de España: vidas paralelas o vidas para-lelos (la “prueba del algodón”, para aquellos que -aún- piensan que… “aquí no va a pasar”)**

Antes de la larga (aunque incompleta) lista de casos de corrupción en España y Argentina, que se presenta en el Apartado siguiente, voy a señalar algunos acontecimientos que he seleccionado como “aperitivo” (anticipo del esperpento) de la deshonestidad, la insensibilidad, la indiferencia, el desparpajo, la burla, la miseria, el egoísmo, la irresponsabilidad, la perversión, la amoralidad, la anomia… con que los políticos venales y los empresarios deshonestos, de Argentina y España, manejan el Presupuesto de Estado, el dinero de los contribuyentes, y el futuro del país, como si fueran de su propiedad. Empiezo por el “caso” argentino, porque ayuda a diagnosticar mejor el grado del tumor español.

**Argentina (o lo que queda de ella: el último que salga, por favor, apague la luz)**

-El Caso Antonini Wilson: es un proceso judicial y una polémica generada cuando Guido Antonini Wilson, un empresario venezolano, llegó a Argentina, el 4 de agosto de 2007, con una maleta con 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados. El caso tuvo una amplia repercusión mediática porque coincidió con la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y la presentación del referéndum por parte del presidente Hugo Chávez para cambiar la constitución del país, incluyendo normas que le permitirían buscar la reelección.​

El caso, que involucró a ciudadanos argentinos, estadounidenses y venezolanos, fue calificado por el periodismo y la opinión pública como el “escándalo de la valija”, el “escándalo del maletín”, el “maletinazo”, el “maletagat” o el “valijagate”.

Los agentes de la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina descubrieron en la maleta de Antonini 790 550 dólares, ​los que fueron decomisados en base al artículo 978 del Código Aduanero, ​ya que no habían sido declarados antes de realizarse el control.​

Ante la pregunta de si “la valija era de Uberti y se la quisieron cargar a usted”, Antonini respondió: “La valija era para la campaña presidencial. Yo supuse que era de Uberti y él me dijo que la manejaba el presidente. Yo me baso en lo que Uberti me dijo en Miami, cuando me envió saludos de parte del entonces presidente Néstor Kirchner”.

El día 6 de agosto de 2007, Hugo Chávez llegó a Argentina para firmar varios acuerdos relacionados con el petróleo en varios países sudamericanos y la compra de 1000 millones de dólares en títulos del Bono del Sur. ​Un día después Antonini Wilson abandonó la Argentina, con rumbo a Uruguay, sin reclamar el dinero que le había sido secuestrado,​ casi 400 000 dólares tras el pago de la multa correspondiente.​

Antonini quedó en libertad en Miami a cambio de su testimonio, participando como colaborador en marzo de 2013, a juzgar por sus negocios con la única empresa que dejó “Fox Delta Investments Inc.”, vive en la exclusiva isla de Key Biscayne, Miami en Estados Unidos y sigue haciendo negocios y ganando miles de dólares pasando por un empresario de bajo perfil. Luego de 11 años prescribió el caso de Antonini Wilson y el maletín de los 800 mil dólares en Argentina reafirmando que la maleta no era suya. La Corte Federal de Miami calificó la maleta como propiedad de PDVSA.

Antonini cuenta con pedidos de extradición de Venezuela y Argentina, pero Estados Unidos no ha respondido a estos todavía.​

-Tragedia de Once: A las 8:30 del 22 de febrero de 2012, el tren chapa 16 de la línea Sarmiento chocó contra el andén 2 de la estación de Once. Ocurría otra tragedia, como la del boliche Cromañón, en la que en diciembre de 2004 murieron 194 personas. Pero luego se iba a determinar que era una tragedia evitable porque informes oficiales habían alertado sobre las malas condiciones de funcionamiento de los trenes pero que funcionarios y empresarios decidieron pasar por alto estas graves advertencias.

El primer juicio oral por el caso comenzó en marzo de 2014. Fueron juzgadas 28 personas entre ex funcionarios y directivo de TBA, la empresa que tenía la concesión de la línea Sarmiento. En diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo y otros 7 fueron absueltos.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara entendieron que el tren funcionaba en malas condiciones que habían sido advertidas, que los fondos públicos que TBA recibía eran gastados en otras cuestiones y que el maquinista tuvo una conducción negligente. Todo eso mató a 52 personas e hirió a 789.

De las 20 personas que quedaron detenidas en octubre de 2018 hoy solo hay 9 en prisión. Son Cirigliano, Jaime, Schiavi, Córdoba, Álvarez, y otros cuatro ex directivos de TBA Víctor Astrella, Jorge De los Reyes, Carlos Pont Verges y Sergio Tempone. Todos están bajo el “Sistema de intervención para la reducción de índices de corruptibilidad” (IRIC) que es para detenidos con alto poder económico, que formen parte de bandas de crimen organizado o que están condenados por corrupción. Están alojados en las cárceles I y 31 de Ezeiza, excepto Córdoba que se encuentra en Marcos Paz porque no quiere estar con el resto de los condenados.

De esos 9 detenidos, 3 tienen pedido sus arrestos domiciliarios por distintos motivos. Son Schiavi, Córdoba y De los Reyes. Lo tiene que resolver el tribunal oral. Pero ya hay otros 7 condenados bajo arresto domiciliario que les fue otorgado en distintos momentos del año pasado por motivos de salud o cuestiones humanitarias para cuidar a familiares enfermos.

El 27 de septiembre de 2017 se inició el segundo juicio por la tragedia de Once, conocido como Once II.​ El juicio se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 (Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez),​ siendo los acusados el diputado nacional Julio de Vido, quien fuera ministro de Planificación cuando sucedió el siniestro de Once, y Gustavo Simeonoff, quien era el responsable de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).​ Para poder ser enjuiciado, De Vido debió ser “desaforado”, es decir, debido a que era en ese momento diputado nacional, la Cámara de Diputados debió habilitar el juicio, disponiendo que De Vido quedara excluido de la Ley de Fueros Nº 25.320, sancionada el año 2000. Los acusados fueron enjuiciados por dos eventuales delitos: el accidente de Once de 2012 y la administración fraudulenta de los recursos públicos.

El 10 de octubre de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 (TOCF4) dictó su veredicto absolviendo a Julio De Vido por el estrago ferroviario de 2012 y condenándolo por administración fraudulenta a 5 años y 8 meses de prisión además de dejarlo inhabilitado a ejercer cargos públicos de por vida, y absolviendo de todos los cargos a Gustavo Simeonoff.​ Los argumentos del fallo fueron publicados el 10 de diciembre del 2018.​

A diferencia de lo que sucedió en el juicio Once I, en este caso el tribunal consideró que la administración fraudulenta no tenía la entidad necesaria para causar o concausar el estrago ferroviario de 2012, razón por la cual consideró que De Vido no era culpable de la tragedia de Once.

-Una “payasa” profesional (Filomena) presenta los datos de la crisis sanitaria (Covid 19). La rueda de prensa que el Ministerio de Salud en Argentina ha dado para anunciar los nuevos casos y fallecidos por Covid-19 ha contado con la presencia de la payasa Filomena. La actriz Nina Lenze acompañó al Ministerio de Salud de Argentina en la ruda de prensa sobre la evolución del coronavirus (18/8/20).

Con motivo del Día de las Infancias, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, ha estado acompañada por la actriz Nina Lenze disfrazada de payasa. Tras anunciar los datos de muertes y nuevos contagios, la payasa ha hecho un juego con los allí presentes y han cantado una canción todos juntos acompañada de un baile. Con motivo del Día de las Infancias, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, ha estado acompañada por Filomena.

La idea que el Gobierno argentino tenía con esta representación, como ha explicado la secretaria es valorar “el esfuerzo de los niños y niñas argentinos” en esta pandemia.

En Argentina no ha gustado la imagen de una payasa en la rueda de prensa del Gobierno. En Twitter se hizo trending topic el hastag #gobiernodepayasos. Además, es uno de los países que más meses lleva en cuarentena pero ahora el Gobierno trata de evitar el uso de la palabra lo que también ha indignado a la población.

-Oportunamente el Estado se apropió indebidamente de los recursos de las Cajas de Jubilación (dinero de los pensionistas) para financiar el déficit público. Expolio nunca resuelto.

Los fondos acumulados en las cajas de jubilación fueron el gran recurso al que apeló Perón frente al agotamiento de las reservas, el hundimiento de las exportaciones y la crisis en la balanza de pagos, que se inicia aproximadamente en 1952. En ese momento “los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores alcanzaron niveles interesantes, al punto que el creciente déficit de las cuentas públicas se resolvería capitalizando estos fondos con bonos que emitía el Estado. Los bonos llamados Obligaciones de Previsión Social (OPS) comenzaron a inundar las cajas. Como en los ‘50 la deuda acumulada en OPS ascendía al 47% del PBI y más del 50% de la recaudación era aún colocada en OPS, el sistema de previsión tuvo que ser auxiliado, a fines de esa década, por el Tesoro Nacional” (Daniel Muchnik, Las AFJP en el ojo de la tormenta, Norma).

Frente a este creciente vaciamiento de las cajas, el peronismo transformó el sistema: de capitalización, primero, lo convirtió en uno de reparto. Eliminó la cuenta individual de cada trabajador e ingresó todos los fondos en una caja solidaria, que luego debía distribuir los beneficios en forma equitativa.

El rescate de los títulos públicos puestos en las cajas de previsión por el gobierno peronista (las OPS) puso en números, tiempo después, el vaciamiento. “Durante los ‘70 la desfinanciación previsional se hizo evidente con el rescate de OPS. El Estado pagó menos del 10% de la deuda a menos del 1% de su valor nominal, a la vez que distraía recursos no genuinos para cumplir con aquellos que perciben los beneficios” (Muchnik, ídem anterior).

Los excedentes generados por el conjunto de las cajas entre 1950 y 1954, del orden del 4% anual del PBI a precios de mercado fueron colocados a extensos plazos en títulos públicos cuyos intereses eran 4, 5 y 8% anual, contra una inflación superior. A su vez, los intereses eran pagados con nuevos títulos, al igual que las contribuciones; el conjunto de las cajas se descapitalizó aceleradamente. Las cajas fueron objeto de una confiscación inflacionaria, al igual que los salarios reales, que benefició a la clase capitalista, cuyas ganancias no dejaban de crecer por encima de la inflación.

Es decir: el peronismo de 1973 fue responsable de monetizar el vaciamiento de los fondos destinados a la jubilación, realizado desde 1952.

-Los falsos empleados públicos (ñoquis), engordan la administración de Estado, aumentan el gasto público, sirviendo para mantener una red clientelar, y financiar a los partidos políticos.

En Argentina se comenzó a llamar “ñoquis” a las personas contratadas en lugares pertenecientes al sector municipal (oficinas, hospitales y demás) que no trabajaban pero cobraban su sueldo los días 29 como si hubieren trabajado (eso porque los 29 de cada mes es tradición en Argentina comer ñoquis como un ritual para la prosperidad).

Ñoqui es una argentinización de “gnocchi”, que es un tipo de pasta italiana que tradicionalmente, se come los días 29 de cada mes. Por eso, a los empleados que cobran sin trabajar se les dice ñoquis, porque solo se los ve a fin de mes cuando van a cobrar.

“El honorable Senado de la Nación” es uno de los feudos de los ñoquis. El vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, que es a la vez el presidente del Senado, ha difundido una larga lista de los 3.156 empleados adscritos a la Cámara alta. Más de 3.000 funcionarios para un cuerpo de 72 legisladores. El pago del sueldo de estos funcionarios supone nada menos que el 80% del presupuesto del Senado, que se cifra actualmente en 129 millones de dólares. Hay senadores que se quejan de haber heredado empleados fijos nombrados por sus antecesores. Es así como el personal de plantilla ha aumentado sin cesar hasta alcanzar una cifra astronómica y constituir una estructura sobredimensionada, que se ha edificado dando prioridad a las necesidades políticas, y no a las del servicio. (El País - **17/7/2000**)

-Los políticos se justifican (o jactan) por “robar para la corona”.

José Luis Manzano, se graduó como médico en su Mendoza natal, pero desde joven se dedicó a la política. Fue diputado del Partido Justicialista (1983-1989) y ex ministro del Interior durante la gestión de Carlos Menem (1989-1992).

Es un referente ineludible de la política de privatizaciones de empresas estatales implementada en la Argentina de la década del ´90 y también un símbolo de la corrupción de aquella época, al acuñar la frase: “Yo robo para la corona” (o para el presidente). Su enunciación se convirtió en el título del libro del periodista e investigador Horacio Verbitsky, boom de ventas en Latinoamérica.

**España (un país en vías de subdesarrollo)**

(Se altera el orden cronológico, para homogeneizar la presentación de los temas)

La ruta del oro venezolano: Según ya informó elcierredigital.com, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y sus acompañantes desembarcaron 40 maletas de la bodega del avión privado en el que llegaron al aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero (2020). El equipaje se cargó a pie de pista en un vehículo de la embajada venezolana en España y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad, según indican dos testigos presenciales al mismo medio.

El coche llevaba matrícula diplomática y, una vez cargado, aparcó junto a la terminal ejecutiva de la T-1 del aeropuerto de Madrid hasta que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la “número dos” de Nicolás Maduro concluyeron el encuentro de hora y media que desveló Vozpópuli en primicia el día 23. Los testigos subrayan que el vehículo era de “grandes dimensiones”, dado que el equipaje de la comitiva venezolana estaba compuesto por unos 40 bultos.

Tal y como desveló Libertad Digital, “el Gobierno era el responsable de autorizar la orden de vuelo del avión en el que viajó Delcy Rodríguez, ya que el aparato era considerado un “avión de Estado” y poseía “un trato similar a un avión militar”. Por tanto, se debió informar al Gobierno de su salida antes de iniciarse el vuelo y el Ejecutivo socialista lo autorizó.

Delcy Rodríguez tiene vetada su entrada en territorio español al ser una de las 25 personas del régimen de Maduro a las que la Unión Europea ha sancionado en tres tandas con la congelación de sus activos en suelo europeo y pesa sobre ella una prohibición de viajar al espacio Schengen. “Cuando una persona tiene prohibida la entrada, no sólo tiene prohibido el aterrizaje o el cruce de fronteras. Tiene prohibido cualquier acción que invada el espacio aéreo del territorio Schengen”, añadían.

Una vez que Rodríguez y sus acompañantes se instalaron en la sala VIP de la terminal ejecutiva, el vehículo de la embajada venezolana enfiló hacia la zona de salida del aeropuerto y pasó la barrera sin ningún tipo control de seguridad al ser un coche con inmunidad diplomática.

Tras la polémica destapada, tanto el Partido Popular como la única diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, han insinuado que este polémico vuelo de Delcy Rodríguez forma parte de la llamada “ruta del oro”. “Se dice que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía” y que el avión “iba con cajas y lingotes de oro”, apuntó Oramas la semana pasada. Algo que también refrendó el director de elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, el pasado jueves en el programa “El Cascabel” de 13TV.

Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro tiene problemas actualmente en estas operaciones tras la ruptura de relaciones con el banco Ziraat, la principal entidad financiera turca.

Varias investigaciones de las autoridades policiales estadounidenses relacionan a los bancos turcos con las operaciones de sustracción y lavado de dinero del Banco Central de Venezuela, que sustrae oro de sus propias reservas, lo funde en refinerías turcas y africanas y se revende sin etiquetar en el mercado negro de los países limítrofes.

Las maletas transportadas por Delcy Rodríguez contenían “documentación sensible” que podría “comprometer la seguridad nacional” de España. Según fuentes conocedoras del caso consultadas por Libertad Digital, el viaje de la nº 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro fue ideado como “correo” para transportar esta información desde Venezuela hasta nuestro país.

¿Por qué Delcy Rodríguez transportó las maletas a España con la citada “documentación sensible”? Ante esta incógnita, se plantean dos hipótesis. “El temor del régimen de Maduro a que pudiera filtrarse la información a través de funcionarios opositores”, o en segundo lugar, “un intento de chantaje, o aviso para influir en las relaciones entre España y el régimen venezolano”. “La documentación quemaba en Venezuela”, afirman.

Podemos (socio en el gobierno de coalición), según han publicado en los últimos años distintos medios de comunicación, recibió financiación de Venezuela a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) para extender el movimiento bolivariano en España, entre otros objetivos.

-Autopistas de peaje en quiebra: El Estado tendrá que asumir las ocho autopistas de peaje que actualmente están en quiebra ante la dificultad de llegar a un acuerdo con los bancos acreedores para su rescate que pueda evitar la liquidación y el cierre al tráfico de las vías. Así lo ha reconocido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien ha precisado que aunque están intentando negociar con los bancos “un acuerdo que facilite las cosas es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda”. (El País - **12/12/16**)

No existe ninguna valoración oficial del importe que puede suponer la nacionalización de las autopistas en quiebra. La patronal de las grandes constructoras Seopán la cifró en 2015 en alrededor de 5.500 millones de euros, pero el importe final dependerá del momento en el que se aplique ese rescate. Además, Fomento defiende que el Estado puede recuperar e incluso ganar dinero con la recuperación de las autovías si el tráfico por las vías de peaje se recupera a lo largo del plazo de la concesión.

Los bancos que prestaron los fondos a las concesionarias que construyeron las autopistas acumulan una deuda de 3.400 millones de euros. Algunas de esas entidades, sobre todo las extranjeras, se han deshecho de sus pasivos vendiendo la deuda con un fuerte descuento (hasta del 70%) a los denominados fondos buitre, fondos de inversión fuertemente especulativos.

La nacionalización de las autopistas es una consecuencia de la cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que el Estado tiene que asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado.

-Un médico de ONG, con poca experiencia epidemiológica, presenta los datos de la crisis sanitaria (Covid 19), cuando no lo hace el ministro de sanidad, que es un “filósofo”. Mintieron con la gravedad de la epidemia, mintieron con el equipamiento hospitalario, mintieron con el uso de las mascarillas, mintieron con la compra de materiales y equipos, mintieron con la seguridad sanitaria en las residencias de ancianos, mintieron con los muertos, abusaron del estado de alarma (cierre de la economía)… y siguen mintiendo.

Esta crisis sanitaria me ha enseñado que la epidemiologia es como el vil juego de las siete y media que describe Don Mendo: “o te pasas o no llegas. Más ¡ay de ti si te pasas! ¡Si te pasas es peor!” Sólo un miedo cerval a pasarse explica la desgraciada actuación de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), hasta que la pandemia le estalló en sus narices.

Veamos cronológicamente algunos de sus morrocotudos desaciertos.

27/01 “Estamos en temporada de gripe. La probabilidad más alta ante cualquier sintomatología incluso viniendo de Wuhan, es de que sea un cuadro gripal”.

29/01 “No es excesivamente letal. El problema es que se trasmite más fácilmente de lo que pensábamos”. “El Gobierno no recomienda restricciones ni a viajes, ni a comercio con China”.

31/01 Con un turista alemán contagiado en la Gomera. “Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada… Me sorprende este exceso de preocupación”.

09/02 “Tiene una letalidad que no es desdeñable, pero no es tan grave como parecía. En estos momentos, el nivel de riesgo de España es relativamente bajo. No hay ninguna razón para alarmarse, está controlado… El coronavirus es una enfermedad de muy bajo nivel de transmisión.”

13/02 Suspensión del Mobile World Congress (MWC). ”No existe un criterio sanitario para suspender e MWC”. “Está un poco fuera de lo razonable”.

16/02 “En España ya no hay casos, y nunca ha habido transmisión del virus. Uno se infectó en Francia y otro en Alemania”.

23/02 “España no se plantea el cierre de fronteras”. “Sería un poco fuerte hablar ahora mismo de pandemia por coronavirus”.

28/02 Con 45 infectados. “No hay ninguna razón para cambiar de escenario porque el riesgo está perfectamente delimitado, no es un riesgo poblacional… la contención está funcionando”.

29/02 Con 59 contagiados, dos de ellos en estado grave en UCI. “No hay una gran transmisión a nivel nacional”. Sobre eventos y celebraciones: “La situación no es similar en España a ojos de Sanidad ya que descarta por el momento cancelar grandes eventos como la Fallas, ya que no hay motivos para ello… no debe propagarse el miedo”.

02/03 Con 125 casos diagnosticados. “El 90% de los casos de coronavirus en España proceden de Italia”.

04/03 Con dos muertos y 228 contagiados. “No es necesario cerrar los colegios… ahora mismo no tiene sentido”. “No reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa… podría incrementarlo para algunos focos de interés”.

06/03 Con un tercer muerto y 365 contagiados. Se sustituyó la preposición “por” para eliminar la relación causa-efecto, los muertos eran CON coronavirus. Ese día como en anteriores ocasiones repitió: “No es necesario que la población use mascarillas”.

08/03 Se celebraron masivas manifestaciones, convocadas por el Gobierno, por toda España, el mitin de Vox y todo tipo de competiciones deportivas.

09/03 Con 1200 contagiados. Cierre de colegios en Álava y Madrid.

11/03 La OMS declara pandemia al brote de coronavirus.

14/03 Con 5.200 contagiados y 130 muertes, el Gobierno decreta el estado de alarma.

23/03 Con 28.572 contagiados y 1.700 muertos. La epidemia se debe a “un evento de masas”. Los farmacéuticos no requieren medidas de seguridad más allá de las de cajeros de supermercado, “hay colectivos que asumen los riesgos propios de su profesión”.

Las declaraciones de Simón debieran haber sido más atinadas, en consonancia con su puesto, sueldo y responsabilidad. Simón ha actuado como escudo protector de los errores del Gobierno, al menos, en tres ocasiones:

La primera. Con 441 contagiados y 10 fallecidos. La víspera de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Sanidad no suspendió las manifestaciones ni los encuentros deportivos; por el contrario, aquel día se suspendió la Maratón de Barcelona. Días antes Sanidad había cancelado todos los congresos y encuentros de profesionales sanitarios, porque el coronavirus era ya una amenaza real. Simón justificó la suspensión del maratón por haber participantes internacionales, algunos procedentes de zonas con transmisión.

Cuando le preguntaron sobre las manifestaciones del 8-M, se lavó las manos para no contrariar al Gobierno, su respuesta fue poco profesional: “Cada uno expresa sus ideas como considere”, “Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera”. Para su aséptica posición desdeñó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 28/02 había elevado a “muy alto” el riesgo de propagación del coronavirus, recomendando distanciamiento social.

Es su respuesta tampoco tuvo en cuenta el informe del 02/03 de la Agencia Europea para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). En aquel momento, España aparentemente podría estar en escenario 1, pues “No apparent sustained transmission”, recomendando: “avoiding… un-necessary mass gatherings”, “Consider the cancellation of mass gatherings in exceptional cases”. En cualquier caso, lo más probable es que ya estábamos en escenario 2, “Increasing number of introductions and of local reports of human-to-human transmission in the country”.

La segunda. Aprobó que Sánchez e Iglesias se saltasen la cuarentena. Aunque la recomendación general de Sanidad es que aquellos que hayan tenido contacto estrecho con contagiados de Covid-19 deben guardar cuarentena, Simón defendió sumisamente a la jefatura política: “Cuando personas sin sintomatología… tienen que tener una cierta actividad, en estos casos se tiene que hacer excepciones”.

Y tercera. Tras la polémica creada por la declaración del general, José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, sobre las actividades del Cuerpo “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, el epidemiólogo salió en defensa del Gobierno y del general “utilizar fallos en los discursos o utilizar terminología o frases de personas que estamos al límite de nuestra resistencia para hacernos daño como equipo, no es algo decente”.

Ahora bien, si de algo no debiera hablar Fernando Simón es de decencia: porque no es decente evaluar tan negligentemente la situación epidemiológica que nos ha abocado a la mayor crisis sanitaria, social y económica de nuestro entorno. No es decente que por su inacción haya desbaratado uno de los mejores sistemas de sanidad del mundo.

No es decente que España haya alcanzado la tasa más alta de mortalidad por 100.000 habitantes del mundo. No es decente que seamos el país de la OCDE que peor ha gestionado la crisis sanitaria. No es decente que un gobierno, del que Simón es el portavoz epidemiológico, haya contratado sospechosamente a dedo, y a precios desorbitados, material sanitario defectuoso. No es decente que seamos el país con más sanitarios contagiados.

Por todo ello, y por la salud física y mental de 47 millones de personas, no sería decente que Simón continuase en su puesto en una segunda oleada del coronavirus. Pero, ahí sigue…

En el caso de España, no se necesitó de una payasa (Filomena) para presentar los datos del Covid, porque lo hacía Fernando Simón (el cochero de Drácula), desinformando, manipulando, ocultando, trasladando, o enterrando en soledad, a casi 50.000 muertos.

-El Estado intenta apropiarse de los excedentes de las Administraciones Locales (Ayuntamientos), de 15.000 millones de euros, con la “promesa” de devolvérselos en 15 años. A cambio les ofrece una “donación” de 3.000 millones de euros.

-El gobierno de Andalucía (PSOE) creo una red clientelar (a lo largo de 35 años en el poder), en el cual “no” fueron necesarios los ñoquis, porque directamente creaban expedientes de regulación de empleo (prestaciones por desempleo), y jubilaciones anticipadas, para miles de personas que nunca habían trabajado en las empresas, por un importe cercano a los 3.000 millones de euros (asunto pendiente de juicio). Por una vez, para mal, los socialistas (españoles) superaron a los peronistas (argentinos).

-Los políticos no se justifican de “robar para la corona”, porque la “corona” roba por su cuenta.

La Fiscalía señala tres comisiones millonarias como claves en la investigación del AVE a La Meca. Los pagos de ida y vuelta revelan un sistema para engrasar la gran adjudicación del desierto.

Las fechas siguen sin encajar del todo, pero el puzle de cómo se gestó el AVE a La Meca, una megaobra de 6.700 millones de presupuesto, empieza a tener sentido. La obra se engrasó con distintas comisiones de cantidades enormes. Hay tres comisiones, de 100 millones de dólares, 120 millones de euros y 98 millones de euros, que son clave, según la documentación de la Fiscalía Anticorrupción. Y en todas hay alguien de una familia real detrás.

Presuntas comisiones millonarias, cuentas en Suiza, posible blanqueo de capitales... Las informaciones periodísticas acerca de los negocios opacos de Juan Carlos I han sido constantes en los últimos meses y han precipitado la salida de España del rey emérito.

10 casos oscuros de Juan Carlos con comisiones millonarias que esperan ser aclarados:

-El préstamo de los 100 millones de dólares de Arabia Saudí en 1977.

-El pago de tres millones de dólares en 1981 por parte de Ruiz Mateos.

-Las comisiones pagadas en 1982 de 4 millones de dólares por la venta de los F-18.

-El presunto pago de 100 millones de dólares por parte de Javier de la Rosa a Manolo Prado y Colón de Carvajal en 1995.

-La herencia por la muerte de su padre Juan de Borbón en 1993.

-El pago de una comisión de 50 millones de euros en 2003 por la venta del Banco Zaragozano.

-El pago de 65 millones de euros a Corinna Larsen y de 1 millón de euros a una antigua amante en Ginebra en 2012.

-El pago de 100 millones de euros por parte del Rey de Arabia Saudí a una cuenta en Suiza en 2008.

-Presunto cobro de comisiones a través de testaferros en bancos de Suiza.

-Cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca (100 millones de euros).

**Que cada uno elija el argumento que más le guste**

Ahora que los “pipiolos” del Ibex 35 han tragado con todo tipo de carros, carretas y hasta carruajes, con tal seguir bailando, hasta que alguien (no sé quién, pero alguno será), detenga la música…

“Cuando la música se detiene, en términos de liquidez, las cosas se complicarán. Pero mientras suene la música, tienes que levantarte y bailar. Todavía estamos bailando”. Hay pocas declaraciones que marquen un punto de inflexión en la historia de los mercados. En julio de 2007, Chuck Prince, entonces presidente de Citigroup, describió el FOMO inversor (Fear Of Missing Out) o el fenómeno del miedo a perderse la gran fiesta financiera antes de que los primeros fuegos se transformasen en el gran incendio de 2008.

Algo parecido está ocurriendo en esta depresión sin precedentes (causada por la pandemia).

Que cada uno que elija el argumento (sanitario, económico, o financiero) que más le guste…

No hay que ser un visionario para conocer el final de la película, porque aquellos que vivieron las maniobras similares de anteriores gobiernos, saben que este juego dura un tiempo y luego salta por los aires.

Lo concreto es que Sánchez heredó de Rajoy, que a su vez, heredó de Zapatero, un nivel de gasto público y desequilibrio fiscal que requería de una política de shock en vez de mayor gasto social, entendiendo por política de shock anunciar un plan económico completo en lo impositivo, reforma del estado, reforma laboral, monetaria e integración económica al mundo. Fijar un rumbo de acción bien presentado que cambiara las expectativas económicas de los agentes económicos. Eso no ocurrió, ni antes, ni durante, ni después, y todos, se limitaron a financiar con deuda el déficit y esperar a que se produjera la recuperación económica, las ayudas de la Unión Europea o la lluvia de inversiones, que nunca llegaron.

¿Qué heredó Sánchez? El mismo problema que le dejó Zapatero a Rajoy, con el agregado de una crisis sanitaria mundial y una mayor necesidad de deuda para financiar el déficit fiscal. Digamos que el grueso del problema viene desde la época del retorno de la democracia y el deseo de los gobernantes (voluntarismo, electoralismo, y corrupción), con la colaboración necesaria de la población española (ignorancia, e indolencia) de “vivir por encima de sus posibilidades”, y crear un Estado de Bienestar, imposible de mantener sin un fuerte crecimiento de la economía y el empleo. La bomba de tiempo que le fue dejando un gobierno a otro (con algunas excepciones, que no pudieron cambiar el rumbo) aumentó su potencia deflagradora, y por no escuchar a quienes recomendaban una política de shock, la bomba terminará por explotar más pronto que tarde.

Un campo minado, donde el gobierno “social-comunista” ha hecho una siembra de (nuevos) explosivos sin registrarlo en planos, en el que cada gran empresario del Ibex 35 podrá decidir qué prefiere: muerte rápida, amputaciones diversas, hemiplejia, paraplejia…

Ya se sabe cómo le ha ido a los empresarios argentinos (cortesanos patológicos) por abrazarse tanto con los “descamisados” (desde 1945, en adelante). Después de pegarse varios disparos en el pie, parecen abocados a descerrajarse la sien (“voluntariamente”, como corresponde al derecho a decidir).

Ya se sabe cómo le irá a los empresarios españoles (cortesanos de conveniencia) por abrazarse tanto con los “progresistas”, socialistas, comunistas, separatistas, sindicalistas, feministas, ecologistas, durante el embeleco, que duró lo que duró, del que algunos viven aún, con el convencimiento que los fondos de la inteligencia prosperan cuando están bien colocados en esa bolsa de cotizaciones que es la subvención.

Veremos cómo resuelven este problema, donde todos conocen el final.

Si alguien cree que el suicidio de una Nación permite vivir más holgados a los supervivientes, se equivoca. Una muerte voluntaria nos interroga a todos y más ahora que los animosos “progresistas” de antaño han descubierto que sus intereses pueden irse al traste en el caos que alimentaron.

No quedará nadie para explicar si el último pistoletazo, fue para abrir la carrera de la “nueva normalidad”, o para el suicidio de la clase empresarial.

Y al final, el “epitafio” dirá: aquí yacen los empresarios españoles “con mano izquierda”.

**Cabalgando contradicciones (mientras tratan de dilucidar quiénes serán los tontos útiles)**

El populismo es un embrión de la tiranía: usureros del pueblo, ineficiencia y despilfarro.

El populismo crecerá y será costeado con más impuestos. Ese es el camino de hierro.

El régimen de las autonomías, y el sistema de coparticipación, separa el beneficio político de gastar del costo político de recaudar. La nación asume el costo político de cobrar impuestos y los gobernadores autonómicos el beneficio político de gastar.

En definitiva, el sistema de coparticipación es realmente perverso. Separa el costo político de cobrar impuestos del beneficio político de gastar incentivando el despilfarro de los recursos públicos. No permite que el contribuyente pueda hacer un seguimiento de cómo se gastan sus impuestos,

Es una mera fórmula de igualar hacia abajo y permite financiar cualquier disparate de gasto público. Todo se concentra en sacarles a unos para darles a otros. No en incentivar la producción.

En esta situación el “Pecado Capital” de los grandes empresarios (Ibex 35), es: ser “colabores necesarios” del Poder Político corrupto, para seguir viviendo del manejo desparejo de los fondos públicos.

En esta circunstancia el “Pecado de Estupidez” de los grandes empresarios (Ibex 35) es: creer que la corrupción es general (transversal), que el expolio (y manejo de prebendas) va a durar para siempre, y/o que ellos (sus hijos y sus nietos), comprando voluntades, se van a salvar del Apocalipsis. O que ello no ocurrirá hasta dentro de varios años, ignorando (¿voluntarismo, miopía, ceguera voluntaria, pensamiento Alicia?), que puede ocurrir en cualquier momento.

**El festín de los corruptos**

Supongo que los grandes empresarios (de la Patria Contratista) actúan como “colaboradores necesarios”, no sólo por razones económicas, sino también como una maniobra de “cooptación” del Poder Político (condicionamiento, dominación y sometimiento).

Pero cuidadín, cuidadin, con los políticos corruptos, que siempre “agudizan el ingenio” sobre el dinero ajeno. Que para ellos “cero no es el límite”. Que siempre pueden recurrir a un último zarpazo. Tienen a su favor decir que “lo hacen para el pueblo”. Siempre habrá funcionarios con “sensibilidad social” dispuestos a “salvar” a los más necesitados, siempre habrá funcionarios “ineptos” dispuestos a seguir malversando y falsificando los presupuestos.

En lo ideológico, siempre les quedará el argumento (falaz) de sostener que los ricos lo son porque crean pobreza. Y anticipar el camino que seguirá el gobierno, tanto en lo político como en lo económico.

Frente a este panorama, qué se puede esperar del Poder Económico, más allá de un efímero enojo, casi de rigor, al menos para disimular tantas “entregas de circunstancia” (connivencia).

Deberían recordar que los populistas son muy hábiles en la elección de enemigos. Si el Poder Político (en manos peligrosas) le apunta con sus cañones, es porque le conviene como rival.

¿Qué hará el Ibex 35 mientras tanto? ¿se aferrará a sus principios dialoguistas mientras sus intereses son bastardeados y saqueados? ¿confiará en persuadir a Sánchez o en hacerlo recapacitar? ¿seguirá impávido “pasteleando”, mientras espera que pase la tormenta?

Las solidaridades tienen costo, y alto, en especial cuando los que la proclaman no son los mismos que los que la pagan.

La amenaza de la sangría fiscal recién nace. Empeorará. La desesperación del gobierno central es evidente, sus limitaciones de todo tipo crecen, los reclamos de los hasta ahora gremios amigos lloverán ante la presión de las bases. El populismo se derrumba y enloquece cuando se le acaba la plata. Alguien tiene que defender a la economía (empresas) de ese riesgo que no es ni lejano ni imaginario. Máxime en un país donde la gobernabilidad depende tanto de la economía. La burocracia multipartidaria tampoco funciona sin plata.

Por caso, ¿quién pagará los costos de una burocracia administrativa, que alegremente está aumentando con una asignación política de cargos al voleo o a pedido? ¿no será hora de que el Ibex 35 sostenga el reclamo americano al revés: “no representation without taxation”?

España, además de la pandemia y del desastre económico que no ha culminado, ha entrado en una crisis existencial inducida. Aunque no lo quiera saber. Y salir “gratis” de una crisis existencial no es una opción. Hay que hacer lo que hay que hacer. Mejor que enojarse es ponerse firme. Sería una buena variante empezar a demostrar los liderazgos en momentos de crisis.

O tal vez, prefieran seguir comportándose como un mal empresariado (as usual): abrazándose con el Poder Político de turno, en los palcos de algunos estadios de fútbol. Y continuar con la genuflexión empresarial habitual. Esperando que la narrativa de la K (\*), como salida de la crisis se cumpla. ¿Será este el “gran despertar” de la economía post crisis? Del “tango” (con políticos neocomunistas, cuyos sueños húmedos estatistas lubrica), al “tongo” (donde el ganador se lleva todo, again and again). Mientras el futuro está en el alero.

La gran incógnita seguirá siendo si para mantener la estabilidad, crecimiento, productividad competitividad y rentabilidad, las empresas del Ibex 35, podrán independizarse de la “calidad” del Gobierno de turno, o tendrán que comprometerse en la selección, idoneidad, eficiencia, honradez y gestión del Gobierno futuro. ¿Una victoria de la razón en la España más irracional? El tiempo dirá.

¿Hay motivos para ser optimista? (las pinturas negras de Goya, pueden ayudar a reflexionar).



(\*) En el debate de la recuperación, se ha impuesto la sopa de letras para describir gráficamente cómo puede ser la evolución económica para los próximos años después de la crisis que ha provocado el coronavirus. Comienza a haber un consenso entre los economistas estadounidenses que la letra K es la más adecuada para el período que se abre por delante. Es el camino del medio entre la V y la L, donde solo unos pocos se beneficiarán de la recuperación mientras el resto de sectores y personas se quedarán atrás. “Creemos que la incógnita de la recuperación ya está resuelta y que estamos viendo una recuperación en forma de K”, sentencia Marko Kolanovic, director global de investigación de JPMorgan Chase. “La narrativa en forma de K está ganando terreno a medida que la historia de dos recuperaciones se ajusta bien al rendimiento superior continuo de los activos de riesgo y los bienes raíces, mientras que los trabajos de primera línea en el sector de servicios corren el riesgo de ser eliminados permanentemente”, Ian Lyngen, jefe de estrategia de BMO Capital Mercados.

“La recuperación en forma de K es solo una reiteración de lo que llamamos la bifurcación de la economía durante la Gran Crisis Financiera. Realmente se trata de la creciente desigualdad desde principios de la década de 1980 en todo el país y la economía”, indica Joseph Brusuelas, economista jefe de RSM a la CNBC. “Cuando hablamos de K, la ruta superior de la K son claramente los mercados financieros, la ruta inferior es la economía real y las dos están separadas”.

**Los mayores casos de corrupción en España**

Un ministro socialista, Carlos Solchaga pronunció la famosa frase de que “España era el país europeo donde es más fácil hacerse rico”.

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, animó ayer durante un almuerzo con medio millar de empresarios reunidos por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que España es el país de Europa, y quizá del mundo, donde se puede ganar más dinero a corto plazo. (El País - 4/2/**1988**)

Y parece que muchos empresarios “entendieron” el mensaje y se pusieron en faena. Algunos ejemplos de cómo se hacen los negocios en “Corruptópolis” (breve selección realizada, entre los infinitos casos judicializados):

Sobre el Caso 3 per cent



La Audiencia Nacional investigará desde ahora la financiación ilegal de CDC, destapada en el “caso 3%”, según un auto emitido el pasado 18 de abril. En el escrito, al que ha tenido acceso El PERIÓDICO, se considera que los hechos investigados “podrían constituir” delitos de financiación ilegal de partido político, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, alteración de precios en concursos y subastas públicas, tráfico de influencias y falsedad en documentos mercantiles.

El magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, ha aceptado recibir el caso del Juzgado nº 1 de El Vendrell (Baix Penedès), después de que este se inhibiera a petición de la Fiscalía Anticorrupción, porque se trata, afirma en su auto, de “una conducta sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala (…) a lo largo de muchos años con participación de un partido político de Gobierno (Convergència), fundaciones (Catdem y Forum) y múltiples instituciones públicas (Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Autoridad Portuaria, distintos municipios catalanes…), junto a decenas de empresas de ámbito nacional y autonómico”.

El caso del 3% investiga el pago por parte de diferentes constructoras de dinero para Convergència a cambio de conseguir obra pública. El principal imputado en el caso es Germà Gordó, que fuera gerente del partido político y miembro del Govern de Artur Mas. Otros de los investigados son el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, y el exconcejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives.

Según recoge el auto judicial, se investigan 24 contratos de obras por un valor total, hasta ahora, de unos 175 millones de euros. Las “donaciones” irregulares para Convergència “ligadas a esas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros”. El juez De la Mata afirma en su escrito que las obras eran asignadas “torticeramente a cambio de donaciones para el partido político CDC y de prebendas personales para los actores participantes”.

El magistrado destaca “la envergadura de la operativa” de CDC y "el impacto en el mercado de su maniobra criminal" y concluye que “la economía nacional se pudo ver alterada por el volumen de contratación que quedó fuera de las reglas de derecho y la justa y libre competencia”.

En manos de la Audiencia Nacional queda desde ahora, por tanto, la investigación de posibles sobornos y donaciones ilegales en las obras de la estación del AVE de Girona, el contrato de recogida de residuos y limpieza en Olot, el mantenimiento de edificios escolares dependientes del Consorcio de Educación en Barcelona y el dique del este del Port de Barcelona, entre otros.

**Nota**: como anécdota risueña, pero que describe muy bien al personaje (Jordi Pujol), me permito recordar que este siniestro “capo della mafia” catalana, visitaba con mucha frecuencia a una “bruja” (Adelina) que tenía su “aquelarre” (cómo no) en Andorra (“paraíso fiscal” de la burguesía catalana, con anuencia y tolerancia de España, y la Unión Europea).

Como Jordi Pujol era un gran creyente de los conjuros, hechizos, pócimas y magia blanca de la Bruja Adelina, se permitía recomendarla a otros personajes de postín de la burguesía catalana. Pero había una condición, pactada con la Bruja Adelina: que del honorario que cobrara la adivina a cada cliente enviado por “Pujolone”, el 50% era para él “Don”. O sea.

Sobre el Caso Castor



El Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròz, que investiga el caso del proyecto Castor, ha decidido ampliar las imputaciones, que pasan de 18 a 20. En concreto, ha citado como nuevos investigados a un alto cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuando se desencadenaron los temblores, y a Carlos Barat, el director general de la empresa Escal UGS. Esta compañía se encargaba de este proyecto de almacén submarino, que a finales de 2013 causó medio millar de pequeños terremotos y tuvo que ser paralizado.

A Ángel Muñoz, que era subdirector general de Evaluación de Impacto Ambiental y ahora está en el área de Protección de la Costa del ministerio, y a Barat los cita el titular del juzgado a declarar para los próximos días 30 y 31 de mayo. El almacén de gas está paralizado desde que se detectó la cadena de temblores. Actualmente, está en situación de hibernación. Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS) recibió una compensación de 1.350 millones de euros cuando tuvo que parar, a los que recientemente se ha sumado el reconocimiento por parte del Ministerio de Industria de otros 295 millones. El contrato de este almacén submarino, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tenía una cláusula por la que si la obra se paralizaba, la promotora tenía derecho a que el Estado le devolviera la inversión.

Tramitación

La imputación de estas dos personas es la consecuencia de la petición que ha realizado el Ministerio Fiscal. En esta instrucción se investigan las presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación de Castor. Además de los nuevos imputados, el instructor cita a 13 testigos y a cinco peritos.

Entre otras diligencias, el juez ha pedido también a la empresa Escal UGS que aporte la filiación y los cargos de los operarios que se encontraban en la plataforma Castor durante la tercera fase de inyección de gas colchón. Fue durante esa última fase -al aumentar la presión de la inyección- cuando se registró la cadena de temblores.

Las diligencias por el caso Castor, que ya superan los 13.000 folios, han sido declaradas “causa compleja” por el número de investigados. Al entrar dentro de esta categoría, se amplía el plazo de instrucción de seis a 18 meses.

En este caso están imputados cargos de la Administración, los responsables de la promotora y técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGME), que participaron en la fase de evaluación de este proyecto. El titular del juzgado de Vinaròs culpa a todos los investigados de presuntos delitos de prevaricación medioambiental.

La factura del fiasco del almacén de gas Castor, que permanece paralizado después de causar medio millar de pequeños seísmos, ronda ya los 1.700 millones de euros, el cálculo que hace más de dos años ofreció el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. A los 1.350 millones que el Gobierno ya pagó a los promotores como “valor neto de la inversión” cuando se decidió la hibernación del almacén por los terremotos desencadenados, el departamento de Soria ha añadido otros 295,6 millones, según ha adelantado este jueves elconfidencial.com y han confirmado a EL PAÍS fuentes de la empresa promotora del almacén. Esa cantidad se corresponde a los “derechos retributivos” por los dos años y tres meses en los que este almacén estuvo operando, aunque fuese en fase de pruebas. (El País)

Sobre el Caso CatalunyaCaixa



El expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra deberá sentarse ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el próximo 20 de febrero para declarar como investigado por el ‘agujero’ de 720 millones causado en la malograda entidad por operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007. El también exvicepresidente del Gobierno con Felipe González no será el único en desfilar ante el juez. Ese mismo día también están llamados a comparecer como investigados los ex directores generales de la caja catalana Adolf Todó y José María Loza.

El 21 de febrero están citados otros exdirectivos de la entidad Lluis Gasull, Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güel; el día 22 deberán declarar Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso y Joan Echaniz. El 23 comparecerán ante el juez Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la imputación de la antigua cúpula de la caja catalana por “una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria” llevada a cabo entre los años 2000 y 2007 basada en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia.

El Ministerio Público denunciaba a los ex altos cargos por “notables irregularidades” en la gestión de CatalunyaCaixa que podrían suponer un presunto delito continuado de administración desleal. Estas supuestas irregularidades habían sido detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se vio obligado a rescatar la entidad.

“En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados”, destacaba.

Sobre el Caso Emperador



La familia del Rey, y no solo la más cercana, aparece salpicada por distintos casos de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde hasta el próximo 17 de junio a 12 empresarios y tres familiares de don Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la rama hebrea de la organización. Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.

Entre los primeros detenidos se encontraron un abogado que fue indultado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y un Inspector de Policía condecorado en 2011 con la medalla al Mérito Policial con distintivo Rojo por el entonces Ministro de Interior Antonio Camacho.

Banús Ferré y Ortega Cedrón han quedado en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con sendas fianzas de 50.000 y 80.000 euros. El primero ha admitido durante su declaración que tenía cuentas en Suiza y que se acogió a la amnistía fiscal, aunque ha asegurado que no recibió dinero de los responsables de la trama desmantelada con la “operación Emperador”. Ortega Cedrón, por su parte, se ha negado a declarar.

La operación “Emperador” ha estado dirigida desde el principio por el juez Andreu y hasta el momento se han llevado a cabo 80 detenciones de las 110 órdenes de arresto emitidas. Entre los detenidos destaca el cabecilla de la red criminal, el empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada; José Borrás, concejal del PSOE y el actor porno Nacho Vidal. Gao Ping es conocido por poseer una gran galería de arte y decenas de sociedades que se dedicaban al comercio exterior. Se le atribuyen contactos políticos de alto nivel.

Sobre el Caso La Sal



ACS se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido en un extenso informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta y cargaron luego sus deudas a los presupuestos regionales, utilizando por el camino contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue remitido el pasado enero al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que desde hace dos años investigaba en secreto la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal. Según los expertos en delitos económicos de la policía, hasta 32 personas habrían colaborado en un presunto fraude que reproduce el esquema del proyecto Castor, por el que ACS reclamó en los tribunales al Gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones de euros. Entre los implicados, se encuentran el exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. El grueso de las decisiones bajo sospecha se adoptó durante el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.

Por un lado, los investigadores sostienen que ACS y el Gobierno regional se habrían concertado para licitar la instalación al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En lugar de sacar a concurso las obras y la gestión, el Gobierno del PP hizo el camino inverso. Primero, la compañía que preside Florentino Pérez pagó 1,1 millones de euros en presuntas facturas ficticias para aliarse con inversores locales que pretendían construir una desalinizadora que paliara el déficit hídrico de la región. Fruto de esa alianza, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la mercantil Desaladora de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder. Las obras costarían 111 millones de euros -aunque documentos internos las cifraron inicialmente en 24,6 millones, cuatro veces menos- y las ejecutarían filiales de la propia cotizada.

Menos de un mes después, el 17 de febrero de 2006, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA, convirtiéndose ya a partir de ese momento en un proyecto participado mayoritariamente por la Administración. El Ejecutivo murciano cedió el suelo en el que se levantaría la infraestructura. La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales, provocó que la comunidad asumiera en ese instante todas las cargas a las que se había comprometido ACS previamente. Entre ellas, un contrato que obligaba a abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También tenía que comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.

Entre la información intervenida, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA. La UDEF ha concluido ahora que, en realidad, el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración entrara en el proyecto cuando ACS y el resto de inversores privados ya se habían repartido las ganancias. Correos electrónicos hallados en registros demostrarían que, al menos desde diciembre de 2005, cargos del PP en puestos clave conocían las operaciones de la constructora y comunicaron a la parte privada que la Administración asumiría todas las cargas en el último instante, como ocurrió finalmente con la compra del 51% de ACS. “Se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación”, sostienen los investigadores.

Entre la información intervenida en bufetes involucrados, hay contratos en los que la constructora y los socios locales cierran acuerdos con Hidronostrum SA y desarrollan los efectos de la entrada de esa mercantil en Desaladora de Escombreras SA. Lo sorprendente es que esos documentos fueron redactados al menos ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública y permitiera a esta comprar el 51% en poder de ACS.

En uno de esos acuerdos previo a la entrada del capital público, Desaladora de Escombreras SA pactó con una filial de la constructora -es decir, ACS consigo misma- que la explotación de la planta duraría 25 años y que si la primera resolvía anticipadamente el acuerdo, debería abonar el importe de todo el periodo. Cuando la Administración llegó a la infraestructura, asumió automáticamente esa cláusula.

Fueron bufetes privados los que confeccionaron semanas antes de la constitución de Hidronostrum SA todo un calendario de firmas que incluía hasta 15 contratos -la mayoría con fechas falsas- que permitirían a la constructora y a los inversores asegurarse ganancias millonarias con la ayuda de los responsables públicos. “Los contratos más gravosos para la Administración pública se firmaron cuando las empresas participantes eran privadas”, señala la UDEF. “Tal y como acabó llevándose a cabo, todo el coste y el riesgo del mismo iba a ser asumido por la parte pública, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido”.

Ya con la Administración pública dentro del proyecto, el Gobierno del PP siguió colaborando con los intereses de los promotores privados. Banesto aceptó financiar la obra, pero reclamó garantías. El Ejecutivo murciano salió de nuevo al rescate de ACS y presentó todos los avales en solitario. Envió una “comfort letter” al banco en la que “asumía como propias las obligaciones de pago” que correspondieran a Desaladora de Escombreras SA y “se obligaba a aportar” a esa sociedad “los fondos que fuesen en cada momento necesarios” para abonar esos compromisos. La UDEF ha descubierto que la carta fue redactada por directivos de ACS a comienzos de 2006 y que el Gobierno murciano únicamente la envió al banco. Ningún gestor público se opuso. De hecho, se evitó que la Intervención se pronunciara sobre este compromiso multimillonario. A cambio, el Ejecutivo regional solicitó informes a abogados externos que, por supuesto, respaldaron la presentación de los avales.

La presunta trama siguió operando en los años siguientes. A pesar de que en 2010 Desaladora de Escombreras SA ya atravesaba por graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y que la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera, el Ejecutivo del PP decidió comprarle su 49%. “Así, se producirá la paradoja de que, mientras las empresas privadas tratan a toda costa de desvincularse de la operación de la planta desaladora, las empresas públicas tratarán de manera insistente de hacerse en exclusiva con la totalidad del negocio”.

Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos. La constructora reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034, según los acuerdos que ella misma se había otorgado. Solo invirtió 1,1 millones de euros para entrar en el negocio, pero si salen adelante sus reivindicaciones, podría recibir 600 millones, cosechando una rentabilidad récord del 60.000%. Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar ahora esas exigencias si se demuestra que toda la operación se basa en una cadena de engaños. Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos

Los expertos en delitos económicos no entran en los motivos que pudieron llevar a los cargos políticos del PP a mirar reiteradamente para otro lado -un hipotético delito de cohecho ya habría prescrito-, pero apuntan que la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos en pleno “boom” inmobiliario. Ante los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que negaba la disponibilidad de agua para construir más viviendas, el Ejecutivo de Valcárcel recurrió a la producción extra de esta desaladora para recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo en los que se proyectaron hasta 250.000 casas.

El informe de la UDEF supone un salto en el caso La Sal. La instructora del procedimiento, la jueza María del Mar Azuar, acordó el 7 de marzo imputar a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto. Tendrán que pasar por su tribunal el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá; los exgerentes del EPA Amalio Garrido y José Manuel Ferrer; el abogado que representó a este organismo público, Antonio Arnaldos; los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval.

Sobre el Caso Palau



La sentencia del caso Palau convierte en una realidad el 3%. La Audiencia de Barcelona ha ordenado el decomiso de 6.676.105 euros a CDC y ha condenado a su extesorero, Daniel Osàcar, a cuatro años y cinco meses de prisión por el cobro de comisiones ilícitas procedentes de Ferrovial, que a cambio recibía obra pública. Félix Millet ha recibido una pena de nueve años y ocho meses de prisión; Jordi Montull, a siete años y seis meses de prisión; y Gemma Montull, a cuatro años y seis meses. También se condena a otras ocho personas. A los tres asesores fiscales externos del Palau de la Música se les condena a dos años, Raimon Bergós, un año y nueve meses, Santiago Llopart, y once meses, Edmundo Quintana. Y a los cinco empresarios que cobraron sus trabajos para el Palau, aunque eran para CDC, les han caído un año y nueve meses (Pedro Luís Rodríguez, Vicente Muñoz y Juan Antonio Menchén) y ocho meses (Miguel Giménez-Salinas y Juan Manuel Parra). Los magistrados han absuelto a un directivo y a un exdirectivo de Ferrovial, Juan Elizaga y Pedro Buenaventura; a la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano; y al empresario Marc Martí.

La sentencia considera probado que Felix Millet y Jordi y Gemma Montull organizaron un sistema por el cual Ferrovial-Agroman vehiculaba comisiones a CDC por medio del Palau, para la consecución de obra pública; concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban en manos de miembros de Convergència. Así, la estructura económica del Palau se puso al servicio de esta finalidad. La comisión era del 4% sobre el contrato otorgado. El 2,5% era para el partido, y el 1,5% restante para Millet y Montul, que a su vez se lo repartían siguiente el porcentaje de 80% para el primero y 20% para el segundo.

Millet y Montull pactaron este sistema con el antiguo tesorero de la formación política, Carles Torrent, ya fallecido, acuerdo que continuó con Osàcar. Ahora bien. Los jueces no descartan que haya participado en el entramado más personas del partido, que no han sido identificadas o cuyos posibles delitos han prescrito.

De esta manera, CDC obtuvo entre 1999 y 2009 la cantidad de 6.676.105 euros por lo menos, que es lo que ahora el tribunal ordena decomisar.

La Audiencia de Barcelona ha cifrado en su fallo en 23 millones de euros el desfalco perpetrado en el Palau de la Música por Millet y los Montull. Una buena parte fue destinada a gastos personales de los prohombres de la institución, como viajes de vacaciones a destinos exóticos, obras en sus casas particulares o sufragar las bodas de las hijas de Millet. Los magistrados aseguran que, a día de hoy, todavía no se sabe a dónde fueron a parar 6.026.866 euros, salidos de las cuentas bancarias de la entidad.

El caso del Palau de la Música se conoció el 23 de julio de 2009, cuando la Fiscalía Anticorrupción registró la institución. La causa fue una querella presentada por un presunto delito fiscal, debido a la abundancia de billetes de 500 euros detectados en el seno de la entidad; moneda que estaba sometida a control por ser el vehículo ideal para el blanqueo de capitales. La sorpresa no se hizo esperar: en las agendas de los responsables se hallaron anotaciones, mails y faxes que podían corresponder al pago de comisiones a cambio de la concesión de obra pública. El beneficiario, Convergència Democràtica de Catalunya; el pagador, Ferrovial; el intermediario, el Palau.

Entre las posibles licitaciones sospechosas estaban la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro, así como una acequia y el polideportivo de Sant Cugat. El reparto, según las anotaciones, sería el siguiente: el porcentaje era del 4%. Un 2,5% era para el partido y un 1,5% para Félix Millet y Jordi Montull. Después, estos dos se repartían el dinero así: un 80% para el primero y un 20% para el segundo.

Millet reconoció que había desviado dinero del Palau en beneficio propio: para pagar obras en su torre de l’Ametlla o para viajes de lujo. Montull también. Pero no hablaron de las comisiones. Hasta el 8 y 9 de marzo pasado, cuando confesaron en el juicio que sí desviaban fondos procedentes de Ferrovial a CDC, algo que negaron un directivo de la compañía, Juan Elizaga; un exdirectivo, Pedro Buenaventura; y el extesorero del partido y gerente de la fundación CatDem, Daniel Osàcar; todos también acusados.

La auditoría que realizó Hacienda sobre el desfalco señala que entre 2002 y 2009 se evaporaron de las cuentas del Palau 22.731.817 euros; de los cuales 9.677.313 no hay rastro de a dónde fueron a parar. La auditoría interna del propio Palau, encargada a Deloitte, elevaba la cantidad a 35 millones de euros. Uno de los modos principales de operar era sacar el dinero de los bancos y llevarlo al edificio, donde se depositaba en una caja fuerte, con escenas tan chuscas como bedeles del Palau transitando por la Via Laietana con mochilas repletas de billetes.

Por este método, según Hacienda, Millet se apropió de 7.021.245 euros y Jordi Montull, 1.318.443. Las ganancias que ambos se atribuían eran anotadas en libretas con las siguientes siglas: GPO, que según la tesis de la acusación significaban, simplemente, “guanys per obra”. Millet y Montull han devuelto en la actualidad 6.373.300 euros.

**Nota**: como anécdota risueña, pero que describe muy bien a ciertos personajes de la fauna corrupta de la burguesía catalana, Millet no solo utilizó los fondos del Palau, para sufragar las bodas de su hijas, que por supuesto se realizaban en los salones del mismo Palau de la Música Catalana (con la única sala de conciertos declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO - 4 de diciembre de 1997), sino que le cobró a los “consuegros”, el 50% de los gastos de la boda, como si él hubiera pagado con recursos propios la celebración. Una actitud digna del “seni” (sensatez) catalán. “La pela es la pela”. Sin duda Don Jordi sabía elegir bien a sus “cajeros”.

Sobre el Caso Púnica



Operación Púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco.

El 27 de octubre de 2014, fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales -del 2-3% del volumen del contrato- que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.

Según la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una «trama de corrupción municipal y regional infiltrada en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia».

El nombre de “Operación Púnica” otorgado al operativo por parte de la Guardia Civil provino del nombre científico del granado, Punica granatum, haciendo por tanto una referencia velada a Francisco Granados.

Entre los detenidos se encuentran Francisco Granados, aparentemente el número uno de la trama y secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, y quien ostentó los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes de la Comunidad de Madrid, seis alcaldes de la Comunidad de Madrid (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle), el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. Varios empresarios, que supuestamente serían los corruptores, fueron detenidos y varias sedes de empresas registradas. Entre las empresas involucradas en la red corrupta, la más destacada sería Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez, que acaparó 160 de los 250 millones de euros amañados.

Tras la detención el día 28 de octubre de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, el nombre de la empresa Indra también apareció como una de las beneficiarias.

Políticos implicados

El 27 de octubre del 2014 eran 35 los detenidos, y otras 15 personas permanecen imputadas.

El 31 de octubre el juez decretó el ingreso en prisión de Francisco Granados, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional mes y medio después al entender que persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, lo que en aquel mes y medio pudo perfectamente ocurrir, pues tuvieron tiempo sobrado para ello. En el auto se recordaba que a Granados se le atribuye “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”. La Audiencia Nacional también desestimó el recurso sobre la supuesta ilegalidad de su detención.

El 4 de noviembre, Antonio Sánchez Fernández, exalcalde de Serranillos del Valle era descubierto por la Guardia Civil llevándose cajas de documentos de la alcaldía, tras haber sido alertada por un funcionario local de la posibilidad de estar cometiendo un delito. Durante el suceso, Sánchez estaba imputado y siendo investigado por prevaricación, fraude, cohecho y malversación. Previo al suceso, había alegado mala salud como motivo para no haber ido a declarar ante el juez. En este caso hay políticos del PP, PSOE e IU.

Sobre el Caso Rescate Bancario



El rescate bancario tiene un alto coste: en concreto, a 31 de diciembre de 2017 se situaba en 64.953 millones de euros. En esa fecha, los recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero se situaban en 42.621 millones aportados por el Estado y 22.332 millones por el propio sector a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

Según los datos actualizados por el Banco de España, entre 2009 y 2017 las ayudas públicas a la banca en forma de apoyo de capital -en dinero contante y sonante- en el rescate bancario han ascendido a 64.098 millones de euros en fondos aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos.

Además de las aportaciones de capital, se estiman los fondos provisionados para hacer frente a los costes que puedan derivarse de garantías concedidas en los procesos de integración y venta, cuyos importes actualizados se cifran en 11.590 millones de euros en el caso de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) y 2.026 millones para otras garantías, algunas de ellas ya ejecutadas.

De todo ese dinero, a 31 de diciembre de 2017, sólo se habían recuperado 5.150 millones -menos del 9%- han sido recuperados a través de reembolsos, venta o resolución de entidades. De esa cantidad recuperada, 4.477 millones corresponden al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 673 millones al Fondo de Garantía de Depósitos

¿Se podrá recuperar algo más de ese 9%? El Banco de España calcula que sólo se podrán recuperar 9.857 millones por la privatización de Bankia, menos de la mitad de lo que costó su rescate, que ascendió a 24.069 millones de euros. El resto de entidades financieras ya no van a dar dinero al Estado.

Este concepto de coste no incorpora las pérdidas que han soportado los antiguos accionistas, ni las de los tenedores de preferentes y deuda subordinada, como resultado de los ejercicios de gestión de híbridos realizados como parte del acuerdo de asistencia financiera firmado con el MEDE. Tampoco incorpora los intereses obtenidos, ni los gastos incurridos.

Sobre el Caso Taula



Se trata de una pieza, aún secreta, del Caso Imelsa (\*). En ella se investigan las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la investigación se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.

El magistrado decidió en julio de 2016 separar el caso en tres piezas: la principal; la que investiga los hechos relacionados con el servicio de atención multicanal a los contribuyentes, el call center, que la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, adjudicó a Servimun por un importe de casi 843.000 euros para los años 2013, 2014 y 2015 y una tercera que investiga las supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la celebración de la XVII Mostra de Valencia en 2006.

El agujero que se estima es de 1.300.000.000 de euros y solo en una de sus piezas.

(\*) Sobre el Caso Imelsa



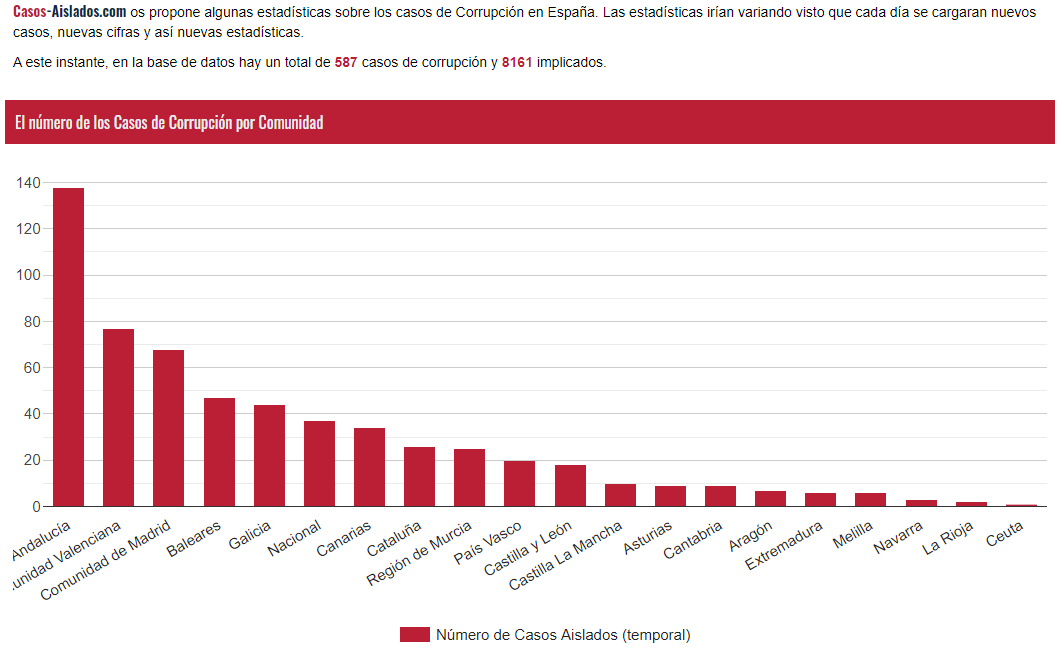
Las siglas se corresponden con la empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez.

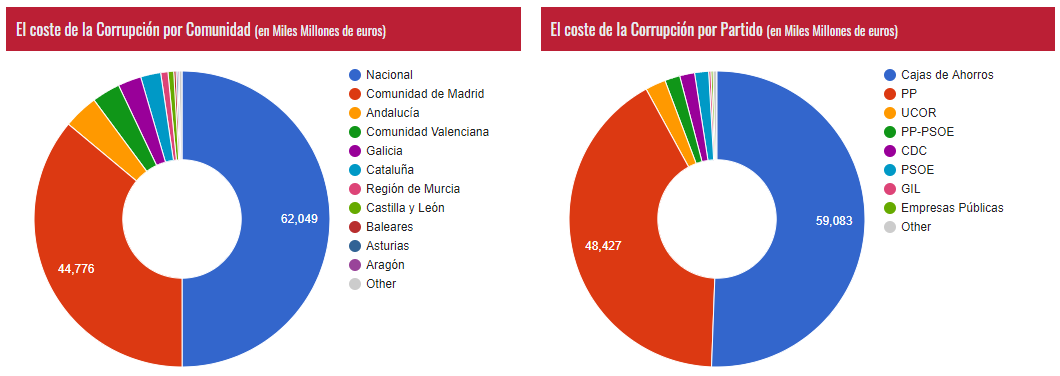
Según el TSJCV hay 130 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat -especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios-, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia. Parte del dinero así obtenido habría servido para financiar al partido.

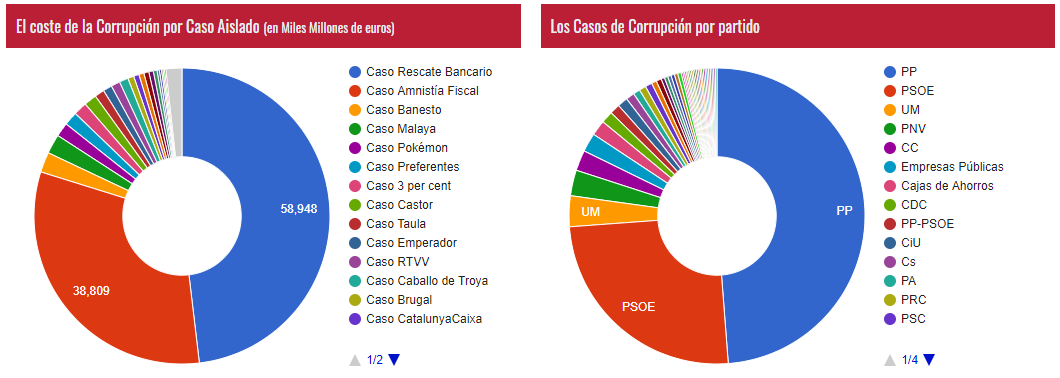
Hasta el momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una pieza principal, aún secreta, conocida como “Caso Taula” en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la del blanqueo de capitales en el Consistorio valenciano, ampliada posteriormente a delito electoral, en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear efectivo de supuesta procedencia ilícita (en la que está imputado el Partido Popular) y la de las contrataciones y finiquitos irregulares en Imelsa.

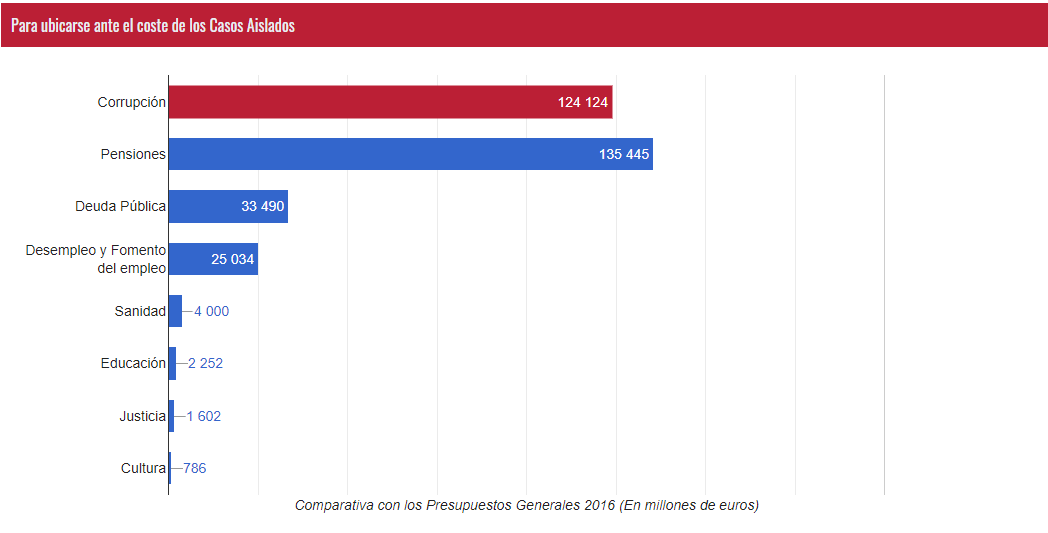
(Fuente: Casos-Aislados.com - Listado de los Casos de Corrupción en España)

**- Coste total estimado: 124.124.090.826 €**









“Son Casos Aislados”, “Son unas pocas Manzanas Podridas”..., expresiones que llevamos escuchando desde hace mucho tiempo por parte de algunos Partidos Políticos y Poderes Económicos... Las hemos estado escuchando hasta que parecíamos paranoicos -o casi- hablando de la Corrupción como si fuera un “Problema”, mientras nos decían que “No era para tanto”.

¿Y si juntamos estos “Casos Aislados”, a estas “Manzanas”?



**Esperando a Godot**

Hay muchos otros casos de obras públicas de dudoso provecho económico, gasto excesivo, desperdicio de recursos, populismo, clientelismo, connivencia, prevaricación, presunta corrupción, presunta malversación, financiamiento de los partidos políticos, etc. etc…

De todos ellos, por su falta de sentido económico (en tiempo y forma), y por los montos involucrados (recursos fiscales, créditos, y subvenciones de la UE), elijo los siguientes:

- La ruina del AVE en España: sobrecostes, retrasos y falta de pasajeros (El Español - **26/6/18**)

El Tribunal de Cuentas Europeo critica que se han construido muchas líneas que no son viables por motivos puramente políticos.

(Por Juan Sanhermelando)

España ha invertido en los últimos años mucho dinero en infraestructuras de tren de alta velocidad (AVE) y posee ya la segunda red más grande del mundo, sólo superada por China. Entre el año 2000 y el 2017, nuestro país ha sido el principal beneficiario de subvenciones de la UE para la alta velocidad: ha recibido un total de 11.200 millones de euros, el 26% del coste de la red española. Pero este esfuerzo no se ha traducido en unas conexiones eficaces dentro de la Península Ibérica y con el resto de Europa. El resultado son sobrecostes, retrasos, trenes que circulan a una velocidad inferior a la prevista y falta de pasajeros, según se detalla en un informe del Tribunal de Cuentas de la UE publicado este martes.

El estudio audita un total de 10 líneas de alta velocidad en toda la Unión Europea, tanto en construcción como ya terminadas. Entre ellas cuatro españolas: Madrid-Barcelona-frontera francesa; Eje Atlántico en Galicia; Madrid-Galicia; y Madrid-León, así como las conexiones transfronterizas entre Figueras y Perpiñán y la “Y vasca”. Y su principal conclusión es que “la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa a menudo en consideraciones políticas y normalmente no se utilizan análisis de coste-beneficio para tomar decisiones”.

“En España, la mayoría de los estudios daban como resultado ratios de rentabilidad muy bajos y algunos proyectos no eran viables desde una perspectiva socioeconómica”, denuncia el informe. Aun así, los sucesivos Gobiernos españoles han seguido adelante con la construcción de estas líneas claramente deficitarias.

Además, pese a que el objetivo de la red de alta velocidad debía ser mejorar la conexión con Europa, tres de las líneas auditadas (el Eje Atlántico, parte de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia y la línea entre Madrid y Extremadura) todavía usan el ancho de vía ibérico, incompatible con el ancho de vía europeo. El resultado es que la velocidad máxima se limita en ellos a 250 kilómetros por hora, muy por debajo de la referencia de 350 km/h para la alta velocidad en España. Los trenes que operaran en estas rutas deben ser de ancho ibérico o contar con un cambiador de ancho de vía. Existen una veintena de cambiadores de este tipo en España, que cuestan hasta ocho millones de euros cada uno. La UE ha aportado una financiación de 5,4 millones de euros.

En la mayoría de los casos, los trenes circulan en todas las líneas de muy alta velocidad examinadas a velocidades muy inferiores a las previstas, lo que plantea dudas a los auditores sobre la gestión financiera de estos proyectos. El caso más flagrante es el de la línea Madrid-Galicia, donde la velocidad real es sólo el 29% de la prevista (110 km/h en lugar de 350 km/h). Pero lo mismo ocurre en los tramos Figueras-Perpiñán (36%), Madrid-León (39%), Eje Atlántico (124 km/h en lugar de los 250 km/h previstos, el 50%) o incluso Madrid-Barcelona (54%).

Los auditores critican además que la red española del AVE no está conectada a ninguno de los dos principales aeropuertos de España (Madrid y Barcelona), pero sí al de Ciudad Real, que no tiene pasajeros.

Retrasos y sobrecostes

El estudio revela que todas las líneas de alta velocidad en España han sufrido importantes retrasos y sobrecostes. La línea Madrid-Barcelona-frontera francesa tardó 16 años en construirse, aunque si se contabilizan los plazos desde que empezó a planificarse la cifra sube a 25 años. Por su parte, la ruta Madrid-Galicia, que está previsto que esté operativa en 2019, habrá costado 21 años desde la planificación y 18 desde el inicio de los trabajos. En el Eje Atlántico y la línea Madrid León los plazos son de 17 y 14 años, respectivamente. Pero la palma se la lleva la línea Múnich-Verona, que está previsto que se concluya en 2040, medio siglo después de que se empezara a planificar.

En cuanto a los sobrecostes, la línea española que más se ha desviado del presupuesto original (un 38,5%) vuelve a ser Madrid-Barcelona-frontera francesa; seguida de la Madrid-León (33,3%) y del Eje Atlántico (26,3%). No hay estimaciones para Madrid-Galicia. En todo caso, el coste medio total por kilómetro de AVE en España asciende a 14 millones de euros, más barato que en Alemania (15 millones), Francia (15) o Italia (33). De hecho, los mayores sobrecostes (622,1%) detectados por el Tribunal de Cuentas corresponden a la línea Stuttgart-Múnich.

Si se calcula el coste por minuto de viaje ahorrado, las líneas más caras son Madrid-Galicia (70 millones), Madrid-León (57 millones), Madrid-Barcelona (39,7 millones) y Eje Atlántico (34,6 millones). El coste más alto por minuto de viaje ahorrado corresponde a la conexión Stuttgart-Múnich (368,69 millones). El Tribunal de Cuentas sostiene que haber optado por soluciones alternativas como mejorar las líneas convencionales existentes podría haber ahorrado millones.

Una línea de alta velocidad debe tener nueve millones de pasajeros, o al menos seis millones en su primer año de funcionamiento, para ser viable. Sin embargo, los auditores concluyen que en España sólo hay una ruta entre las concluidas que cumple este criterio: Madrid-Barcelona-frontera francesa. Ni el Eje Atlántico ni la línea Madrid-León, alcanzan este volumen de viajeros.

El informe examina también el potencial de pasajeros de cada línea a partir del número de habitantes de la zona por la que pasan. El resultado de este análisis es que tampoco las conexiones Madrid-Galicia, Figueres-Perpiñán y la “Y vasca” son viables. “Se está invirtiendo en líneas que tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. Las deudas para algunas líneas son bastante grandes, no sólo por los costes de construcción sino por el número de pasajeros”, ha dicho a EL ESPAÑOL uno de los autores del informe, Luc T’joen.

Malas conexiones con Portugal y Francia

Los auditores critican además la mala calidad o directamente la falta de interconexiones entre los países de la UE. “La red europea de alta velocidad es sólo un mosaico de líneas nacionales sin una coordinación adecuada en las fronteras, planificada y construida por los Estados miembros de manera aislada, con el resultado de pobres conexiones”, asegura el estudio.

En el caso de España, el ejemplo más grave es la conexión con Portugal por Extremadura. Madrid y Lisboa habían pactado una línea de alta velocidad por esa ruta, pero tras el estallido de la crisis de deuda el proyecto se anuló por demasiado caro, pese a que ya se habían gastado 43 millones de euros en ayudas de la UE. En el momento en el que se realizó la auditoría, las obras del AVE en la parte española terminan a ocho kilómetros de la frontera con Portugal.

También hay problemas en la conexión con Francia a través del País Vasco. Como el tramo entre Burdeos y la frontera española no es una prioridad para el Gobierno de París, la infraestructura en la frontera es anticuada e incompatible con una red de alta velocidad moderna. En la parte española de la frontera, continúan los trabajos para conectar la “Y vasca” con el resto de la red española. El resultado es que en la estación de Hendaya todos los pasajeros tienen que cambiar de plataforma y tren para cruzar la frontera.

- Aeropuertos vacíos en la España del boom del turismo (El Independiente - **26/11/17**)

(Por David Page)

Faltaban unos minutos para el mediodía y el avión echó a rodar por la pista. A bordo, un equipo de balonmano al completo que viajaba a A Coruña para disputar su partido. Fue a la aerolínea Pyrenair (entonces recién nacida y a la postre efímera) a la que correspondió el honor de inaugurar con ese primer vuelo el nuevo aeropuerto de Huesca-Pirineos. Era el 14 de abril de 2007.

En realidad el aeródromo llevaba funcionando desde los años 30 del siglo anterior como aeroclub, pero fue hace una década cuando se estrenaba como aeropuerto para vuelos comerciales. Lo hacía tras una profunda reforma en la que Aena invirtió algo más de 40 millones de euros. Nueva terminal, nuevo campo de vuelos… Un nuevo aeropuerto en toda regla.

Y las previsiones para el nuevo aeropuerto eran más que optimistas. Las inversiones se quisieron justificar en que por él pasarían unos 160.000 pasajeros al año con la cercanía de las pistas de esquí del Pirineo como gran reclamo. 10 años después las estimaciones oficiales se han demostrado no optimistas, sino disparatadas.

En este tiempo el récord absoluto de viajeros se alcanzó en 2009, pero no con 160.000, sino sólo con 6.228 pasajeros. Y ese fue el mejor año. El peor fue el pasado, cuando por el aeropuerto de Huesca sólo pasaron 95 viajeros, a razón de un pasajero cada cuatro días.

En comparación a ese desastre, 2017 está siendo un año bueno para Huesca-Pirineos. El tráfico se viene disparando en los últimos meses, con un crecimiento de casi un 160% entre enero y octubre. En lo que va de año van ya 246 pasajeros, así que completará el ejercicio por encima de los 250. Pese al fuerte incremento, la media seguirá estando por debajo de un pasajero al día.

Las otras terminales desiertas

El de Huesca no es un caso aislado. En pleno boom del turismo y en otro año de récord para el país, en España sigue habiendo aeropuertos vacíos. No hablamos de aeropuertos fantasma, que los sigue habiendo (aquellos que tras inversiones millonarias siguen en el dique seco y con sus instalaciones fuera de servicio: Ciudad Real, Murcia-Corvera…), sino de aeropuertos casi desiertos aunque estén operativos.

Aena, el gestor de la red estatal de aeropuertos, va como un tiro. Aupado por el aluvión de llegadas de turistas extranjeros y por la recuperación de la demanda de los viajeros nacionales, el grupo marcará un nuevo máximo histórico este año con cerca de 250 millones de pasajeros (el año pasado alcanzó los 230 millones de viajeros, que ya fue récord). Pero en su red mantiene algunos centros con una actividad reducida y en los que el boom del turismo está lejos de notarse.

Según las estadísticas oficiales de Aena, en lo que va de año, Albacete no llega a un total de 1.000 pasajeros (poco más de tres cada día). Por el aeropuerto de Burgos han pasado de media, 17 viajeros por día. Córdoba ha registrado 22 viajeros por jornada; Salamanca, 48 usuarios; Logroño no llega a 54 por día; León, 125 pasajeros; La Gomera y Badajoz empatan a 134 viajeros; Vitoria lleva 192…

En los gigantes de la red de aeropuertos, por el contrario, las magnitudes impresionan: Madrid-Barajas roza los 148.000 pasajeros diarios; Barcelona-El Prat supera los 134.500; por el de Palma de Mallorca pasan de media 86.000 viajeros al día; en Málaga son casi 54.500, en Alicante, 40.000 cada jornada…

“La red de aeropuertos de Aena cuenta con instalaciones cuya actividad principal no es la operación de vuelos comerciales”, subrayan fuentes de la compañía. “Algunas instalaciones permiten la operación de otro tipo de actividad y, de no ser por ellas, sería muy difícil de compatibilizarlas con las operaciones comerciales habituales de los aeropuertos, principalmente de los grandes aeropuertos”. Algunos centros están volcados en vuelos de formación, en trabajos aéreos, en la aviación privada o deportiva, en servicios del Estado (Policía, Guardia Civil, servicios contraincendios, servicios médicos…) precisamente para descongestionar otras instalaciones aeroportuarias de este tipo de actividades.

Es el caso de aeropuertos como el de Burgos o Salamanca, o incluso también el de Huesca-Pirineos, en los que una parte importante de la actividad está vinculada a escuelas de formación aérea, a operaciones de servicio público, aunque se combinen con operaciones comerciales. O también de los pequeños aeródromos de Madrid-Cuatro Vientos, Sabadell o el mallorquín de Son Bonet, centrados en aviación general, formación y servicios estatales, y que acumulan decenas de miles de operaciones al año.

En paralelo, se destaca desde Aena, algunos centros reflejan muy bajas estadísticas de viajeros, pero por estar volcados en el negocio de carga. Es el caso del aeropuerto de Vitoria, que apenas tiene pasajeros, sí, pero que es el cuarto mayor de España por mercancías transportadas. O el de Zaragoza, el tercer mayor centro de carga, sólo por detrás de los gigantes de Madrid y Barcelona.

¿Sobran aeropuertos?

La Unión Europea elaboró hace tres años un estudio sobre la sostenibilidad y justificación del mantenimiento de determinadas infraestructuras. Según sus estimaciones, no merecía la pena mantener abierto un aeropuerto si tenía menos de 100.000 pasajeros al año, porque por debajo de esa cota la rentabilidad era inviable.

Según este criterio, una decena de los aeropuertos gestionados por Aena (sin contar los helipuertos de Ceuta o de Algeciras o un puñado de centros centrados en la aviación privada o en la formación aeronáutica) tendría que echar el cierre.

Si no se alcanzaban los 100.000 viajeros anuales, el aeropuerto perdía de media 130 euros por pasajero, y sólo estaría justificado que siguiera operativo si cubría una necesidad particular por la que no fuera imprescindible su rentabilidad económica: ser el único aeródromo de una isla, por ejemplo. Sería el caso del aeropuerto de La Gomera o de Hierro, con poco pasajeros, pero fundamentales para los habitantes isleños.

La última vez que Aena desveló la rentabilidad de cada uno de sus aeropuertos –con datos correspondientes al ejercicio 2014- sólo catorce del total de 48 instalaciones que gestiona en España obtenía beneficios antes de impuestos. El resto –más de dos tercios del total- estaba en números rojos.

Frente a las críticas de sobredimensionamiento de la cartera infraestructuras, de solapamiento de aeropuertos a escasa distancia (tres centros en Galicia, cuatro en Castilla y León…), del escaso tráfico en algunos de ellos…, el modelo aeroportuario español es el de unas instalaciones que funcionan en red, en la que los beneficios de unas enjugan las pérdidas de otras, y en el que la rentabilidad económica no es el único criterio para justificar un aeropuerto si existe rentabilidad social y/o sirve como herramienta de dinamización de una zona.

Aeropuertos fantasma en España

Aeropuerto de Castellón

El 25 de marzo de 2011, Francisco Camps y Carlos Fabra inauguraron el aeropuerto de Castellón, construido con una inversión de 150 millones de euros, sin aviones y cuando ni siquiera se había pedido permiso para navegación aérea. Unas 1500 personas llegadas en más de 30 autobuses de toda la provincia, estuvieron presentes en el acto de inauguración:

“Hay quienes dicen que estamos locos al inaugurar un aeropuerto sin aviones, pero no han entendido nada. Durante el próximo mes y medio cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar la terminal o caminar por las pistas de aterrizaje, algo que no podrían hacer si fueran a despegar o aterrizar aviones”. (Carlos Fabra inaugurando el aeropuerto sin aviones de Castellón, 25 de marzo de 2011)

El aeropuerto de Castellón tiene una estatua inspirada en Carlos Fabra que costó 300.000 euros.

Además, en septiembre de 2012 se supo que han gastado un total de 35 millones de euros en publicidad y que el director general del aeropuerto, Juan García-Salas, se subió el sueldo en 4.000 euros a pesar de que la orden era recortarlo en un 15%.

Un error de cálculo obliga a demoler parte del Aeropuerto de Castellón.

Las cifras del aeropuerto fantasma de Castellón: 368.865 euros en sueldos.

El aeropuerto de Castellón estudia su ampliación antes de recibir el primer vuelo

Aeropuerto de Ciudad Real

El aeropuerto de Ciudad Real supuso una inversión total de 1000 millones de euros y en abril de 2012 se comunicó que echaba el cierre.

Aeropuerto de Lleida

El aeropuerto de Lleida costó 95 millones de euros y dado el poco tráfico aéreo (4 vuelos a la semana) se usa como restaurante.

Aeropuerto de Málaga: Segunda Pista

En el año 2012 se inaugura un aeropuerto nuevo que duplica al anterior Málaga-Pablo Ruiz Picasso. Su nueva pista se obtiene invadiendo el cauce del Río Guadalhorce (véase google Earth, menú de imágenes históricas), que pasa de tener meandros con arbolado de ribera a una línea recta hormigonada y empedrada. Además, se expropia la población de San Isidro, aneja a Málaga, que se demuele para implantar los nuevos servicios. Paralelamente, desde 2011 bajan de forma espectacular el número de vuelos y viajeros al año, a la vez que se desinfla el fenómeno de low cost con compañías de dudosa seguridad. Es decir, funciona algo menos que cuando sólo tenía una pista y una terminal. El coste es de unos 600 millones de euros, unos mil euros por unidad familiar de la provincia de Málaga, o 2.000 euros por cada trabajador que declare IRPF.

Aeropuerto de Murcia - Corvera

El aeropuerto privado de Corvera, situado entre Murcia y Cartagena, se halla en obras avanzadas ahora paralizadas, edificio y pista terminados. El inicio de la obra es de capital privado, pero la coyuntura de crisis “obligó” al gobierno autonómico de Murcia a avalar con 200 millones de euros a la sociedad que encabeza SACYR. Su errónea situación, a 30 kilómetros del Aeropuerto de San Javier (ampliado para uso civil a partir de una base militar) y a menos de 100 del de Alicante, lo convierten en inviable en cualquier escenario económico.

Otros aeropuertos fantasma

Aeropuerto de Albacete

Aeropuerto de Burgos

Aeropuerto de León

El pozo sin fondo de las energías renovables (el delirio de Zapatero, su ministra de Medio Ambiente, Narbona y sus ecologistas de salón: que pretenden ser “los que mean más lejos”)

- El timo de las renovables (Libertad Digital - **24/12/10**)

Nos encontramos ante un timo. El Gobierno puso un cebo de rentabilidad fácil y muchos picaron, sabiendo que se aprovechaban de un Ejecutivo dispuesto a los más absurdos extremos con tal de colocarse una medallita verde.

Siempre se ha dicho que los mejores timos son aquellos en que se hace creer a la víctima que es ella la que se está aprovechando del timador. Así sucede con los grandes clásicos del género, de la estampita al tocomocho, hasta la elaborada trama de la película El golpe. Es por eso que el aspirante a pícaro se arriesga y pica, porque espera una ganancia mucho mayor; también es la razón por la que frecuentemente los timadores reciban mayor simpatía que otros delincuentes y sus víctimas menos apoyo. Al fin y al cabo, en cierto modo han colaborado en su ruina queriendo aprovecharse de otros.

Las energías renovables de moda, la solar fotovoltaica y la eólica, no son rentables a su nivel actual de desarrollo tecnológico. Para que a los inversores les resulte rentable, el Gobierno tiene que poner de su parte. Es decir, de la nuestra. De modo que empresas y particulares, respaldados por los bancos, se lanzaron a cubrir nuestra geografía de molinos de viento y placas de silicio, seguros de que el Gobierno, socialista para más señas, cumpliría sus propias leyes y pagaría las primas a las que se había comprometido.

Pero ha llegado la crisis y los de Zapatero deben recortar gastos. Así que el ministro Sebastián ha ejecutado el segundo tijeretazo en un mes a las primas que se pagan a las renovables. Y además de otros costes que impone a las compañías eléctricas les obliga a pagar programas como el de las bombillitas del ministro, uno de los más inútiles dispendios que ha llevado a cabo el Gobierno socialista, que ya es decir.

Jamás debería haberse pagado un duro por generar energía del modo que más le placía al Gobierno. Han de ser los ciudadanos quienes, en un mercado libre, decidan si quieren pagar más a cambio de energías que consideren más limpias. Pero una vez que se ha hecho, recortar esas promesas puestas negro sobre blanco en una ley es injusto y no sería extraño que los tribunales lo echaran abajo. Además, las nuevas instalaciones renovables seguirán recibiendo primas. ¿No hubiera sido más lógico empezar por eliminar todo tipo de ayudas a quienes quieran subirse al carro antes de recortar las que ya se habían comprometido?

Nos encontramos, sin duda, ante un timo. El Gobierno puso un cebo de rentabilidad fácil y muchos picaron, sabiendo que se aprovechaban de un Ejecutivo dispuesto a los más absurdos extremos con tal de colocarse una medallita verde, y creyendo que el Estado cumpliría sus promesas. Ahora Zapatero y los suyos ya tienen lo que querían: una cantidad de potencia instalada a todas luces excesiva, y han decidido no pagarla. Pero el problema es que quienes más han perdido no han sido quienes han invertido en energías renovables, sino los ciudadanos que les hemos pagado las ayudas y seguiremos haciéndolo durante años, aunque sea en menor medida. Los contribuyentes somos los verdaderos timados. Para variar.

- El timo-mito ecológico. Zapatero a sus ministros: “Yo soy el más antinuclear de los aquí presentes” (Hispanidad - **7/8/13**)

Y añadió: “El objetivo de este Gobierno es desmantelar el parque nuclear”. La ministra Narbona es el principal adalid de las carísimas energías renovables y la mayor enemiga de la energía nuclear. Dárnoslas de verdes, nos costó a los españoles 3.000 millones de euros en 2006, pero este año será más. Gracias a las renovables, España cuenta con uno de los kilovatios más caros de Europa. Aluminio o acerías, tentadas de emigrar: en otros países les aseguran un precio estable. El PP también es un converso a la fe única de Kyoto. La energía en España es cara y el suministro no se ha asegurado, pero, gracias a ello, pagamos más impuestos para mantener una ecología verde no competitiva

Durante toda la legislatura, el Gobierno Zapatero ha vendido electricidad verde, ecología ante todo, especialmente ciclo combinado y eólica, convertida en un verdadero icono de la modernidad socialista en materia energética. El paisaje en la España de ZP son aerogeneradores blancos pegados a las carreteras. El gran objetivo gubernamental era Kyoto, y los malvados, aquellos países que no se esforzaban por cumplir con Kyoto. A las eléctricas no les importaba en absoluto. Incluso las compañías, especialmente Iberdrola, comenzaron a hablar de energía verde, y toda su imagen corporativa se enraizó en el respeto al medio ambiente y en la prioridad absoluta del Protocolo de Kyoto. Era lógico, iban a producir energía más cara pero la diferencia se la iba a pagar el estado, es decir, el ciudadano.

No obstante, ante las presiones de la industria nuclear, y ante el próximo vencimiento del ciclo de vida de muchas centrales nucleares, el Gobierno decidió abrir un “debate” público sobre la energía nuclear. Como todos los técnicos aconsejaban la ampliación del parque nuclear, o al menos el fortalecimiento del ya existente, todo el mundo pensó que se trataba de una excusa para mantener el parque nuclear. Por su parte, las eléctricas, así como la constructora Acciona, que tras Iberdrola es el líder en la energía nuclear, estaban felices: viento y sol, constituían el futuro. José Manuel Entrecanales e Ignacio Galán no dejaban de enseñar las cifras que demostraban un aumento imparable de las energías renovables.

Pero lo de la nuclear se iba a hinchar aún más. Hace seis meses, la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, convertida al socialismo verde, anunciaba que, aún pendientes del famoso debate nunca iniciado, el objetivo del Gobierno era la sustitución de la energía nuclear. Un detalle, por el momento la central nuclear de Santa María de Garoña, que vence en 2009, no tiene permiso para alargar su plazo de vida de los 40 a los 60 años, cuando la empresa consideraba que el permiso era cuestión de tiempo.

¿Qué había ocurrido? Pues que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha convertido a ZP en un entusiasta de la energía eólica y solar. Es más, las declaraciones de De la Vega se produjeron inmediatamente después de un Consejo de ministros en el que el titular hizo una profesión de fe verde y ecológica, y sorprendió a los ministros más sensatos del ejecutivo con la siguiente declaración. “Yo soy el más antinuclear de todos los aquí presentes”. Y tras semejante anatema contra la fisión del átomo, concluyó que “el objetivo de este Gobierno es desmantelar el parque nuclear”.

¿Cómo repercute esto en el bolsillo de los ciudadanos? Pus muy sencillo. Como ya hemos informado, el coste medio de 2006 del kilovatio/hora producido, prescindiendo, que es lo que nunca se hace, de las subvenciones públicas, es de 15 céntimos de euro por kWh para la nuclear y el carbón, de 28 para el kWh producido por gas y de entre el 40 y el 60 céntimos el producido por viento, sol o biomasa. No olvidemos, además, que las centrales nucleares, así como la mayoría de las térmicas de carbón, ya están amortizadas.

Dicho de otra forma, si no fuera por los impuestos que pagamos los españoles, la energía eólica y la solar serían una ruina. Sin embargo, ha enriquecido a muchas empresas.

Por el contrario, los países punteros de Europa utilizan la energía nuclear y el carbón –y el gas. No lo olvidemos- como el eje de su suministro energético, mientras las renovables son el complemento para regular una producción que no es almacenable. En 2006, los españoles pagaron más de 3.000 millones de euros en déficit de tarifa, que fueron a parar a las compañías eléctricas. Este año, la cifra podría aumentar. Y por señalar con el dedo: la que más subvenciones recibe es la energía solar -la favorita de Narbona y ZP-, seguida de la biomasa y la de los molinillos.

Es más, el aumento del coste del kilovatio producido en España se ha disparado en 2006. La lista, según el informe de Juan Avilés Trigueros, autor de “La energía en la España del siglo XXI: 2000-2025”, viene encabezada por Italia, pero en un solo año, España ha pasado, gracias a nuestro amor por Kyoto y las renovables, del decimoquinto puesto al quinto. Ni que decir tiene que en Europa nadie se plantea desmantelar el parque nuclear. Como mucho, reducir la producción porcentual de dicho parque respecto al total.

El mito verde es muy bonito, pero lo cierto es que, si dejamos a un lado la propaganda, lo que la gente quiere, especialmente tras episodios como el reciente apagón de Barcelona, es suministro asegurado y barato. Si, además, es limpia, mejor que mejor. Y no olvidemos que, para el efecto invernadero, la energía más limpia de todas es la energía nuclear. Y no olvidemos, tampoco, que la energía del futuro no son las renovables sino el hidrógeno, en concreto la fusión nuclear.

Más problemas. Industrias básicas como acerías o las del aluminio, amenazan con marcharse de España. Son consumidores intensivos de electricidad y, para evitar su deslocalización, otros países, como Francia, les aseguran electricidad a precio estable durante largos periodos, por ejemplo de 20 años. Naturalmente, eso sólo lo permite la energía nuclear.

Y ojo, porque el timo, ecológico, no sólo afecta a nuestros bolsillos, sino que está provocando una verdadera burbuja bursátil, como se puede ver en la información sobre Iberdrola Renovables, que amenaza con convertirse en una de las 10 grandes de la Bolsa española por capitalización. Está claro por qué las eléctricas no protestan por la política suicida del Gobierno. La cuenta de resultados está asegurada gracias a los impuestos extra que pagan los ciudadanos. Los impuestos verdes están de moda, y en nombre del medio ambiente y la ecología se produce el verdadero timo ecológico. En este sentido, el diario Expansión publicaba el disparado peso de los “impuestos verdes” en Cataluña, Andalucía y Madrid. Sí, Madrid, que el partido Popular no es ajeno a esta obsesión verde. Además, no olvidamos que José María Aznar mantuvo la moratoria nuclear prescrita por el Gobierno socialista de Felipe González.

Respecto al gas, el problema es otro. En efecto, las centrales de ciclo combinado no plantean tantos problemas, ni tan elevado coste, como las renovables. El reto del gas es no convertir al mundo en rehén de unos países productores aún más extorsionadores que los de la OPEP. Recuerden que entre Rusia e Irán controlan las dos terceras partes de la producción mundial de gas. De hecho, el presidente Putin utiliza el gas como un verdadero chantaje político a Occidente, en especial a la Europa democrática. No olvidemos que está naciendo la OPEP del gas, y que el acercamiento entre Moscú e Irán es un hecho.

La ecología verde es un mito y es un timo, pero no se nota mucho porque lo pagamos a escote y, porque, después de todo, el color verde es el color de moda.

- La locura de las renovables: ya han costado 85.000 millones… y costarán 115.000 millones más (Libertad Digital - **24/4/17**)

(Por Domingo Soriano)

*“Se nos fue la olla con las renovables”* - [Miguel Sebastián, octubre de 2015](http://www.libremercado.com/2015-10-08/sebastian-seis-anos-despues-se-nos-fue-la-olla-con-las-renovables-1276558775/).

Incluso quien fue su principal valedor en su momento reconoce que algo se hizo mal. El ministro de Industria que más hizo para **impulsar la energía verde en España** ya admite que se pasaron, que no calcularon bien, que no previeron las consecuencias de sus actos… vamos, que se les fue la olla.

Pero, ¿cuánto? ¿Fue un error normalito? Como ese chaval que se va de fiesta, promete a sus padres que volverá a las 2.00 a casa… y aparece a las 3.30. ¿O fue una locura de las gordas? Con el chico llamando a casa a las 10.00 de la mañana desde una parada de autobús a 50 kilómetros de casa porque no tiene cómo volver.

Pues bien, hasta ahora, la locura de las **renovables de Zapatero y Sebastián,**le ha costado a los contribuyentes españoles casi 85.000 millones de euros. Y no se quedará aquí. En los próximos años la factura continuará subiendo. No es fácil hacer una estimación total. María Teresa Estevan Bolea, primera mujer del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado y decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, [estuvo hace unos días explicándonos](http://tv.libertaddigital.com/videos/2017-04-01/entrevista-a-maria-teresa-esteban-bolea-6060393.html) todo esto en una entrevista en Libertad Digital. Y nos dejó su sabiduría y sus cálculos: según sus cifras, la factura de las renovables se disparará hasta casi alcanzar los ¡200.000 millones de euros! Sí, parece una ida de olla de las grandes, de las que aseguran un castigo de los que no se olvidan. También en este caso lo habrá: eso sí, no lo pagarán los que se metieron en el lío, sino todos los españoles, en sus impuestos y en su factura de la luz. Es lo que tienen las noches locas, que siempre vienen seguidas de resaca.

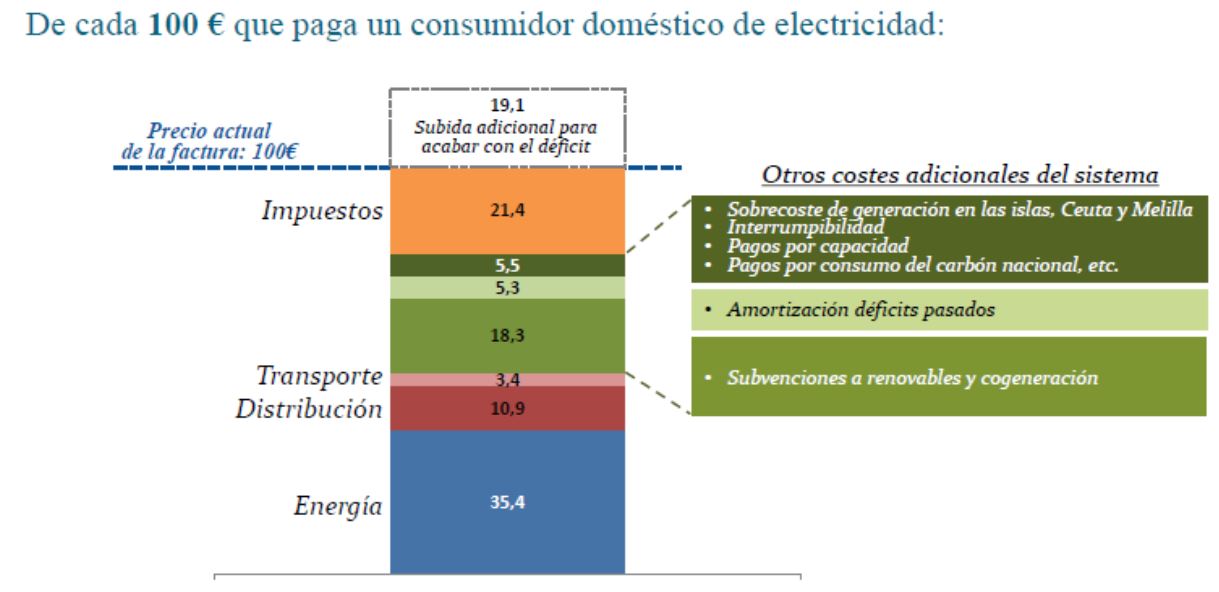
### **El mix y el coste**

De los **105.000 MW de potencia eléctrica instalada** que tiene España unos 30.000 MW de renovables (más 6.700 de cogeneración). Eso nos sitúa como uno de los países del mundo con más porcentaje de su mix eléctrico basado en renovables. De esta forma, las fuentes se dividen en dos: régimen convencional (hidráulica, nuclear, gas en ciclos combinados, carbón, fuel-gas) y el régimen especial (renovables y cogeneración).

Para las primeras, la remuneración llega según los precios de mercado. Ese precio se fija diariamente y para cada hora, en función de la oferta y la demanda a través de un sistema marginalista: se paga a los productores el precio más alto que casa oferta y demanda. Buena parte de la producción entra a precio cero (renovables o nuclear) y sólo cuando con estas fuentes no se cubre la demanda van entrando a la subasta las fuentes más caras. Por eso las condiciones atmosféricas son tan importantes: si hay sol y viento y las renovables funcionan a plena potencia, se necesita menos aporte de las fuentes más caras; si en un momento de alta demanda no se puede tirar de renovables, entonces el precio de ese día es más caro.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la **electricidad generada a través del régimen especial**recibe una prima. Es decir, que aunque el precio de mercado sea bajo, los productores tienen garantizados unos ingresos. Y esa prima también se paga en la factura de la luz. Es decir, que incluso cuando los precios son bajos, el coste final no baja como debería.

En el siguiente gráfico se detallan cuáles son los costes incluidos en la factura de la luz:

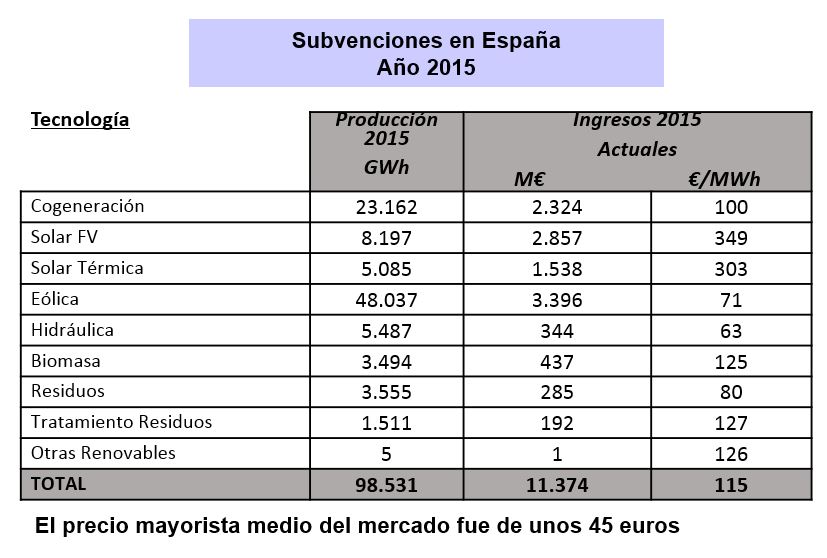
[](https://s.libertaddigital.com/2017/04/22/estevan-bolea-costes-factura.JPG)María Teresa Estevan Bolea

De esta manera, tenemos un sistema eléctrico en el que hay que pagar la energía, su transporte y distribución, como en cualquier otro mercado; y además, una serie de costes adicionales (primas, subvenciones, pagos por sobrecapacidad) que se suman a unos elevados impuestos. ¿El resultado? La electricidad en España está entre las más caras de Europa.

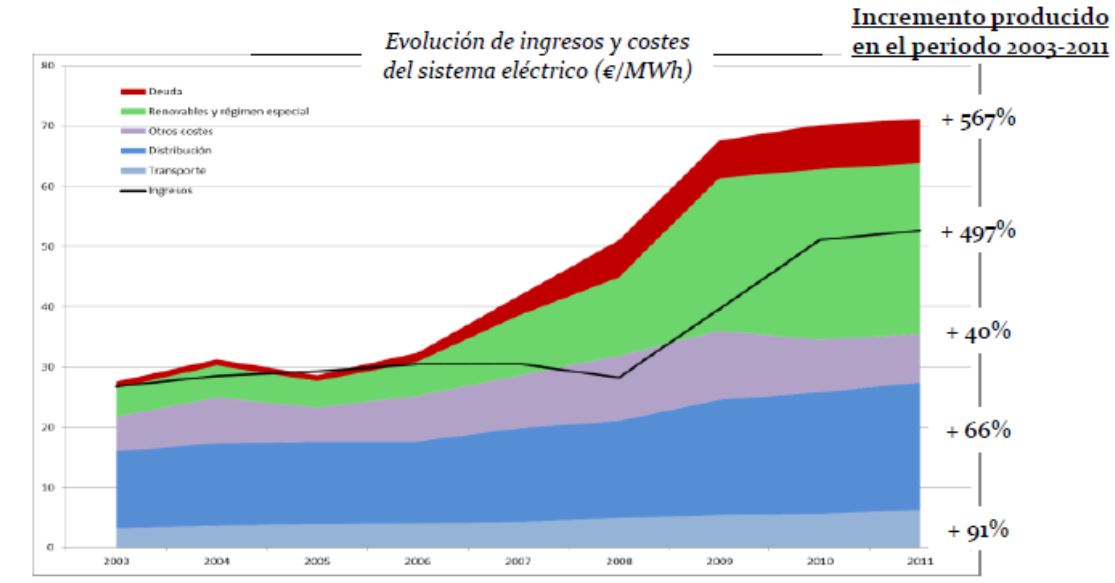
### **De primas y garantías**

Pero hay un problema adicional. Como explica Estevan Bolea, “el verdadero problema de las renovables no es este coste tan elevado. La mayor dificultad es que sólo garantizan el **suministro eléctrico unas 1.800 - 2.200 horas** al año y en algunos casos, como la eólica, funcionan más por la noche, cuando la demanda es menor”. Por eso, para que no haya apagones o interrupción en el suministro, el sistema necesita de una potencia firme de respaldo que asegure que incluso cuando no hay renovables, todos tendremos la electricidad que demandamos.

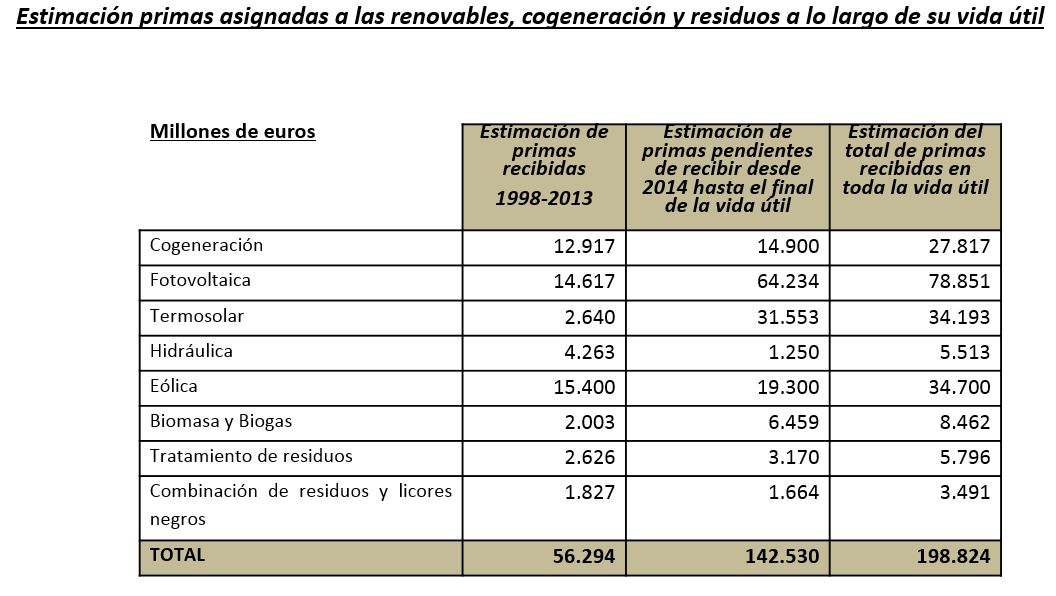
Si a eso le sumamos que las renovables se instalaron en España cuando la tecnología estaba en proceso de desarrollo y era más cara, el cóctel es explosivo. Porque instalar ahora la misma cantidad de potencia renovable sería bastante más barato: los procesos han mejorado mucho y han caído los costes de estas centrales. Pero lo que se les prometió a los productores es cubrir sus costes pasados, sin importar la diferencia con el precio de mercado. En la siguiente tabla pueden verse las **subvenciones a las renovables en 2015** (en €/MWh) respecto al precio de mercado. Como puede verse, en el caso de la solar hablamos de primas que multiplican por 6 y por 7 el precio del mercado. ¿Una ida de olla?

[](https://s.libertaddigital.com/2017/04/22/estevan-bolea-subvenciones-renovables-2015.JPG)María Teresa Estevan Bolea

El resultado puede verse en el siguiente gráfico que muestra la evolución de los costes del sistema eléctrico desde el año 2003. Lo que ha disparado el precio de la electricidad en España han sido las **primas al régimen general**. Y no hablamos sólo de pasado, sino también de lo que supondrán a futuro.

[](https://s.libertaddigital.com/2017/04/22/estevan-bolea-costes-electricidad.JPG)María Teresa Estevan Bolea

Los cálculos de Estevan Bolea sobre el coste de las renovables, siguiendo datos oficiales del Ministerio de Energía apuntan a que, sumando los 7.000 millones que se prevé que costará este mismo año 2017, las primas al régimen general han ascendido a **unos 84.000 millones de euros.** Si a esa cifra le sumamos lo que habrá que ir abonando a los productores (si no hay cambios en el marco legal que, por otro lado, podrían ser impugnados en los tribunales), llegamos a casi 199.000 millones de euros. Y aunque mal de muchos... ya se sabe que no es gran consuelo, hay que decir que no somos los que peor estamos. En Alemania, la política de subvenciones a las renovables ya ha costado 150.000 millones y se estima que en los 25 años que hay previsto que se sigan pagando estas primas alcanzará los 520.000 millones. (Ver la siguiente tabla con el desglose de las ayudas en España por tipo de energía):

[](https://s.libertaddigital.com/2017/04/22/estevan-bolea-primas-vida-util.JPG)María Teresa Estevan Bolea

No está mal que un político reconozca sus errores. Unos errores, por cierto, que comparte con buena parte de sus compañeros, en su partido y en los contrarios. Porque sí, la locura de las renovables alcanzó su apogeo con el **Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero**, pero comenzó con el PP en el poder (aunque hay que reconocer que en este tema hay diferencias de magnitud que son muy importantes). También podría señalar a los medios de comunicación, porque es misión casi imposible encontrar a alguien que entre 2004 y 2011 criticara lo que se vendía como la “apuesta por la energía verde” que situaría a España en la vanguardia de la tecnología. Y a los que lo hacían (lo hacíamos, porque [Libertad Digital fue uno de los pocos medios críticos](http://www.libertaddigital.com/economia/cada-empleo-verde-que-promete-zapatero-cuesta-571138-euros-a-los-espanoles-1276354975/) con aquella política) se les tachaba de agoreros, de estar en contra del progreso o de enemigos del medio ambiente. Pero no estaría de más preguntarse tampoco si esos errores, cuando son de esta magnitud, no deberían tener aparejados alguna consecuencia.

Decía **Miguel Sebastián**, en la frase con la que comenzábamos este artículo: “Se nos fue la olla”. Hay otra expresión popular, muy popular en estos años de YouTube y vídeos virales, que también podría haberle servido para ilustrar lo que ha ocurrido en el pasado y lo que seguirá ocurriendo en el futuro: miles de millones de euros malgastados, inseguridad jurídica, reclamaciones, empresas quebradas, fraude en el cobro de las ayudas, una industria menos competitiva, una factura de la luz incomprensible, consumidores que se sienten estafados… Porque da la sensación de que los gobiernos españoles, en este tema de las renovables, la han liado parda.

- Garantías de origen renovable: el “timo de la estampita” en el sector eléctrico (elperiodicode laenergia.com - **17/2/20**)

Es probable que en los últimos días usted haya leído, oído o incluso comentado con alguien que un ayuntamiento va consumir energía 100% renovable. Madrid, Barcelona, muchas ciudades ya dicen eso. ¿Pero es verdad? ¿Se puede ofrecer energía 100% renovable?

En España, para que una comercializadora pueda ofrecer eso tiene que hacerse con unos certificados que se llaman garantías de origen renovable. También las hay para biomasa y cogeneración.

Se trata de un papelito, que expide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que regala a aquellos productores de energía renovable que lo piden. Es gratis. Cada productor tiene seis meses para obtener estas garantías.

Pero la CNMC pone una limitación. Que no se lucre con ello. Si lo hace, esa planta que produce energía eólica o fotovoltaica perdería las primas que están recibiendo. Muchos de estos productores las regalan, pero hay otros que las venden.

Según datos de la CNMC de 2015 (el informe de 2016 está a punto de salir), las garantías expedidas mediante el Sistema de Garantías de Origen representan el 26,8% de la producción nacional del 2015 y el 60,3% respecto de la producción nacional procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración.

En total, 72.575 GWh, de las que procedente de renovables son más de 70.000 GWh. De ellas, procedentes de eólica superan los 40.000 GWh y la gran hidráulica cerca de 20.000.

De toda esta energía, el 90% acaba en las comercializadoras. Según el informe de la CNMC, Iberdrola es la compañía que posee más GWh con garantía de origen renovable con 21.599 GWh. Le siguen ya bastante lejos AXPO, Energya VM, Acciona, EDP y Endesa.

Casi todas las comercializadoras tienen garantías de origen. Aunque sea un GWh. Pero el listado de compañías que cubren todo el consumo de sus clientes con estas garantías es muy pequeño. Las principales son Axpo, Acciona, Energy VM, Gesternova, Holaluz, GNera, Som Energia y otras más pequeñas.

¿Mercado?

En España, como tal no existe un mercado verde donde se compra la energía procedente de renovables. Todo va al pool. Las renovables, con la nuclear, el carbón, los ciclos combinados y la cogeneración.

Físicamente es imposible separar una de otra. Y físicamente no se puede decir que la energía que vende una compañía es 100% renovable. Pero para poder hacerlo se inventaron las garantías de origen. Un timo como el de la estampita que tan bien reprodujeron Toni Leblanc y Ozores en la película Los tramposos.

Como no puedo ofrecer esa energía, me la invento. Te doy un certificado en el que pone que la energía es 100% renovable y uno se lo cree. Y encima vacila de ello. Es decir, que lo promulga a los cuatro vientos y dice que consume energía 100% verde cuando realmente es imposible. Si no que se lo digan a los ayuntamientos o a muchas empresas que se ponen esa etiqueta.

Otra cosa es cuando una empresa compra toda la energía que produce una planta renovable, a través de un PPA a 20 años, que está cercana a una planta industrial, por ejemplo. Pero en el caso de España, comprando la energía en el mercado pool no se puede afirmar eso.

Pero ojo, que no es una cosa que esté solo en España. Eso se ha instalado por media Europa. Lo que sucede que en España hemos ido más allá y la CNMC ha creado un sistema de garantías de origen único en el mundo.

Mientras en Europa por ejemplo están dispuestos a pagar por ellas, en España en principio está prohibido lucrarse con ellas. Aunque a día de hoy se venden buena parte de ellas.

Según agentes de mercado, los certificados se están vendiendo en España a 10 céntimos de euro por MWh. En Europa te pagan tres veces más. Es decir, 30 céntimos de euros por MWh.

Ese es el precio que marcan los productores si quieres hacerte con estas garantías. Cada año la CNMC expide las garantías, los productores las adquieren y luego las ponen en el mercado. Pero no todas. Algunos grandes productores, que también comercializan la electricidad, cogen sus garantías, se apuntan su consumo y el resto que les sobra no las venden a otras comercializadoras para que no puedan decir aquello de que son 100% verdes. Te quitas a parte de la competencia.

Aun así, si una comercializadora quiere hacerse con ellas puede tranquilamente. Sobran a día de hoy, pero cada vez son más las compañías que adquieren esto. ¿Por qué? Porque es una herramienta de marketing. Lo verde vende. Uno como cliente prefiere decir que consume energía 100% renovable a no poder decirlo, aunque luego realmente esté consumiendo carbón o nuclear.

En definitiva, es un sistema fraudulento que no hace otra cosa que engañar al cliente, que está permitido, pero que a la larga sirve de poco. Para eso habrá que esperar a que España tenga un mix eléctrico 100% renovable. Algo que a día de hoy está muy lejos.

- La producción de energía renovable en España alcanzó el 40% del total en 2019 (EFE - **25/6/20**)

La producción de energía de origen renovable -eólica y fotovoltaica- en España creció el pasado año un 20 % y se situó en el 40 % del total, según un informe del sector divulgado por la Fundación Naturgy.

De acuerdo con los datos que figuran en el documento “El sector eléctrico español en números. Informe 2019”, la producción energética de fuentes renovables alcanzó el 55 % en el caso de la eólica, el 20 % en la hidráulica y el 9 % en la fotovoltaica.

Reducción del CO2

Además, el sistema de generación eléctrico redujo un 23 % las emisiones de CO2 en 2019, lo que supone que en los últimos quince años se haya disminuido casi un 50 % en todo el país.

“Estamos al principio de un nuevo ciclo inversor profundo. En España la relevancia de este esfuerzo se hace patente si consideramos que refuerza lo que se ha hecho en los últimos 20 años, durante los cuales el apoyo a las renovables desde la tarifa eléctrica ha sido de unos 69.000 millones de euros”, señala el economista Miguel Ángel Lasheras.

Producción de electricidad

El estudio también revela que durante el pasado año aumentó la producción de electricidad con ciclos combinados hasta alcanzar el 21 % de la producción total. El incremento de la generación con gas natural se produjo en paralelo a una reducción de la que emplea carbón, que en 2019 sólo representó el 4 % del total. De hecho, según Lasheras, el mayor uso de los ciclos combinados es uno de los factores que más contribuyó a reducir las emisiones provocadas por la generación eléctrica durante el pasado ejercicio, en el que prácticamente se dobló la producción respecto a 2018.

Descarbonización

“Este escenario marca el fin del carbón como fuente energética en España y su espacio estará ocupado por el gas natural, con un balance de CO2 mucho más favorable para avanzar en la descarbonización, ya que reduce en dos tercios las emisiones provocadas por la combustión del carbón y refuerza la fiabilidad del sistema”, agrega el especialista. Por otro lado, en 2019 el coste de la energía se redujo un 17 % y la demanda nacional de electricidad bajó un 1,5 %: “Fue un año que acercó al sector eléctrico a la transición ecológica impulsada por las instituciones europeas y españolas con menos emisiones, más renovables y menos costes”, puntualiza Lasheras.

**Nota: Los datos de la corrupción son estremecedores. ¿Cómo negar la evidencia, cuando se estaba al tanto de todo? No hay mentiras eficaces. Por mucho que duela, para salvarse de la quema que se avecina, habrá que hacer cirugía mayor (amputación).**

**Puede que los grandes empresarios no sientan responsabilidad por los gobiernos que han llevado a España al borde del abismo, y todavía más allá, pero difícilmente se puedan librar de la culpabilidad por no haber hecho gran cosa por evitarlo.**

**¿Quién tiene más que perder en ese juego de apariencias? La respuesta me parece sencilla: España como país, los sectores productivos, los trabajadores (clase media y baja), los jóvenes y los pensionistas… aunque el precio esté por determinar.**

**Los mayores casos de corrupción en Argentina**

De todos los casos de corrupción (tienden al infinito) y de todas las frases (a cual más surrealista), voy a seleccionar uno (dentro del período que se conoce como el “Menemismo”), y una frase (pronunciada por el ministro Manzano), no para representar esa época, sino para simbolizar la larga y penosa historia de despropósitos, de ese “desgraciado” país.

José Luis Manzano, se graduó como médico en su Mendoza natal, pero desde joven se dedicó a la política. Fue diputado del Partido Justicialista (1983-1989) y ex ministro del Interior durante la gestión de Carlos Menem (1989-1992).

Es un referente ineludible de la política de privatizaciones de empresas estatales implementada en la Argentina de la década del ´90 y también un símbolo de la corrupción de aquella época, al acuñar la frase: “Yo robo para la corona” (o para el presidente). Su enunciación se convirtió en el título del libro del periodista e investigador Horacio Verbitsky, boom de ventas en Latinoamérica.

En pleno escándalo por las denuncias de corrupción, Manzano emigró a los Estados Unidos, donde trabajó como representante de los negocios de Jorge Mas Canosa, empresario cubano dueño de Mastec, una de las tecnológicas de capitales hispanos más importantes del mundo. En 1996 volvió a la Argentina trayendo los fondos de Mas Canosa debajo del brazo, y se asoció con el empresario mendocino Daniel Vila en el Grupo Uno, que entre 1995 y 1997 adquirió cerca de 25 medios en el interior del país.

Otra pieza clave en aquella expansión meteórica fue el vínculo con el banquero Raúl Moneta. Unos años después, Manzano y sus socios, Vila y Moneta, fueron investigados por lavado de dinero y evasión fiscal por un monto de $400 millones.

En 2002, el Grupo Uno fusionó sus negocios de televisión con los del empresario Carlos Ávila, y desembarcó en Buenos Aires, detrás de la operación del canal América TV, principal empresa del holding, que en la actualidad cuenta con 40 medios.

Eterno encargado del lobby político del grupo, durante los gobiernos de los Kirchner y Macri, Manzano concentró sus esfuerzos en expandir sus negocios y los de Vila en el sector petrolero. Phoenix Global Resources, compañía en la que también están asociados con la multinacional Mercuria, participa de la exploración, perforación y producción petrolera en Mendoza y la Patagonia, en asociación con la petrolífera estatal, YPF. El tándem Vila-Manzano también tiene acciones en Metrogas, la principal distribuidora de gas natural en la Argentina, y con Pamar S.A. son líderes en la construcción de gasoductos, dentro y fuera del país.

- La máquina de la corrupción (infobae - **12/8/18**)

(Por Natalia Volosin)

- ¿La Argentina, en el “top ten” de la corrupción mundial? (infobae - **16/8/18**)

(Por Natalia Volosin)

Los cuadernos de Centeno y las declaraciones como imputados colaboradores de algunos empresarios revelaron parte del funcionamiento de la corrupción estructural durante los gobiernos kirchneristas. De acuerdo con lo revelado por los medios, la causa no solo involucra a funcionarios, sino también a los grandes jugadores de la obra pública de los últimos cuarenta años, así como a jueces, fiscales y operadores judiciales. Se trata de aquello que Elisa Carrió llamó “la matriz de la corrupción” en su denuncia de 2008, aquella que generó risas socarronas de buena parte de la dirigencia política, empresarial y social de la Argentina. Ahora, otros se refieren a estas revelaciones como “el mecanismo”, reproduciendo el título de la serie que retrata el caso Lava Jato en Brasil. Pero lo cierto es que la corrupción en este país no es ni una matriz ni un mecanismo. Es una máquina. Y no es nueva.



El concepto de mecanismo sería apropiado para pensar el modo en que se presenta la corrupción en una etapa determinada (por ejemplo, entre 2003 y 2015) o en las maniobras que se investigan en una causa penal concreta. El problema de esta visión es que soslaya el carácter estructural que tiene la corrupción en la Argentina. No estamos ante un germen que aparece por momentos para atacar a nuestras maravillosas instituciones públicas y privadas, y que es repelido o abrazado dependiendo de las virtudes morales de quienes las conducen.

Lo que enfrentamos, en cambio, es un síntoma de debilidades institucionales que este país arrastra desde su fundación y que, a lo largo de la historia, los jugadores han hecho cada vez más sofisticadas: inestabilidad política, autoritarismo, falta de frenos y contrapesos, corporativismo, patrimonialismo, concentración del poder (político y económico), etcétera. De estas debilidades macro se derivan luego otras específicas, vinculadas con los sistemas de control, la discrecionalidad en materia de designaciones y reestructuraciones organizacionales, la administración financiera, el financiamiento electoral, las contrataciones y la obra pública, la toma de deuda, la publicidad oficial, el sistema tributario y aduanero, etcétera. Y de todo ello emerge, entre otras consecuencias negativas, la corrupción, que a la vez las retroalimenta.

Esta máquina que la Argentina viene construyendo desde hace más de doscientos años comprende todos los mecanismos. Es un sistema complejo, aceitado y permanente, formado por distintas partes: políticos, funcionarios, empresarios, sindicalistas, medios de comunicación, jueces, fiscales, abogados y otros auxiliares de la Justicia, como las fuerzas de seguridad e inteligencia. El poder relativo de cada parte respecto de las otras no es siempre el mismo, pero nunca desaparece por completo, mientras que la máquina en sí es inmune a diferentes modelos económicos y políticos, e incluso a tendencias globales.

Destruir la máquina es casi imposible, pues todos los sectores con capacidad de hacerlo se alimentan de ella. Dependiendo del modo de funcionamiento en que esté activada, a veces les toca una porción grande y a veces una pequeña, pero siempre les toca algo y, desde luego, todos prefieren algo antes que nada. En el mejor de los casos, la ciudadanía recibirá de su dirigencia tres respuestas simbólicas, pero igualmente infructuosas para reducir la corrupción en forma significativa: (a) acciones de Mani Pulite para juzgar el pasado; (b) reformas penales para juzgarlo en forma más eficiente, pues el diagnóstico (equivocado) es que el problema persiste porque el sistema penal es lento; y (c) lo que la literatura especializada denomina “fachadas de buen gobierno”, es decir, versiones edulcoradas de reformas institucionales que se van poniendo de moda en el mundo (gobierno electrónico, gobierno abierto, compras online, etcétera).

La historia de la corrupción en la Argentina muestra que desde la colonia hasta Menem, con una breve interrupción durante el período del rosismo y el caudillismo, la máquina funcionó en el modo clásico de la captura de Estado. En este modelo, el mayor poder relativo es de unos pocos privados, que obtienen prebendas y privilegios de la mayoría de los funcionarios de un Estado débil y desorganizado a cambio del pago de un una tasa o cuota, cuyo valor se modifica según las épocas (el 15, el 20 o lo que sea).

Durante el menemismo, la máquina empezó a moverse hacia el otro extremo, asentándose en el funcionamiento típico de un monopolio bilateral. Aquí, el poder relativo de las partes es similar, pues los pocos privados de siempre enfrentan a un Estado más organizado. Los tomadores de sobornos son menos (en general se concentran en el círculo íntimo de la cabeza del Estado), el líder interviene en la selección de los oligarcas a los que entrega los negocios y, además, las rentas se reparten entre los funcionarios y los empresarios en función del tamaño de la torta y del poder relativo que tengan en cada momento.

Finalmente, con el kirchnerismo la máquina avanzó decididamente a un esquema cleptocrático, una versión moderna de la tipología que permitió la captura de Estado durante el caudillismo, ahora mediada por algunas restricciones institucionales que no existían a mediados del siglo XIX. En este modelo, el mayor poder relativo es claramente de la política. Los recursos públicos se utilizan como propios y el poder político ya no se conforma con una cuota a cambio de otorgar contratos y negocios, ni con repartir la torta ilegal de un modo más “equitativo”. Lo que busca, en cambio, es ocupar el lugar de los empresarios y quedarse con todo. Por eso, en este sistema aparecen “nuevos” empresarios: sujetos hasta entonces desconocidos, cercanos al poder político, que obtienen cada vez mayores porciones de la torta (los Báez, los Ferreyra), aunque conviven con los jugadores de siempre (los Rocca, los Pescarmona, los Macri, entre otros).

En este marco, es sorprendente la liviandad con la que muchos toman el esfuerzo defensista de algunos empresarios por mostrarse como víctimas de funcionarios venales declarando que estos les exigían el dinero, y no ya para otorgarles contratos de obra pública, sino para financiar las campañas electorales del kirchnerismo. Este planteo busca alejar a los empresarios del cohecho activo y de la asociación ilícita, y presentarlos apenas como víctimas del delito de exacciones ilegales (que solo los funcionarios pueden cometer). Si esto fuera así, lo máximo que podría caberles (si no se investigara la evasión por el dinero no declarado) serían las sanciones de la ley de financiamiento electoral, que castiga a las empresas con una multa de 1 a 10 veces el monto de la contribución, y a sus propietarios, directores, gerentes y representantes con inhabilitación de 6 meses a 10 años para elegir y ser elegidos en elecciones nacionales. Una verdadera ganga.

La estrategia no debería prosperar desde el punto de vista jurídico, pues las exacciones ilegales presuponen un vínculo unilateral y, además, carecen del elemento propio de los sobornos: el quid pro quo, es decir, el intercambio de dinero o dádivas para que el funcionario haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Considerando que quienes hacían los aportes eran receptores de obra pública, que esta dependía de los mismos funcionarios a los que les entregaban el dinero y que los aportes también se habrían realizado en años no electorales, será difícil negar que se tratara de relaciones bilaterales y que los empresarios recibieran una contraprestación por lo que entregaban. La declaración de Carlos Wagner como imputado colaborador lo torna aún más difícil.

Pero, además, la versión de los empresarios es incoherente con lo que nos muestra la historia de la máquina de la corrupción: el juego siempre es de ida y vuelta, y las únicas víctimas son el sistema democrático y la sociedad. El argumento que se escuchó en los últimos años de parte de empresarios y de no pocos comunicadores (que durante el kirchnerismo no se podía hacer negocios de otra manera y que había que pagar para preservar la empresa y sus fuentes de trabajo) es moralmente inadmisible. Cumplir la ley en un país estructuralmente anómico no es gratis. Claro que a quienes se aprovechan del sistema para obtener privilegios les va mejor. Al menos en el corto plazo, pues, como dejara en claro Carlos Nino con su célebre concepto de “anomia boba”, en el mediano y largo perdemos todos.

Pero hay que cumplir la ley. Y no solo por razones deontológicas (es lo correcto), sino también utilitaristas (es lo que produce mayor utilidad agregada), pues el cálculo lo hacen los legisladores. El derecho es como un semáforo: rojo significa “pare”, no “reduzca un poco la velocidad, mire a cada lado y si le parece que no va a chocar ni pisar a nadie, cruce”. Si cada uno de nosotros pudiera hacer su propio cálculo (“voy a pagar una coima porque si no voy a quebrar y mis empleados se quedarán sin trabajo”), la vida en sociedad sería imposible. No hace falta imaginar cómo sería vivir así, pues de hecho así vivimos.

(La autora es magíster y doctora en Derecho - Universidad de Yale).

- ¿La Argentina, en el “top ten” de la corrupción mundial? (infobae - **16/8/18**)

(Por Natalia Volosin)

Si los dichos de Claudio Uberti, Carlos Wagner y Aldo Roggio respecto del funcionamiento de la máquina de la corrupción durante los gobiernos kirchneristas fueran corroborados por la Justicia, la Argentina avanzaría unos cuantos puestos en el ominoso ranking de los países más corruptos del mundo, que probablemente integra ya desde hace décadas.

Por razones obvias, vinculadas con la clandestinidad de las maniobras, la corrupción es difícil de medir. Además, sus costos económicos y sociales ocultos exceden en mucho la simple suma aritmética de los sobornos que se pagan. Los costos económicos incluyen distorsiones de todo tipo, mientras que los sociales suelen implicar violaciones graves de derechos humanos, especialmente de grupos vulnerables (mujeres, pobres, pueblos originarios, personas privadas de su libertad, etcétera), pues se trata de víctimas fáciles, con reducidas posibilidades de acceso a la justicia y con urgentes necesidades de bienes, servicios y obras públicas.

Sin embargo, los activos que se encuentran cuando los líderes cleptocráticos dejan el poder, los cálculos que se formulan en causas penales domésticas y los acuerdos de colaboración que firman las empresas multinacionales ante las autoridades de países centrales para reducir las multas que deberán pagar, permiten construir un ranking aproximado de algunos de los mayores casos (en montos ilegales) desde los años 60' hasta la actualidad.

De menor a mayor, allí encontramos el caso de Nicolás Ceașescu, presidente de Rumania de 1967 a 1989, a quien luego de 22 años en el poder se le calculó una fortuna de $500 millones de dólares escondida en banzos suizos. En el puesto N° 9 aparece Saddam Hussein, presidente de Iraq entre 1979 y 2003, que en 24 años amasó alrededor de $800 millones de dólares, también girados a entidades financieras suizas. El dictador iraquí comparte podio con Odebrecht: en 2016 la empresa reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que entre 2001 y 2016 pagó $788 millones de dólares en coimas en relación con cien contratos en doce países, principalmente de América Latina.

Octavo encontramos el caso Lava Jato, que implicó la extracción de entre $1.400 y $2.000 millones de dólares de la empresa estatal Petrobras (aunque los costos para las acciones de la compañía y para la economía y la democracia de Brasil fueron obviamente mucho mayores).

Ocupa el puesto N° 7 Isabel dos Santos, la megamillonaria empresaria e hija de José Eduardo dos Santos (presidente de Angola entre 1979 y 2017), cuya fortuna se calcula en $3.500 millones de dólares. En el puesto N° 6, comparten podio con $4.000 millones de dólares el ex dictador nigeriano Sani Abacha, presidente durante apenas cinco años (de 1993 a 1998), y el famoso caso Mani Pulite, que movió esa cantidad de dinero en coimas durante los años 80 y comienzos de los 90 en Italia. Para concluir la mitad inferior de la tabla aparece, en el puesto N° 5, Mobutu Sese Seko, el dictador que gobernó Zaire (ex Congo) durante 32 años (entre 1965 y 1997), a quien se le calculó una fortuna de $6.000 millones de dólares escondida en bancos suizos.

La parte alta de la tabla arranca con Zine el-Abidine Ben Ali, presidente de Túnez (1987-2011) en el puesto N° 4. De acuerdo con las investigaciones locales, en especial las vinculadas al recupero de los activos, en 24 años Ben Ali amasó alrededor de $13.000 millones de dólares. Luego encontramos a Haji Mohammed Suharto, presidente de Indonesia de 1967 a 1998 (el que más tiempo gobernó luego de Mobutu), cuya fortuna ilegal se calculó entre $15.000 y $35.000 millones de dólares. Ocupa el puesto N° 2 el ex dictador egipcio Hosni Mubarak, quien gobernó el país entre 1981 y 2011, y que habría extraído rentas ilegales de entre $40.000 y $70.000 millones de dólares.

Y, finalmente, se lleva la medalla de oro de la corrupción Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas de 1965 a 1986, a quien se le estimó un patrimonio de entre $35.000 y $100.000 millones de dólares, y que pasó a la fama porque, según dijeran algunos de sus colaboradores, se llevó lingotes de oro del tesoro de su país valuados en $35.000 millones de dólares. Con Filipinas compartimos, además de la tabla de los mayores casos de corrupción del mundo, la colonización española y el híperpresidencialismo, régimen que exacerbó los poderes del sistema presidencial norteamericano y que es especialmente significativo a la hora de reflexionar sobre los déficits institucionales que explican nuestra corrupción estructural.

¿Adónde ubicar, entonces, los doce años de kirchnerismo? Aunque nadie más que Amado Boudou, Ricardo Jaime y otros funcionarios menores han sido hasta ahora condenados, la causa de “los cuadernos” y, en particular, las declaraciones como imputados colaboradores de empresarios ligados a la obra pública y al transporte, así como del otrora poderoso funcionario Claudio Uberti, permiten hacer algunos números a mano alzada.

Así, por caso, de acuerdo con trascendidos periodísticos, Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, habría declarado que a partir de 2004 se empezó a pagar entre el 10 y el 20% en retornos de la obra pública. De ser ello cierto, el porcentaje debería estimarse sobre los más de $100.000 millones de dólares que manejó por obra pública el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015, con lo que las rentas ilegales rondarían, como mínimo, los $10.000 millones de dólares (sólo por obra pública).

A ello habría que agregar los retornos de otras “unidades de negocios”, como los subsidios. De acuerdo con los medios, el empresario Aldo Roggio habría reconocido que pagaba el 5% de coimas sobre el total de subsidios al transporte que recibía su empresa Metrovías (concesionaria del tren Urquiza y del subterráneo de Buenos Aires). Al respecto, un estudio del CIPPEC elaborado en 2012 estimó que los subsidios totales al transporte ascendieron a $17.000 millones de pesos en 2011, lo que equivale a alrededor del 1% del PIB y del 30% del gasto total en subsidios del Estado nacional y significa que el gasto en subsidios aumentó más de cuatro veces (415%) como porcentaje del PIB entre 2005 y 2012. Específicamente en el área de ferrocarriles privados, información publicada por el Ministerio de Transporte da cuenta de que el gasto en subsidios fue de poco más de $510 millones de pesos en 2012, pero que aumentó cada año hasta llegar a duplicar ese valor en 2015. Y en colectivos, otro sector que también está siendo investigado por la Justicia en otras causas de corrupción, los subsidios entre 2005 y 2015 fueron de $150.000 millones de pesos.

Si pensamos en otras áreas aún no exploradas en detalle, como la energía, así como en los corredores viales de los que diera cuenta Uberti, no es aventurado imaginar que la era kirchnerista pudo habernos hecho avanzar varios puestos en la tabla de los mayores jugadores de la corrupción global.

Ello no debiera sorprender. Como dije aquí, a partir de 2003, la máquina de la corrupción que venimos construyendo desde épocas fundacionales, primero como un sistema de captura de Estado y luego, durante el menemismo, como un monopolio bilateral, se movió decididamente hacia el extremo cleptocrático, el mismo que ensayaron Rosas y los caudillos a mediados del siglo XIX. Y la cleptocracia, desde luego, no funciona igual en el marco de un sistema nominalmente democrático que en una dictadura africana, pero se le parece bastante.

(La autora es magíster y doctora en Derecho - Universidad de Yale).

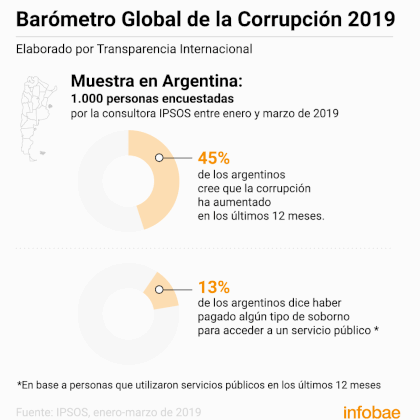
- La mitad de los argentinos cree que la corrupción aumentó en el último año (infobae - **24/9/19**)

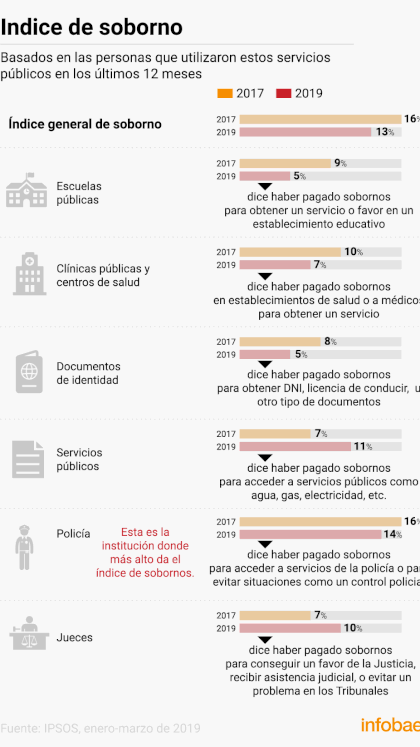
Así lo refleja el Barómetro Global de la Corrupción 2019, la encuesta de opinión pública sobre este tema elaborada por Transparencia Internacional en Latinoamérica y el Caribe

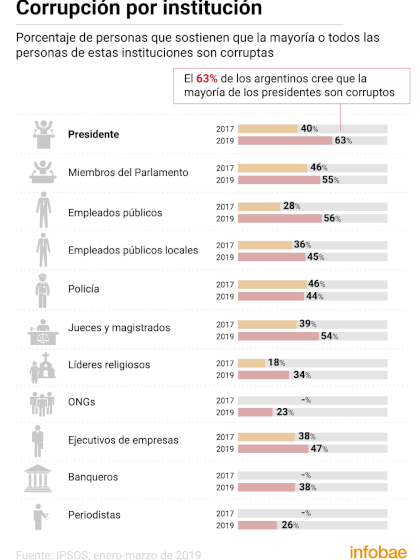
(Por Mariel Fitz Patrick)

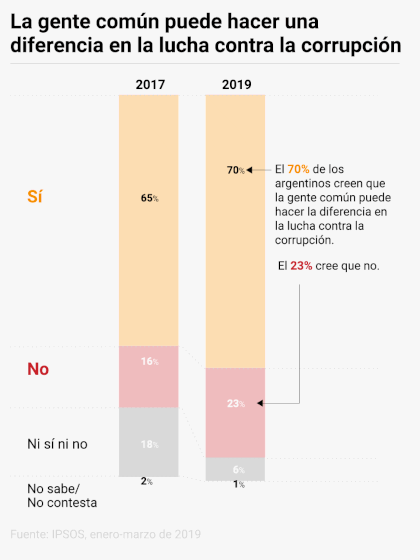
La mitad de los argentinos cree que la corrupción ha aumentado en el último año y que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para combatirla. Esta convicción se repite en gran parte de la región, donde sus ciudadanos también piensan que las prácticas corruptas está empeorando en sus países. Así lo refleja la última edición 2019 del Barómetro Global de la Corrupción, la encuesta internacional de opinión pública sobre este tema elaborada por Transparencia Internacional.

Asimismo, y más allá de lo que indican otros sondeos locales donde prevalece la preocupación por la situación económica, el estudio refleja que el 93% de los argentinos piensa que la corrupción en el Gobierno es un problema grave. Pese a que este tema y la transparencia institucional ha sido un caballito de batalla de la gestión de Cambiemos, el 67% considera que el Gobierno actual tiene un mal desempeño en materia de lucha contra la corrupción. El 49% de los argentinos que cree que la corrupción se agravó en el último año, está apenas por debajo del 53% que opina lo mismo, en promedio, en la región. Un 29% de los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe cree que la situación está igual, y solo el 16% que mejoró.

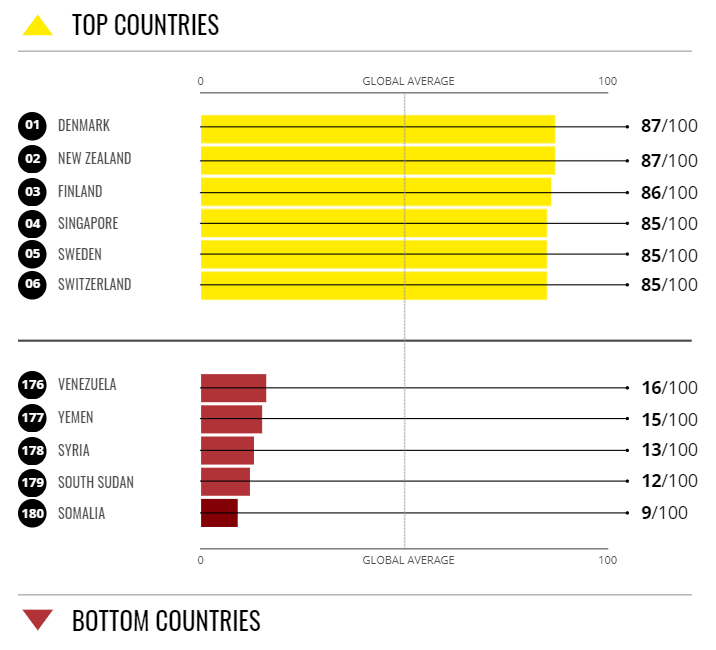








**Corruption Perceptions Index 2019 (Transparency International)**



**España - Puntuación: 62 Posición: 30**

**Argentina - Puntuación: 45 Posición: 66**

- Los once escándalos de corrupción que acechan a Cristina Fernández (La Razón - **26/10/19**)

(Por Toni Bonilla)

Quien según todos los sondeos volverá al poder como vicepresidenta de Argentina, se encuentra inmersa en una larga lista de investigaciones por corrupción correspondientes a su anterior etapa en la Casa Rosada.

1. Caso “Los Sauces”

Presunto desvío de fondos públicos destinados a infraestructuras para beneficiar a empresarios afines a la esfera kirchnerista.

2. Caso de las operaciones con dólar futuro

Presunta administración infiel en operaciones monetarias en perjuicio del Estado.

3. Caso del Memorándum de Entendimiento con Irán

Presunto delito de encubrimiento a raíz de un principio de acuerdo entre Irán y Argentina para investigar el ataque terrorista a la asociación israelita AMIA en Buenos Aires en el que murieron 85 personas. El acuerdo terminó revelándose irrelevante, el Parlamento de Irán no lo aprobó y la justicia argentina lo declaró inconstitucional.

4. Caso “Hotesur”

Presunto delito de lavado de activos y por retornos de dinero en la concesión de contratos de la obra pública.

5. Caso red de sobornos en la adjudicación de carreteras en la provincia de Santa Cruz.

Presunta asociación ilícita y administración fraudulenta de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en perjuicio del Estado y lavado de dinero”.

6. Caso de los “Cuadernos de la corrupción”

Presuntos sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos con el Estado durante los 12 años de Gobiernos kirchneristas. Causa originada por las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, donde se recogen detalles de entrega de sobres y paquetes de dinero para miembros de los Gobiernos de la era Kirchner.

7. Caso de los trenes

Presunto pago de sobornos en la compra-venta de Talgos, Cercanías y otros trenes usados por RENFE España.

8. Caso “colectivos”

Presunto pago de gratificaciones por parte de las empresas de autobuses urbanos que recibían subsidios del Estado.

9. Caso aviones oficiales

Presunto envío de diarios y otros objetos personales, como muebles desde Buenos Aires a Río Gallegos y el Calafate en aviones oficiales del Estado.

10. Caso Documentos históricos

Presunta apropiación de valiosas piezas encontradas en su casa de El Calafate.

11. Caso gas licuado

Presunto pago de sobreprecios en la compra de gas natural licuado.

**No sé si son los más importantes, pero a mí me parecen muy relevantes (emblemáticos)**

Caso Yabrán (narcotráfico, de la planta -Colombia, Bolivia, México-, a su mesa, con Ocasa)

Alfredo Enrique Nallib Yabrán (Larroque, 1 de noviembre de 1944 - Aldea San Antonio, 20 de mayo de 1998) fue un empresario argentino con una profunda vinculación con los gobiernos de Menem, presidente de la Argentina desde 1989 hasta 1999. Empezó a conocerse su nombre debido a acusaciones del exministro de economía Domingo Cavallo y posteriormente por su presunta vinculación con el asesinato del periodista José Luis Cabezas.

Yabrán nació en Larroque, provincia de Entre Ríos en 1944, y fue el séptimo hijo de Nallib Miguel Yabrán y Emilia Tufic Marpez -ambos hijos de inmigrantes libaneses-. Se trasladó a la ciudad de Buenos Aires a principios de los años sesenta. Pronto comenzó a hacer negocios en áreas de seguridad y transacciones bancarias. En los años setenta ya era uno de los principales accionistas de la empresa Ocasa. A fines del gobierno de Raúl Alfonsín pasó a operar seguridad aeroportuaria.

En una sesión del congreso de 1995, el entonces ministro de economía Domingo Cavallo denunció a Yabrán como una suerte de líder mafioso, con protección política y judicial. En este momento Yabrán se hizo conocido para el público en general, aunque su identidad era desconocida en gran medida y la prensa no contaba con ninguna foto de él.

Legalmente, Yabrán sólo declaraba poseer unas pocas empresas de poca importancia, pero Cavallo lo acusaba de manejar, mediante testaferros (especialmente Luis Alberto Acosta y hermanos), otras compañías más importantes, entre ellas, el Correo OCA (que manejaba el 30 % del mercado postal argentino), Edcadassa (empresa que maneja los depósitos fiscales), Ocasa, la compañía de transporte y logística Villalonga Furlong, Intercargo (rampas) e Interbaires (free shops). Estas empresas se vendieron a continuación al Grupo Exxel por 605 millones de dólares. Dicho grupo niega que Yabrán haya sido el vendedor y borraron el Cuarto Grupo inversor (Fund IV) del sitio oficial de la empresa.

La acusación principal contra Yabrán era que sus empresas de transporte, logística y seguridad (manejado por su mano derecha Josema “Dica” Di Carolis) eran utilizadas para ocultar tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Nexos con la política

Durante la década de 1990 se lo vínculo al presidente Carlos Menem. En 2018 el periodista Jorge Asís comentó que Yabrán había tenido varios negocios con el Grupo Macri y que el en ese momento mandatario argentino Mauricio Macri habría actuado de nexo entre Yabrán y su padre.​ Así mismo el periodista Martín Granovsky inicio en 2005 una investigación sobre los nexos entre Mauricio Macri y Alfredo Yabrán para controlar resortes financieros de la ciudad de Buenos Aires, ​investigación que hasta el momento no arrojó resultados.

Muerte

En un principio, Yabrán mantenía un bajo perfil mediático y sólo hablaba mediante voceros, hasta las acusaciones mediáticas de Cavallo. El fotógrafo José Luis Cabezas, de la revista Noticias, fue el primero en lograr fotografiarlo. ​Poco después, Cabezas fue asesinado, y personas del entorno de Yabrán se vieron implicadas en el caso. A partir de entonces se vio obligado a salir en público y hacer declaraciones al respecto.

Cuando se dictaminó una orden de arresto contra Yabrán, éste pasó a la clandestinidad. Cinco días después, el 20 de mayo de 1998, Alfredo Yabrán se suicidó disparándose con una escopeta, que le desfiguró el rostro e hizo el cadáver irreconocible.​

Según la investigación forense el cadáver era de Yabrán, pero algunos medios de comunicación pusieron en duda la posibilidad del suicidio dada la longitud del cañón y los brazos de Yabrán. Esto dio pie a una leyenda urbana que plantea que Yabrán no se habría suicidado realmente sino que habría realizado un montaje para que así lo pareciera. Durante el año 2002 tuvo lugar en Estados Unidos una transacción comercial supuestamente realizada por Yabrán. Sin embargo, la teoría más aceptada es que un tercero habría intentado suplantarlo, presentando documentos adulterados e imitando la firma de Yabrán.​

Caso Ciccone (forma torticera de apropiarse de la impresión del papel moneda)

El Caso Ciccone (en ocasiones llamado Boudougate​) es el nombre con el que se conoce en Argentina al escándalo político en dicho país que involucra al ex-Vicepresidente Amado Boudou y la imprenta Ciccone Calcográfica (luego Compañía de Valores Sudamericana). ​El Tribunal Oral Federal N°4 condenó a Amado Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública a 5 años y 10 meses de prisión, a José María Núñez Carmona a cinco años y seis meses de prisión como partícipe necesario de esos delitos y a Nicolás Ciccone por cohecho activo a 4 años y seis meses de prisión, todas ellas penas de cumplimiento efectivo y también dictó condenas cuyo cumplimiento dejó en suspenso, para Alejandro Vandenbroele, como partícipe necesario a 2 años de prisión, Rafael Resnnick Brenner, a 3 años de prisión y a Guido Forcieri a 2 años y 6 meses de prisión.​ El fallo fue confirmado por la Cámara de Casación Penal.​

En julio de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se presentó en el expediente judicial a pedir la quiebra de Ciccone Calcográfica por una deuda con el fisco de 60 millones de dólares, que se ordenaría el 15 de ese mes. Le reclamaba una deuda fiscal de más de 200 millones de pesos.​

Una empresa contratista del Estado Nacional (aeropuertos Almirante Marcos A. Zar de Trelew, provincia de Chubut, y Comandante Armando Tola en El Calafate, provincia de Santa Cruz), se presentó ante la Justicia y pagó 1,8 millones de pesos, lo necesario para permitir el trámite de levantamiento de la quiebra de Ciccone. Esta compañía habría pagado el dinero “en nombre de” la empresa fantasma llamada “The Old Fund”, representada por Alejandro Vandenbroele; como resultado, Vandenbroele pasó a ser el presidente de la empresa.

El 24 de septiembre de 2010, la Justicia levantó la quiebra de la ex Ciccone, lo que se tornó efectivo a partir de mediados de octubre de ese año.

En octubre de 2010, Ciccone Calcográfica pide a la AFIP una moratoria que incluya quita de intereses, multas y honorarios. El jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, si bien considera aceptable el pedido, sugiere consultar al en ese entonces Ministro de Economía Amado Boudou. La AFIP le envía una nota al señor ministro en la que se le plantea que resultaba determinante su intervención. El Ministro Boudou firma una nota para que se proceda a la petición formulada por Ciccone, dando instrucciones a la AFIP para darle a la empresa una moratoria excepcional para poder refinanciar su deuda, diciendo que “…se le hace saber que este Ministerio considera que el ejercicio de las competencias propias de ese Organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada…responde a los lineamientos políticos generales de este Gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica”.

El 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor de la concesión del plan de pagos, pero Ricardo Echegaray rechazó de puño y letra afirmando que “el plan debía ajustarse a derecho”.​

A mediados de 2011, The Old Fund tomó el control de la planta y en julio es renombrada como Compañía de Valores Sudamericana S.A.

En agosto de 2012, en la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una ley para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana (CVS)”. Dicha ley entre otras cosas establecía que “Una vez culminado el proceso de expropiación, la totalidad de los bienes pasarán a integrar el patrimonio de la Casa de la Moneda”.

A pesar de investigaciones periodísticas anteriores,​ el caso comenzó a salir a la luz partir de una investigación del periodista Nicolás Wiñazki para el programa radial de Jorge Lanata, Lanata sin Filtro, de Radio Mitre, donde se entrevistó el 6 de febrero de 2012 a Laura Muñoz, exesposa de Vandenbroele, donde lo acusaba de ser un testaferro de la empresa Ciccone y denunciaba que el dueño real era Amado Boudou.​ Su testimonio no tendría valor judicial, dada la relación matrimonial con Vandenbroele y el conocimiento limitado de sus actividades en curso.​

Alejandro Vandenbroele dijo que “no conoce ni siquiera de vista al vicepresidente Amado Boudou” y que “Es absolutamente falso que sea testaferro del señor vicepresidente de la Nación. No fui, ni soy amigo, ni conocido y mucho menos cierto que tenga con él relación comercial alguna” refiriéndose a si es testaferro de Amado Boudou en una solicitada.​ En un escrito presentado en 2012 ante el juzgado de Ariel Lijo dijo que empresas cuyo dueño es el empresario Raúl Moneta fueron las que aportaron el dinero para levantar la quiebra de la ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana.

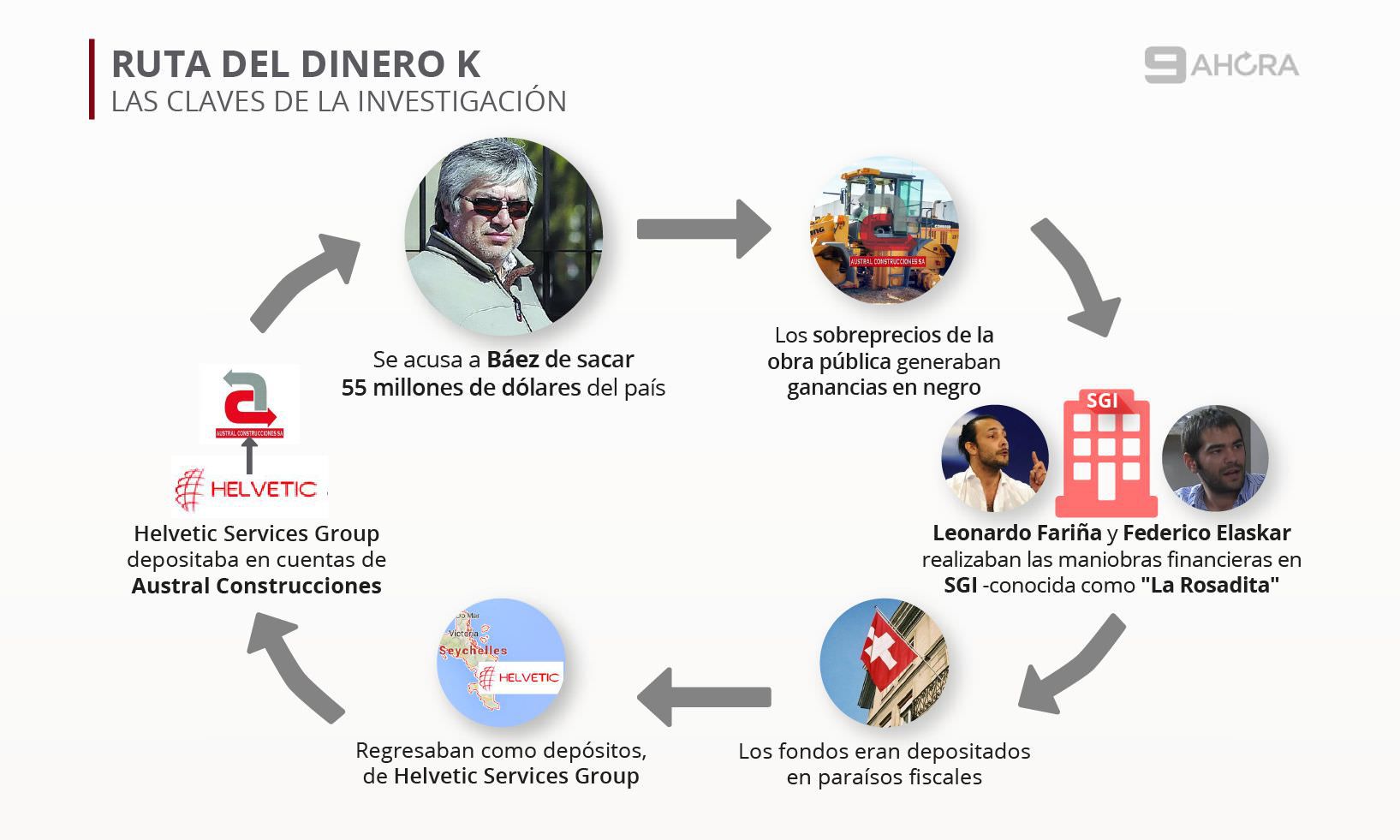
Boudou también negó terminantemente tener alguna relación con Vandenbroele e incluso conocerlo. Expresó que creía que toda la controversia eran “operaciones mediáticas” orquestadas por el Grupo Clarín para perjudicar al gobierno. Se acusó al Ministro del Interior Florencio Randazzo y a una imprenta competidora, Bold, de filtrar información acerca de su relación con Ciccone.​ Randazzo negó cualquier relación con Bold.​

En marzo de 2012 José G. Capdevila, responsable de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, declaró al fiscal Rívolo sobre la consulta de la AFIP a Amado Boudou sobre el pedido de moratoria de la ex Ciccone y dijo que “Se analizó si correspondía o no que el Ministerio opinara sobre el tema, se analizó si jurídicamente correspondía la resolución del tema en el Ministerio de Economía o en el organismo consultante, a lo que se respondió en los términos del dictamos que correspondía a la AFIP” y que “El Ministro no le está dando la instrucción o la orden de que se otorgue lo solicitado (la moratoria) sino que dice que lo sustancie, es decir, que le dé el trámite que corresponda según las facultades que tiene el organismo tributario”, por lo que la respuesta de Boudou no necesariamente se traduce como una respuesta positiva.​ Pese a esto, en declaraciones posteriores declaró que en su momento alertó que el Ministerio no podía ni debía opinar sobre el pedido de la empresa.​

En abril de 2012 la justicia comprobó que Vandenbroele pagaba las expensas, el alquiler y el servicio de televisión por cable de un departamento perteneciente a Boudou.​ Sergio Gustavo Martínez, un socio minoritario de Alejandro Vandenbroele en The Old Fund S.A., compró dos camionetas para apoyar la precandidatura de Amado Boudou para jefe de gobierno porteño en 2010, mientras compartía un domicilio legal con el entonces ministro de Economía.​

La ruta del dinero K (enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner y su “Apparátchik”)

- Así es la investigación de la “Ruta del dinero K” (Ahora - **7/4/16**)



La detención de Lázaro Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, generó gran repercusión en el país. Se trata de los principales apuntados en una red de lavado que periodísticamente fue a dada a conocer por Jorge Lanata, bajo el nombre de la “Ruta del dinero K”. Si bien estaba previsto que el empresario santacruceño de la construcción, de cercana relación a la familia Kirchner, prestara declaración este jueves, la Policía Federal lo detuvo y la Justicia adelantó su indagatoria. Finalmente, presentó un escrito y reveló que usó el dinero para “comprar un campo”.

Los principales puntos de la investigación

La denuncia de “Periodismo Para Todos”

Báez mantuvo una fuerte amistad con el expresidente Néstor Kirchner, incluso desde antes de su llegada al Gobierno nacional, y el vínculo persistió durante la presidencia de Cristina Fernández. La investigación periodística apuntó al trasfondo económico de la relación, ya que las licitaciones para obras públicas de mayor envergadura en Santa Cruz quedaron en el 80 % de los casos en manos de los Báez. Se estima también que el empresario manejaba un sobreprecio, que generaba una ganancia en negro que debía ser ingresada de nuevo al sistema financiero.

A raíz de este hecho, comenzaba la descripción del entramado de una red de lavado de dinero. La acusación sobre Báez fue que sacó cerca de 55 millones de dólares del país, a través de maniobras financieras en SGI -conocida como “La Rosadita”-. Los fondos eran depositados en paraísos fiscales, en países como Suiza, y regresaban como depósitos, a veces con escalas en Islas Seychelles, que la firma Helvetic Services Group hacía en cuentas de Austral Construcciones S. A., propiedad del empresario.

Según la denuncia, la red funcionaba así: Leonardo Fariña y Federico Elaskar sacaban los millones Báez de manera ilegal a través SGI, para luego retornarlos a las cuentas nacionales del empresario. Por otro lado, la investigación busca dar cuenta de que, además del lavado de ganancias del sobreprecio, Báez también se enriqueció ilícitamente y evadió impuestos. La información con la que cuenta la Justicia indica que las firmas del empresario kirchnerista recaudaron, sólo en 5 años, 4.000 millones de pesos en contratos estatales nacionales y 1.200 por negocios con Santa Cruz.

- Qué es “La ruta del dinero K”, la causa por la que investigarán a Cristina Kirchner (Univisión - **9/4/16**)



Un grupo de empresarios vinculados a los Kirchner fueron detenidos por una supuesta trama de lavado de dinero. Uno de ellos citó a la expresidenta en la declaración.

Un fiscal argentino abrió una investigación este sábado contra la expresidenta Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero. Un empresario que fue detenido esta semana la mencionó a ella y a su difunto esposo Néstor al declarar a las autoridades judiciales cómo funcionaba La ruta del dinero K.

Pero, ¿qué es esta trama? ¿Qué rol podrían haber tenido los Kirchner? La ruta del dinero K es una causa de la fiscalía federal argentina que se destapó en 2013 con una investigación periodística. En ese momento, se señaló al empresario Lázaro Báez como supuesto prestanombre del expresidente Néstor Kirchner.

Lázaro Báez, el empresario clave

El empresario y petrolero es oriundo de la provincia patagónica de Santa Cruz, al igual que el ex mandatario, y su crecimiento patrimonial coincidió con el ascenso político de los Kirchner, primero en la gobernación de esa provincia y luego la presidencia del país.

Báez, de 59 años, está imputado de desviar fondos hacia cuentas en Suiza durante los 12 años de gobierno de los Kirchner, con quienes mantuvo una amistad.

El video de los fajos de billetes

La causa se vio impulsada en los últimos días con la reciente difusión de un video en el cual se observa a Martín Báez, hijo de Lázaro, junto a otros sospechosos contando varios fajos de billetes, en apariencia dólares y euros, en las oficinas de la financiera, conocida como “La Rosadita”, mencionada en la resolución del juez.

Una relación de años

La relación comercial con los Kirchner se había dado a conocer parcialmente en las propias declaraciones juradas que Cristina Kirchner presentó tras la sucesión por la muerte de Kirchner en 2010. Esa relación incluye negocios inmobiliarios y hoteleros.

El detenido creó un imperio de negocios en la sureña Santa Cruz (Patagonia), provincia que fue plataforma de lanzamiento de los Kirchner a la política nacional. Medios de la prensa argentina sostienen que Báez manejaría dinero de la familia Kirchner.

El empresario que cita a los Kirchner

La decisión del fiscal Guillermo Marijuán se produce después de que el juez federal Sebastián Casanello decretara este viernes el secreto del sumario del caso tras tomar declaración durante más de 11 horas, en el marco de la misma causa, al empresario Leonardo Fariña, en prisión por evasión fiscal.

Los medios argentinos atribuyeron a Fariña los vínculos entre los Kirchner y esta trama.

Caso de la efedrina (la confirmación de que Argentina -ya- es un “narcopaís”)

Triple crimen: una historia de drogas, negocios y muerte, con un solo detenido

La imagen de los tres cuerpos acribillados a balazos, abandonados en una hondonada, en medio de una zona desolada, semejaban una escena de una película de terror.

Fueron descubiertos por un transeúnte, a unos 650 metros de la ruta 24, en General Rodríguez. El hombre pensó que se trataba de tres borrachos. Pero eran los cuerpos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Así comenzaba a salir a la luz una historia de drogas, negocios y muerte.

Hoy (13/8/2010), a dos años del hallazgo de las víctimas, la causa tiene un detenido: Martín Lanatta, sospechado de haber participado de los asesinatos de los tres empresarios. Para la fiscalía, hay al menos otras tres personas que también fueron partícipes.

Se trata del hermano de Lanatta, Cristian, y de los hermanos Víctor Gabriel y Marcelo Javier Schillaci, cuyos procesamientos fueron revocados el pasado mes de marzo por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes.

“La fiscalía ya apeló esa decisión. Nosotros mantenemos la misma hipótesis: estas cuatro personas participaron del crimen de los tres empresarios”, dijo a lanacion.com el fiscal Juan Ignacio Bidone. Ahora resta esperar la resolución del Tribunal de Casación Penal bonaerense.

Según indicó Bidone, la investigación ha avanzado en la descripción de la distribución histórica de lo sucedido. También dijo que se están llevando a cabo nuevos peritajes en relación al arma encontrada en la camioneta de Ferrón, vehículo que fue hallado incendiado en Flores.

El crimen. Tras permanecer desaparecidos durante una semana, los cuerpos de los tres empresarios fueron encontrados acribillados a balazos y enterrados en un zanjón en General Rodríguez. Estaban boca abajo y tenían los pies y las manos atadas con precintos plásticos.

El hallazgo ocurrió el 13 de agosto de 2008. A partir de allí, comenzaron a desfilar por la causa una serie de personas vinculadas al negocio farmacéutico.

Tanto Forza como Ferrón trabajaban en dicho rubro. Bina era el único de los tres empresarios que no estaba vinculado a la industria.

Según la investigación llevada a cabo por la fiscalía, el móvil del triple crimen sería una venganza basada en una serie de traiciones dentro de los entornos de Forza y Ferrón. Bina, en cambio, habría estado “en el lugar equivocado, en el peor momento”.

Otros personajes. Entre los personajes fueron apareciendo en el curso de la investigación, se puede mencionar a Ariel Vilán, el hombre que se suicidó al poco tiempo del hallazgo de los cuerpos de los empresarios. Vilán trabajaba para Martín López Magallanes, un ex socio de Forza. Además, era cliente de Forza y dueño también de un laboratorio farmacéutico. Antes de suicidarse, dejó una nota donde negaba estar relacionado con el triple crimen.

Por otra parte, Emiliano Marcos, testigo clave en la causa, fue arrollado por un tren en noviembre de 2009. Poco tiempo después, su pareja, también testigo, intentó suicidarse.

También figura en esta historia Hernán Rodolfo De Carli, dueño de una mansión en General Rodríguez. Datos aportados por un testigo sugerían que los tres empresarios habrían estado en esa vivienda poco antes del crimen. Pero, finalmente, De Carli fue sobreseído por falta de pruebas.

En tanto, Solange Bellone, la esposa de Forza, que conducía, junto a su marido, la distribuidora Seacamp, fue vinculada en la causa que investiga la “mafia de los medicamentos”.

Seacamp colaboró con 200.000 pesos en la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Los vínculos con la efedrina. Si bien judicialmente el triple crimen y la causa que investiga la ruta de la efedrina no están relacionados, muchos de los personajes involucrados figuran de alguna manera en ambas investigaciones.

Entre estos personajes, se encuentra Jesús Martínez Espinoza, un mexicano investigado por la causa de la efedrina que está sindicado como presunto jefe narco. Espinoza admitió conocer a Forza y declaró que éste le había ofrecido el negocio de una droguería.

La investigación sobre el tráfico del precursor químico está hoy en la etapa de juicio, aunque Espinoza no es parte de este debate, pero si lo será, probablemente, de un próximo proceso.

También investigado en la causa de la efedrina, Ricky Martínez, padre del actor Mariano Martínez, fue vinculado con Forza por las declaraciones del cirujano plástico Gustavo Ricchiuto, quien lo acusó de ser uno de los proveedores del empresario asesinado.

Por otra parte, un nombre que aparece de alguna manera en ambos casos es el de Luis Tarzia, el primer argentino detenido en la causa por el tráfico de efedrina, que falleció de un paro cardiorrespiratorio. Había sido procesado con prisión preventiva, señalado como presunto gerente local de la red de narcotraficantes que tenía una cocina de drogas en Ingeniero Maschwitz. Forza se había comunicado con él por medio de un radiotransmisor.

En tanto, José Luis Salerno, detenido y liberado por falta de pruebas en la investigación sobre el tráfico del precursor químico, era el dueño de la droguería donde trabajaba Ferrón.

“En cuanto a la posible vinculación con la ruta de la efedrina, en principio la situación procesal es diferente, estamos en momentos distintos. Una parte de esa causa ya está en debate. Aunque evaluamos la posibilidad de ir a presenciar alguna de estas audiencias, ya que consideramos que sería de utilidad para nuestra investigación”, señaló Bidone.

“Sí hay algunas personas en común en ambas causas. Incluso hay muchas circunstancias que se comparten, muchas partes de la historia, pero los hechos constitutivos de los delitos investigados deben separarse. No es conveniente que todo se sume. Es muy complejo llevar una sola de estas causas, no quisiera imaginarme lo que sería llevar dos causas de esta dimensión”, explicó el fiscal.

- Estado y crimen: el mercado ilegal de la efedrina en Argentina (2003-2018) (Real Instituto Elcano - **23/12/19**)

(Por Juan Estanislao López Chorne. ARI 122/2019)

Tema

El caso del contrabando de efedrina en Argentina entre 2003 y 2008 ilustra cómo pocos el amparo y complicidad estatal que requieren las organizaciones criminales complejas vinculadas a la comercialización de drogas ilegales u otras sustancias fuertemente reguladas.

Resumen

Entre los años 2003 y 2008 la industria farmacéutica argentina importó cantidades exorbitantes de efedrina, en volúmenes que excedían, miles de veces, las necesidades sanitarias de ese fármaco como descongestivo. En realidad, fue sólo un puñado de droguerías y laboratorios que se las amañó para importar esa droga con otro propósito comercial: su exportación clandestina a México como insumo para la fabricación de metanfetaminas, éxtasis y otras sustancias. Esta triangulación de efedrina importada “legalmente” de China y la India y su posterior contrabando a México involucró un negocio ilícito calculado entre los 300 y 500 millones de dólares.

En este negocio ilegal estuvieron involucrados laboratorios formales y clandestinos, empresarios e importadores y cárteles de droga mexicanos en uno de los mayores casos conocidos de narcotráfico en Argentina. En todas las esferas y niveles de este negocio es posible observar la activa participación de policías, agentes de inteligencia y funcionarios judiciales y políticos de todos los niveles.

La singularidad de tratarse de un mercado ilegal de una sustancia regulada que luego era desviada, como insumo, para la fabricación de drogas ilícitas permite examinar y ponderar algo que no suele ser nada sencillo en los estudios de mercados negros y organizaciones criminales: el volumen del mercado ilícito y la multiplicidad de sus actores. Es la historia de un negocio ilícito que no hubieran podido explotar organizaciones criminales complejas sin la regulación estatal -formal e informal- del negocio.

Análisis

(1) Génesis

(1.1) El triple crimen de General Rodríguez

El 13 de agosto de 2008 aparecían en un zanjón cercano a la ruta 24 del partido de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires) los cuerpos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. Los tres “empresarios” vinculados a la industria farmacéutica murieron de rodillas por el impacto de varios disparos efectuados a su tórax y cabeza a corta distancia. Habían sido ejecutados. Lo que inicialmente podría haber sido configurado como un delito más en la “zona caliente” del conurbano bonaerense, progresivamente derivaría hacia una cuestión mucho más compleja en la medida que se iban conociendo detalles del triple homicidio y los móviles detrás del mismo. Se trataba indudablemente de un crimen de características mafiosas perpetrado por una organización criminal compleja. ¿Cuál era el móvil y quiénes los ejecutores materiales e intelectuales del asesinato?

(1.2) Los autores materiales e intelectuales del triple crimen

La investigación criminal y judicial de este crimen derivaría en un juicio por el que serían encontrados culpables los hermanos Víctor y Marcelo Schillacci, y Cristián y Martín Lanatta. Los cuatro serían condenados a cadena perpetua por “privación de la libertad agravada en concurso real con homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por la participación de más de dos personas”. Martín Lanatta habría sido quién citó a las tres víctimas a una reunión en el centro comercial de Avellaneda, donde sólo habrían estado unos pocos minutos, trasladándose todo el grupo mediante engaño o amenaza al domicilio del propio Lanatta en Quilmes. En un descampado serían ulteriormente hostigados, torturados y ejecutados de una forma más propia de cárteles mexicanos que respecto a lo que suele observarse en los criminales vernáculos.

El Tribunal Oral en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que condenó a los Lanatta y a los Schillacci, consideró que el autor intelectual del triple homicidio fue Esteban Ibar Pérez Corradi, quién “se vio tan perturbado porque le estaban quitando el negocio, que anunció a los cuatro vientos que mandaría a matar a Forza, con quien además estaba enemistado porque éste no le había pagado lo que le debía, como consecuencia de la financiación que le hizo a su droguería… En este caso se ha corporizado en el deseo de desplazar de modo absoluto y definitivo a quienes se perfilaban, cada vez con más fuerza y mejor organización: Forza, Ferrón y Bina, como precipuos competidores en el negocio ilegal de importación, exportación, compra y venta de efedrina”. De acuerdo al tribunal, los tres empresarios asesinados habían procurado un contacto directo con el mexicano Jesús Martínez Espinosa, para venderle efedrina que éste precisaba para un laboratorio de drogas sintéticas que había montado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, pudiendo prescindir de la intermediación de Pérez Corradi. Así también lo reconoció el propio Martínez Espinosa, quien manifestó que Forza le ofreció hacer negocios con una droguería que estaba bajo su control.

A partir de este crimen y sus inéditas circunstancias, lenta y progresivamente comenzarían a desentrañarse las características, derivaciones y alcance de un enorme negocio ilícito.

(2) El negocio de la efedrina

(2.1) La efedrina y la pseudoefedrina como insumos de drogas de síntesis

La efedrina es un alcaloide natural presente en varias especies vegetales. Tiene propiedades estimulantes del sistema nervioso central y destaca particularmente sus capacidades broncodilatadoras, siendo muy eficaz en el tratamiento de los síntomas de congestión asociados a la gripe o el resfriado. Por ello, se registra un uso milenario de este compuesto en la medicina tradicional de Oriente, particularmente en China, donde se la conoce como Ma Huang.

A partir de este alcaloide, modificando ligeramente su estructura molecular es posible obtener metanfetaminas y otras drogas de síntesis muy populares en sectores urbanos y de alta demanda, particularmente en fiestas electrónicas. Una vez obtenido el insumo clave -efedrina o pseudo efedrina- incluso un neófito o improvisado químico puede valerse de instrucciones presentes en sitios de Internet para “cocinar” algunas drogas de diseño.

La síntesis de efedrina o pseudoefedrina, por el contrario, no es materia sencilla. De manera que el proceso de producción de metanfetaminas, éxtasis y otras drogas requiere la provisión y derivación de este insumo clave producido en el circuito legal y regulado de la industria farmacéutica. Debe ser importado por circuitos aduaneros y comerciales formales y ulteriormente derivado ilegalmente por droguerías y laboratorios que, en vez de utilizarlo para fabricar medicamentos contra el resfriado o la gripe, lo empleen para fabricar drogas ilícitas o lo reexporten a organizaciones criminales que fabrican esas sustancias.

(2.2) Las particularidades del negocio

A partir de lo descrito en el punto anterior surge una singularidad de este negocio ilegal. El comercio de otras drogas ilícitas involucra una verticalidad ilegal en toda la cadena productiva. En el caso de la marihuana, la cocaína o la heroína se comienza en la producción agrícola ilegal de las plantas que producen las sustancias narcotizantes, y en el caso de las dos últimas la obtención y aislamiento de esos alcaloides presentes en las plantas de coca y amapola en complejos laboratorios clandestinos.

El contrabando de efedrina implica la derivación y comercialización ilegal de un insumo de la industria farmacéutica legal para su uso como insumo, ya no de descongestivos sino de drogas recreativas de diseño que -por supuesto- se venderán en un circuito ilegal. Si bien la comercialización de drogas ilegales en Argentina, América Latina y buena parte del mundo implica diferentes niveles de complicidad y “regulación” estatal, el caso de la efedrina requiere una relación más directa con los organismos regulatorios y de control y la explotación de vacíos jurídicos y/o la promoción de funcionarios “distraídos” y negligentes. En este caso se observa patentemente lo que Marcelo Sain describe como un “pacto de doble vía”: “por un lado, un pacto político-policial, que implicó la delegación del gobierno de la seguridad pública, por parte de sucesivas autoridades gubernamentales, a las cúpulas policiales. Por otro lado, un pacto policial-criminal concretado en el control de los delitos -en especial los de criminalidad compleja- que queda en manos de la policía, en cuanto regula y, a menudo, participa en la trama. Todo esto ha dado lugar a una institucionalidad estatal ilegal que ha adquirido un papel relevante en cierto control (irregular) del crimen y en la apropiación de una porción de los fondos generados por la actividad delictiva manipulada policialmente”. Como observaremos a continuación, incluso podríamos decir que en el caso del mercado ilegal de efedrina el componente “político” se encuentra hipertrofiado.

En efecto, el caso argentino que estamos examinando resulta paradigmático. Y algunas cifras resultan muy elocuentes. En 2003 Argentina importó 1.500 kg de efedrina, 2.599 kg en 2004, 3.925 kg en 2005, 6.100 kg en 2007 y 20.405 kg en 2008 (no hay ningún error en esta última cifra). Para ilustrar el volumen de la comercialización ilegal de este producto observemos -invertidamente- su utilización en el mercado de medicamentos: “entre 2000 y 2010, un famoso laboratorio utilizó sólo 423 kilos del precursor para producir unas 600.000 unidades de jarabe para la tos y en base a la declaración de varios testigos se llegó a la conclusión de que con un kilo de efedrina se pueden fabricar 20.000 pastillas de 50 miligramos”. Los volúmenes de importación reseñados implicaban según un estudio de la International Narcotics Control Board de las Naciones Unidas que Argentina declaraba necesitar para la elaboración de medicamentos 88 veces más efedrina o pseudoefedrina que Italia, 30 más que Chile, 7 más que Brasil y 5 más que EEUU.

Según el fallo que condenó a los Schillaci y los Lanatta la diferencia de rentabilidad de comercializar efedrina legal para resfríos o ilegal para fiestas electrónicas sería la siguiente: “utilizada legalmente para fabricar descongestivos o broncodilatadores, y cuyo valor en el mercado local oscilaba entre los 90 y 120 dólares. Sin embargo, en el mercado ilegal, donde el principal comprador era México, dicho precursor químico se utilizaba para la fabricación de drogas de diseño o sintéticas, como el éxtasis; los cárteles mexicanos, ya con el producto manufacturado lo destinaban esencialmente a los nacionales de su vecino país, EEUU, llegando a pagar hasta U$S10.000 el kilo, por lo que resultaba para sus tenedores un extraordinario negocio”. Ciento veinte dólares su valor en el mercado de medicamentos, 10.000 en el circuito ilegal. Un diferencial inconcebible. Si juntamos los volúmenes y rentabilidad examinados en los dos últimos párrafos, suponiendo que el 80% de la efedrina importada “caía” en el circuito ilegal estamos hablando entre 2003 y 2008 de un negocio de aproximadamente 300 millones de dólares. Tal vez esto explique por qué los funcionarios de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), que debían observar y autorizar la importación de precursores químicos, fueran tan descuidados en no darse cuenta que los volúmenes de efedrina importada resultaban injustificables. O tal vez haya que pensar que fueron solícitos y diligentes por ese mismo motivo.

(3) Estado y narcotráfico

A esta altura quizá algún lector podrá suponer que todo el negocio ilícito descrito surgió de un hábil ardid de un grupo de contrabandistas, que descubrió un “agujero” reglamentario que les permitió importar una exorbitante cantidad de una sustancia médica controlada (efedrina), para después reexportarla clandestinamente a cárteles narcos mexicanos. No es así, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) tenía la responsabilidad -precisamente– de controlar la importación de precursores químicos. En efecto, en 1989, la Ley 23.737 estableció en su artículo 44 que: “Las personas físicas o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor o menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden o realicen cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional, con sustancias o productos químicos incluidos en el listado al que se refiere el párrafo anterior, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos”. A su vez, el Decreto 2300 del año 2002 delegó esa facultad y ese Registro en la SEDRONAR y como responsable fue designado Gabriel Abboud. Entre el año 2004 y el año 2008, cuando el control de las importaciones estuvo controlado por la SEDRONAR y al frente de la misma estaba José Granero, se importaron 47,6 toneladas de efedrina, de las cuales 41 fueron desviadas por personas procesadas o condenadas por maniobras de narcotráfico internacional. Análogamente, el primer año que la responsabilidad de control sobre la importación de efedrina fuera asignada a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ésta se redujo a solamente 24 kg.

En 2014 el ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico, José Granero, el ex subsecretario técnico de Control de la SEDRONAR, Gabriel Yuseff Abboud y el director del Registro Nacional de Precursores Químicos, Julio De Orue, fueron procesados por la jueza Federal María Servini de Cubría por el “delito de haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la aduana y alterando posteriormente su destino de uso”. Según la jueza, el accionar de los funcionarios “no fue casual, ni un descuido. La real y única problemática es una operación de narcotráfico internacional”, en el marco de un negocio ilegal que según la magistrada “rondaría entre los 123.916.000 y los 491.666.000 dólares estadounidenses”.

El juicio y eventual condena a los funcionarios sospechados se dilató enormemente en relación a otros expedientes vinculados con este caso. Múltiples recursos y la excusación de la jueza Servini de Cubría, quién se consideró hostigada por uno de los acusados (véase el apartado 2.5), demoraron la elevación del expediente a juicio oral. La causa recayó en manos del juez Sergio Torres quien, rechazando múltiples pedidos de nulidad, la elevaría a juicio oral en junio de 2017. Sin embargo, como es habitual, los recursos continuaron presentándose en los estamentos judiciales superiores y demorando la elevación a juicio oral de la causa. Finalmente, en octubre de 2018, el máximo tribunal de alzada en materia penal, la Cámara de Casación, confirmó el envío a juicio oral del expediente, el cuál debería efectivizarse en algún momento de 2019 o 2020.

Puede apreciarse a simple vista el inmenso negocio ilegal que se montó a partir del uso dual de un descongestivo como precursor de drogas de síntesis. Hemos revisado las singularidades de este mercado ilegal, todos los estamentos de la cadena productiva y de comercialización del mismo y algunos aspectos característicos de este tipo de mercados. Particular mención merece en este sentido el llamado “triple crimen”, forma típica de resolución de disputas comerciales en aquellos mercados que no pueden acceder al sistema de resolución de pleitos establecido por el Código Civil y Comercial. Pero si el episodio es típico por qué hablar entonces de particular mención. La causa es la trascendencia mediática de este triple homicidio -poco usual todavía en Argentina, afortunadamente- que empezó a desarmar la madeja del contrabando ilegal de efedrina en Argentina entre los años 2003 y 2008, abriéndose, a partir de ahí, más de tres decenas de causas conexas.

Sin embargo, el presente trabajo pretende encender alarmas sobre uno de los aspectos más deletéreos del narcotráfico: la degradación institucional a través de la cooptación de funcionarios de diversa índole cuando no, directamente, agencias públicas enteras. En este sentido el caso es paradigmático en relación al nivel de penetración y de capacidad de degradación de este tipo de organizaciones, o para ponerlo en términos más generales, del mercado negro de drogas ilícitas.

Los nexos de los autores materiales e intelectuales del triple crimen son múltiples con policías provinciales, federales, agentes penitenciarios, servicios de inteligencia; y políticos municipales, provinciales y nacionales; jueces y fiscales. El caso efedrina corta transversalmente todos los estamentos de estatalidad. En todos ellos hubo fallos, pero sobre todo, complicidad.

Conclusiones

Se puede decir que el triple crimen de General Rodríguez derivó en decenas de causas asociadas todas ellas al contrabando de efedrina para la fabricación de metanfetaminas. Conforme fueron avanzando las investigaciones de este caso se fue comprobando que otras causas que se sucedieron tenían vinculación con este negocio. Curiosamente la línea cronológica no sólo va hacia delante, sino que casos anteriores al triple crimen como el del laboratorio en Ingeniero Maschwitz o el doble crimen de Unicenter, ulteriormente se comprobaría que tendrían vinculación con toda esta madeja. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de algo tan vasto y que tiene varias e importantes facetas aun en pleno desarrollo?

En primer lugar, la comprobación de la transnacionalización de la elaboración y comercialización de drogas ilegales a nivel planetario, la sofisticación de las empresas criminales vinculadas y el particular papel de la República Argentina en esta trama. Tradicionalmente Argentina ha sido ubicada por informes de organismos multilaterales y de otros Estados (UNDOC y el Departamento de Estado de EEUU, entre otros) como un mercado de consumo de marginal importancia (dado el escaso tamaño del mercado de consumo argentino en general); como un país de escasa producción de drogas; y un relativamente importante hub de distribución de sustancias psicoactivas hacia el resto del mundo. Principalmente cocaína a nivel planetario y, en menor medida, marihuana y otras sustancias hacia otros países de la región. Mención particular, claro está, merece el papel de Argentina en la división internacional de la producción de drogas de síntesis en el marco de la transnacionalización de la cadena logística y productiva.

El caso de la efedrina desnuda una fenomenología más compleja de la que estábamos acostumbrados. En primer lugar, a diferencia de lo que vemos, por caso, en el mercado de la cocaína o la marihuana, donde hay países productores, otros países de tránsito y finalmente mercados de consumo; la elaboración y comercialización de drogas de síntesis muestra una mecánica similar a la que operan empresas transnacionales en mercados legales. Concretamente, como ocurre, por citar un conocido ejemplo, con la empresa Apple en la elaboración de teléfonos celulares, observamos en el negocio de la efedrina una “oficina central” en una ubicación determinada desde donde se toman las decisiones estratégicas (producción, logística y marketing) y diversas localizaciones donde se obtienen insumos necesarios para la producción de la mercancía y diversos canales logísticos para su distribución y comercialización en los grandes centros de consumo. No encuentro ejemplo más elocuente que semeje la operación de una empresa criminal ocupada en el mercado de drogas ilícitas al de empresas transnacionales que operan en mercados legales como en el de las drogas de síntesis, y en particular, el de la efedrina.

Las crónicas periodísticas y judiciales referenciadas en el trabajo mencionan a dos grandes cárteles mexicanos vinculados con este negocio y con esta historia: Sinaloa y del Golfo. Desde allí partirían los lineamientos corporativos en relación con la comercialización de un producto, en este caso metanfetaminas. La pregunta de ¿cómo entra Argentina en esta historia si se considera la lejanía con el centro principal de decisiones y distribución (México) y respecto al principal mercado de consumo (EEUU) luce completamente atinada? La triangulación vía Argentina no parece tener ninguna racionalidad logística. Difícilmente se pueda encontrar país más austral y alejado en el planeta Tierra para el circuito de elaboración, distribución y venta de estas sustancias. Por lo tanto, sí, el primer gran interrogante es por qué Argentina.

Observamos dos grandes razones. La primera de ellas más bien de carácter estructural, vinculada al nivel de desarrollo industrial y particularmente de la industria farmacéutica en la República Argentina. Un informe de 2017 del Ministerio de Hacienda de la Nación señalaba en este sentido: “En 2017 esta industria representó el 3,8% del VAB industrial, el 1,7% de las exportaciones totales y concentró el 3,4% del empleo industrial registrado en el sector privado. El mercado farmacéutico argentino es abastecido por 230 laboratorios (se estima que los laboratorios activos en forma regular y permanente son aproximadamente 210 compañías). El sector de fabricación de medicamentos cuenta con aproximadamente 190 plantas industriales instaladas en el país, de las cuales 160 son empresas de capitales nacionales. Existen alrededor de 40 laboratorios púbicos que producen medicamentos. En el año 2016 se estimaron alrededor de 449 empresas activas del sector privado en la industria farmacéutica (OEDE, 2018). Cerca del 40% de los locales de empresas del sector (incluyendo sucursales) están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Gran Buenos Aires (GBA), siguiendo en importancia, con una participación menor, resto de Buenos Aires (9,0%), Santa Fe (7,9%) y Córdoba (7,2%)”. No resulta sorprendente que las organizaciones criminales encontraran allí la estructura productiva y logística –y los vacíos legales– que posibilitara importar esta sustancia regulada desde los grandes mercados productores (China y la India), y “esconderla” en los vericuetos o subterfugios del mercado legal o regulado de estas drogas a través de una miríada de droguerías y farmacias. Finalmente, su contrabando y trasiego a los grandes centros de producción corría por los canales y metodologías usuales para otro tipo de narcóticos: camuflada de las más diversas formas.

En segundo término, no hay estructura normativa o productiva que pudiera pasar por alto distraídamente los exorbitantes volúmenes de efedrina que estaban siendo importados y que excedían miles de veces las necesidades de los resfríos anuales del país (principal utilización medicinal de la efedrina). Es decir, las organizaciones criminales encontraron en Argentina una estructura estatal y paraestatal que fue cómplice de esta actividad delictiva, convirtiendo, como hemos visto, a funcionarios policiales, judiciales, de inteligencia y políticos en verdaderos socios y colaboradores de estas actividades.

De modo que, probablemente, la combinación de estos dos factores transformó a la Argentina en un lugar elegible y apropiado en el mercado transnacional de drogas de síntesis a pesar de su lejanía tanto con el principal centro de producción (México), como de consumo (EEUU).

Sin la complicidad del Estado este negocio no hubiera podido prosperar en el lustro que funcionó, y durante el cual grandes organizaciones criminales hicieron ingentes ganancias. ¿Se hubiera podido evitar? La penetración del crimen organizado en la estructura estatal parece ser la norma y no la excepción, y cuanto más grande es el volumen del negocio y más grande la organización criminal, mayores son sus capacidades de cooptar complicidades en diversos organismos públicos. Aquí se ve patentemente la penetración en las organizaciones policiales, en los servicios de inteligencia y en los organismos políticos de aplicación. Es cierto que ha sido el Poder Judicial el que ha investigado y condenado las actividades ilícitas descritas en este trabajo. Con demoras, de manera desarticulada (decenas de causas por separado) y ciertamente sin contar con el contrafactual respecto a si lo que se ha descubierto y conjurado es realmente la estructura central del negocio, o si por el contrario sólo la punta del iceberg. Pero hay que decir que a priori el accionar judicial, con todas las faltas y defectos señalados, puede funcionar al menos, parcialmente quizá, como un anticuerpo o disuasivo de cara a futuros emprendimientos criminales de similares características.

Es importante resaltar que no fue el accionar policial o judicial el que en última instancia terminó con el negocio ilegal de efedrina examinado en este trabajo. Esto sucedió a partir de una serie de modificaciones normativas que mejoraron los controles y dificultaron enormemente las formas de triangulación ilegal o “paralegal” que se observaron en este mercado. Una vez más, como demuestran dos casos muy emblemáticos como los del alcohol y el tabaco (nicotina), no ha sido la guerra, la persecución y el prohibicionismo las que procuraron soluciones o minimizaron daños, sino la “regulación modulada” de las sustancias. Esto es, formas de regulación pública de los mercados de diferentes sustancias que permitan minimizar los daños que genera la producción, distribución y comercialización de estas en los mercados ilegales. Este encuadre paradigmático permite atender, en un marco estratégico y estructural, los efectos más deletéreos del narcotráfico, principalmente la violencia y la corrupción de agencias estatales, a la vez que se tiene más información y control para diseñar políticas públicas que atiendan la situación de aquellos que pueden tener un comportamiento problemático con esas sustancias. Como señalara el histórico militar y estratega chino Sun Tzu, “el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”.

(Dr. Juan Estanislao López Chorne - Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)

El caso Repsol-YPF (un caso que podría servir de guion a Buñuel, Berlanga, o Lynch)

- El regalo envenenado de Kirchner a la familia Eskenazi (El Mundo - **22/4/12**)

Se hicieron con el 25% de las acciones de YPF sin poner un dólar

El negocio “redondo” se puede volver ahora en su contra

(Por Nazaret Castro)

Hace cinco años, el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, convenció a Repsol, que poseía el 97% de las acciones de YPF, de la conveniencia de que entrase capital local en la petrolera argentina. Kirchner favoreció la entrada del Grupo Petersen, de la familia Esquenazi, que no tenía experiencia en el sector, pero sí una estrecha relación con el mandatario. La familia, originaria de Santa Cruz, la provincia que presidió Kirchner, había financiado la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada.

Ernesto Eskenazi y sus hijos debieron de pensar que hacían el negocio del siglo cuando firmaron un acuerdo para hacerse con el 25% de las acciones de YPF sin poner un dólar sobre la mesa. Kirchner convenció a Repsol de que financiase, a través de créditos, la compra de sus propias acciones por parte de los Eskenazi, que irían pagando su deuda a través de los dividendos que diese la compañía.

El acuerdo se selló en 2008, cuando el Grupo Petersen compró el 15% de las acciones; en 2011 se haría con otro 10%. En las dos operaciones, Repsol aportó unos 1.500 millones de euros, y la banca puso otros mil millones. Además, el trato incluía el compromiso de que Repsol YPF distribuiría en forma de dividendos un 90% de sus beneficios.

El arreglo funcionó para los Eskenazi mientras la relación fue buena con los Kirchner. Pero, tras la muerte de Néstor, y en paralelo con el descontento del Gobierno por la situación de déficit energético, las tornas cambiaron. Y el futuro no se presenta tan halagüeño para la familia Eskenazi.

El gobierno de Cristina Fernández sostiene que solo expropiará las acciones de Repsol, pero también ha anunciado que cambiará la política de dividendos, para que YPF realice inversiones que redunden en un aumento de la producción de petróleo y gas. La pregunta es, entonces, cómo pagará su deuda el Grupo Petersen, que para cumplir con sus acreedores depende de los dividendos. Solo a Repsol le debe 1.900 millones de dólares, según el presidente de la empresa, Antonio Brufau.

Algunos especulan ya con una probable suspensión de pagos por parte del Grupo Petersen. En 2008, la agencia Moody´s ya advirtió de que cualquier cambio en los términos el acuerdo -esto es, del compromiso de distribuir un 90% de los beneficios hasta que se pagase la deuda- redundaría “en una cesación de pagos bajo las condiciones del préstamo”.

¿Vuelta de Repsol a YPF?

Para complicar aún más las cosas, el acuerdo suscrito en 2008 obligaría a Repsol a recomprar las acciones de los Eskenazi en caso de que, como ha sucedido, la firma que preside Brufau dejase de ser accionista mayoritario de YPF. Esa cláusula estaba entre las facilidades crediticias que Repsol dio a los Eskenazi, a pedido de Kirchner. Y los Eskenazi ya han declarado que Repsol está obligada a comprar su participación en YPF.

La multinacional de origen español opone que no sea así, pues, según el acuerdo, esta cláusula no tendría que ser activada en caso de que Repsol dejase de ser el primer accionista por causa de fuerza mayor, como un desastre natural. Así que la batalla legal que está por venir en YPF -una de ellas- se centrará en demostrar si la expropiación puede considerarse causa de fuerza mayor.

Por el momento, Brufau ha declarado que los Eskenazi podrán cumplir con sus obligaciones de pago si consiguen vender su participación accionarial. El problema es que las acciones de la petrolera no dejan de desvalorizarse en los mercados.

Poco halagüeña para los Eskenazi parece la actitud del ministro de Planificación y nuevo interventor de YPF, Julio de Vido, para quien el futuro de la familia en la compañía está en el aire: “Veremos cuál es su actitud”, señaló. Para algunos analistas, la intención de la presidenta, al retirarle su trato de favor a los Eskenazi, sería beneficiar al empresario Cristóbal López, quien controla en el país el lucrativo negocio de los casinos.

- Argentina “recupera” YPF (Público.es - **16/4/12**)

La presidenta argentina, Cristina Fernández, declara de utilidad pública el 51% del patrimonio de la petrolera, controlada por la española Repsol. Kirchner dice que toma la medida para poner fin a “una política de vaciamiento”

Finalmente Argentina tomará el control de YPF al declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la petrolera, controlada mayoritariamente por la española Repsol. La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha hecho el anuncio en la televisión nacional, justificándola “a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos” del país.

De las acciones expropiadas, el 51% pasarán a estar bajo control del Estado nacional y el 49% restante se distribuirán entre las provincias. El título tres de la nueva norma alude a la “recuperación del control de YPF” y a la “expropiación” de la empresa, participada en la actualidad en un 57% por Repsol. “A efectos de garantizar el cumplimiento de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF”, asegura la norma.

Fernández enviará al Congreso el proyecto, según se anunció en un acto encabezado hoy por Fernández en la Casa Rosada. La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a “adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A. a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos”.

El proyecto incluye la “remoción de la totalidad de directores” de la compañía y pretende garantizar la “continuidad operativa”.

El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.

El proyecto incluye la “remoción de la totalidad de directores” de la compañía

El texto, en el que se indica que el poder Ejecutivo argentino actuará como “expropiante” de la empresa, será remitido este mismo lunes al Parlamento argentino. Una vez asumido el control de la empresa por parte del Estado, la transferencia de las acciones solo podrá realizarse mediante la “autorización honorable” del Congreso de la Nación, indica la norma. El día en que se apruebe la nacionalización, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina convocará una junta general de accionistas en la que se producirá la destitución de los actuales directivos de la empresa.

El Gobierno ha condenado hoy la decisión “arbitraria” de las autoridades argentinas y ha anunciado que adoptará medidas “claras y contundentes” en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas en el exterior.

Esta posición del Ejecutivo ha sido expuesta en una comparecencia ante los periodistas en el Ministerio de Asuntos Exteriores del titular de este departamento, José Manuel García Margallo; el de Industria, José Manuel Soria, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz.

Para el Ejecutivo español, según García Margallo, esta medida de las autoridades argentinas rompe el clima de cordialidad y amistad que ha presidido las relaciones entre ambos países. Por su parte, Soria ha señalado que se trata de una decisión hostil contra Repsol y, por tanto, contra España y contra el Gobierno español.

Desde el PP, María Dolores de Cospedal aseguró este lunes que el Gobierno dará “cumplida respuesta a esta situación” y que el Ejecutivo de Rajoy contará con el “apoyo” de los “socios comunitarios” y de los socios “a otros niveles”. La semana pasada, ante las primeras gestiones, el Gobierno español desplegó una intensa actividad diplomática. El ministro de exteriores convocó al embajador argentino y la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, advirtió que una acción contra Repsol sería considerada “una agresión” a España.

Tampoco ha tardado la reacción de los mercados. Tras el anuncio, las acciones de YPF caían un 18% en Wall Street y posteriormente la cotización fue suspendida tanto Nueva York como en Buenos Aires. El Ibex 35 ya había cerrado a la hora en que Cristina Fernández lo comunicaba.

Tras la lectura del texto, en el que los presentes han acompañado con aplausos y vítores la lectura de los artículos fundamentales de la norma, la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, se ha dirigido al país para defender su contenido.

YPF supone el 20% de los activos de Repsol y el 60% de su producción

“Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales, pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión”, afirmó Fernández de Kirchner. Tras la “desnacionalización” de YPF en 1998, afirmó, el país ha acabado convirtiéndose en “importador neto” de gas y petróleo, señaló, antes de aludir a la “desnacionalización” a finales de los años noventa como uno de los grandes “problemas” del país.

Fernández defendió la medida para poner fin a “una política de vaciamiento” de la petrolera. “De proseguir la política de vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales”, subrayó.

Para Repsol las consecuencias serán nefastas: YPF es la joya de la Corona: supone el 20% de sus activos y el 60% de su producción. En 2011 YPF supuso el 28% del resultado de explotación del grupo Repsol. Los expertos creen que la empresa española perdería 15.000 millones de euros. Pero los efectos irían mucho más allá: habría despidos y la economía española se resentiría aún más.

Pocos minutos después del anuncio, funcionarios del Gobierno argentino encabezados por el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, tomaron el control de la petrolera YPF y obligaron a abandonar la sede de la compañía a los directores ejecutivos españoles y argentinos.

Baratta, que hasta hoy era el único representante del Estado argentino en el directorio de YPF, se presentó con una lista de directores ejecutivos que, según el Gobierno, deben renunciar, y ordenó cambiar la seguridad del edificio, según fuentes de la petrolera consultadas por Efe.

El alto cargo ordenó a los ejecutivos, entre ellos el español Antonio Gomis, director general de Repsol en Argentina y adjunto a la vicepresidencia de YPF, que tomaran sus pertenencias personales y abandonaran el edificio, que permanece cerrado salvo para funcionarios argentinos.

- La expropiación de YPF: del “no va a costar nada” de Kicillof al actual juicio multimillonario en EEUU (infobae - **25/6/19**)

(Por Sebastián Catalano)

Antonio Brufau, el presidente de Repsol, seguramente pensó que se iba a manchar la corbata. Es muy probable, también, que haya insultado por lo bajo. Estaba en la principal sala de reuniones de la torre de YPF en Puerto Madero, negociando la expropiación de la petrolera que había manejado hasta hacía unos días y que el Estado argentino, gobernado por Cristina Fernández, había intervenido.

Le preocupaba su corbata porque el sorpresivo menú que había ordenado para el meeting Axel Kicillof -por entonces viceministro de Economía e interventor junto a Julio de Vido de la empresa- fue bondiola completa para todos los presentes. Mandó a su chofer a comprarlas en los carritos de abajo, en la Costanera. Los españoles de Repsol y los banqueros del JP Morgan, que había contratado la española para negociar los términos de su salida, degustaron el tradicional sándwich cómo pudieron. “Hubo chimichurri para todos y todas. Les gustó”, resume ahora alguien que estuvo presente en aquella reunión.

Incluso si no le gustó la bondiola o se manchó la corbata, Brufau quedó más que conforme. Luego de esa negociación de días, el Estado le pagó a Repsol USD 4.000 millones en bonos -más del doble con intereses, según algunas fuentes- por el 51% de la empresa que fue “argentinizada” con la aprobación del Congreso. Haber dejado afuera de la negociación a los inversores minoritarios terminó, siete años después, como argumento central del juicio en el que ayer la Corte Suprema de EEUU rechazó un recurso de jurisdicción que habían interpuesto los abogados argentinos. Una suerte de “manotazo de ahogado”, luego de dos fallos en contra. Ahora la demanda comenzará formalmente y el Estado nacional podría tener que pagar hasta USD 3.000 millones.

¿Salvar a Vaca Muerta?

El proyecto que Cristina Kirchner presentó en el salón Juana Azurduy de la Casa Rosada, el 16 de abril de 2012, llevó el nombre de “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. “No es de estatización sino de recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos”, dijo la presidenta acompañada de su vice, el hoy detenido Amado Boudou, todo su gabinete y los pasillos y patios colmados de militantes.

Al otro día, Clarín tituló: “La Presidenta intervino la empresa y nombró al frente a De Vido y Kicillof” y “Repsol considera “ilícita” la expropiación de YPF y anuncia medidas legales”. Página 12, en tanto, celebró: “Volvió YPF”. Acompañó la imagen una bandera en primer plano y, atrás, la presidente.

¿De quién fue la idea de la expropiación? “Salió de Economía, del equipo de Kicillof. Él se lo propuso a la presidente, que miró los números, tanto del potencial petrolero como de la falta de inversión de Repsol, y aceptó”, asegura otra fuente que participó de la operación.

“Se discutió mucho. Repsol quería vender Vaca Muerta para financiarse en Medio Oriente. Podía hacerlo, pero nos hacía un agujero. Por eso se tomó la decisión. El Tribunal de Tasaciones aprobó; la AGN lo mismo, todos los informes fueron positivos. La oposición dice que la pagamos caro y la justicia de EEUU, barato”, asegura Emanuel Álvarez Agis, por entonces subsecretario de Programación macroeconómica e interventor del downstream de YPF, o sea del negocio de venta al público.

“Si no hubiésemos hecho esto, Techint no estaría haciendo lo que hace hoy en Vaca Muerta. La YPF estatal hizo la inversión de riesgo: hoy se explora gracias a esa operación que hicimos”, asegura el economista que recuerda esos días de 2012 como “horribles, de mucho trabajo y negociación, dos meses enteros discutiendo bonos, colaterales y precios”.

La trampa del oso

Hoy, los demandantes sostienen que al momento de la estatización no se cumplió con los estatutos de la compañía, según los cuales quien se quedara con el 51% debía hacerle una oferta al resto de los socios. Por entonces, a los gritos en el Senado, Kicillof daba sus argumentos: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a USD 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Fue el 17 de abril de 2012 en Salón Azul del Senado en la reunión Plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Minería y Energía en la que el kirchnerismo defendió la expropiación. Lo acompañó De Vido, su “jefe” en YPF.

Si bien la leyenda urbana asegura que el ex ministro y hoy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires se habría ufanado en esos días -tanto en público como en privado- de que la expropiación no iba a costar un peso, él se encargó de desmentirlo varias veces (Kicillof no respondió los llamados de Infobae para esta nota).

“El valor lo va a determinar el tribunal de tasación, y ese va a ser el valor que corresponde. Después, Antonio Brufau puede reclamar donde quiera, denunciarlo ante el Banco Mundial, el FMI, el FBI o la CIA. Si quiere, que recorra los tribunales de España presentando la denuncia y quizá le vaya mejor que a los directores de Marsans, la empresa de turismo que vació Aerolíneas Argentinas, que terminaron con pedido de prisión en su propio país. Allá les fue peor que acá”, dijo Kicillof en una entrevista a la TV Pública.

“Axel nunca dijo “no vamos a pagar un dólar”. Siempre se habló de pagar lo que indicaba el Tribunal, y eso se hizo”, afirma Álvarez Agis.

“Recuerdo la soberbia de Kicillof de esos días: con el dedo decía que no iba a pagar un solo peso. Le pagamos a Repsol y ahora vamos a tener que volver a pagar”, refuta la ex senadora María Eugenia Estenssoro.

“En 1999 me opuse a la extranjerización de YPF; mi postura siempre fue igual, a diferencia de los Kirchner. Lo de 2012 fue una confiscación, en rigor. Terminamos pagando en títulos de la deuda unos USD 8.900 millones, con los intereses, por una empresa que valía USD 6.000 millones. Y se dejaron hilos sueltos. Estaba de acuerdo que tenía que ser argentina, pero no pude votar eso. Hoy discuto con las autoridades de YPF que además del planteo de jurisdicción de estos cuatro años, que era evidente que no se la iban a dar, había que haber hecho las denuncias por cuestiones de corrupción, tienen que ser querellantes activos”, argumenta Estenssoro.

“Repsol arrancó pidiendo USD 10.000 millones. La cuenta fue beneficiosa para el país. La oferta pública no se debió haber hecho para todos porque recuperamos la mitad de la empresa, no toda. No fue una decisión a tontas y locas. Lo que pasa es que la Justicia de EEUU permite que Elliot Management haga lo que hizo (por los holdouts) y que Burford litigue ahora. Y en 2012 no estaba el antecedente de Griesa. Esto que pasó hoy, en 2012 era impensado”, agregó Álvarez Agis.

Las crónicas del día después describen cómo las acciones de YPF en Wall Street pasaron de subir 7% a desbarrancarse casi un 19 por ciento cuando habló Cristina.

No solo eso, hay otros detalles. “Mientras la Presidente promediaba su discurso, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, se presentó en la sede central de YPF, en Puerto Madero, con el decreto de intervención y un listado de las personas que deberían abandonar el edificio en 15 minutos”, detalló el artículo de tapa de Página 12. ¿Al funcionario, hoy preso como su jefe De Vido, lo habrá acercado a Puerto Madero su chofer, Oscar Centeno, el mismo que escribió los cuadernos de la corrupción?

**Cuando la realidad supera a la ficción (I): la muy “Hija” de Puta, y su Madre (Patria)**

Los periodistas argentinos más comprometidos han descubierto, hace algunos años, un nuevo vehículo con el que poder transitar por las autopistas de la información sin necesidad de ser asesinados o “desaparecidos”. Ese vehículo no es otro que la novela negra con tintes sociopolíticos, una novela de denuncia en la que vierten todo aquello que les está prohibido decir en sus periódicos ya sea porque no tienen las pruebas necesarias para ello o porque, como en gran parte de los países del mundo -la Argentina no es una excepción- los medios de comunicación dominantes no son otra cosa más que una extensión del mismo poder corrupto al que buscan denunciar. Jorge Fernández Díaz es uno de estos periodistas de investigación que juega con la ficción para aproximarse a la realidad.

Una novela (¿histórica?) sobre dos “narcopaíses”: Remil es un viejo soldado (“hijo de remil putas”, le llamaban), excombatiente de las Malvinas que trabaja para el coronel Cálgaris en La Casita, uno de los departamentos más confidenciales de los servicios secretos argentinos y que no aparece en ningún mapa. Su moral es elástica y su ética se detiene allí donde lo ordena su jefe, como todo en La Casita, un lugar donde la ley es ambigua, impera el juego sucio, y donde todo vale para conseguir información con el objetivo de manejar a políticos, jueces, empresarios, actores o futbolistas. Él es el soldado perfecto, un héroe infame, como se llama a sí mismo, que se verá envuelto en una trama inédita de corrupción que afecta a las más altas esferas de la casa Rosada y traspasa las fronteras del país. “Así que eso somos, amigos. Ni héroes de corazón puro ni héroes cansados. Solo somos héroes infames. Aventureros sin moral en los desagües de este país lleno de gente honesta y desinteresada”. Cuando Remil recibe la orden de proteger a Nuria Menéndez Lugo, una abogada española que ha llegado a Argentina para hacer negocios y que está especialmente interesada en el sector vitivinícola del país, empieza su descenso a un infierno de violencia, manipulación y engaño. Porque “en esa foto personal e imaginaria, la dama blanca viste de negro y tiene las facciones duras y a la vez sensuales. Parece una asesina a sueldo, pero en realidad es una emperatriz provista de un puñal. Y resulta que ese puñal vengo a ser yo”. También es un camino hacia una atracción prohibida e imposible, la que siente por su esquiva y tiránica jefa, que acabará jugando en su contra y le llevará hasta el final de una historia que ni siquiera es la suya.

A través de estos personajes discurre la trama de corrupción política en la que todo está permitido, con la única finalidad de acumular el mayor poder político y amasar fortunas saltándose todas las reglas de juego. Para ellos, a decir de Remil, el personaje principal de esta novela, “más vale vivir cinco días como rey que treinta como buey”, siguiendo la lógica del saqueo rápido, cueste lo que cueste. Nuestro violento personaje se queda reducido cuando lo comparamos con aquellos que realmente corrompen a la sociedad desde el poder y a quienes pocas veces se puede tumbar: “A estos caciques los derriban los jueces o las enfermedades. Nadie más. Y te diría que los jueces son menos efectivos que las coronarias”.

De esto va “El puñal”: de narcotráfico a gran escala, narcotráfico impulsado y permitido desde las áreas de decisión política. De la corrupción y de la impunidad ante el delito que hace expresarse así a Leandro Cálgaris, el ficticio jefe de los servicios de inteligencia: “¡Salud! ¡Salud, colega, por este arriesgado oficio que hemos elegido y porque todos se vayan a tomar por el culo!”.

- Jorge Fernández Díaz: “La política es novela negra. Cuestión de gánsteres” (El País - **8/12/15**)

El escritor y periodista argentino pone luz sobre la mafia que ha convertido su país en uno de los grandes exportadores de coca. Lo resuelve con ficción

Con esa pasión asombrada, Jorge Fernández Díaz, no confundir con el ministro español, ha narrado historias del sentimiento y de la política argentina en libros que hacen fortuna en su país. Lo leen también en La Nación, de la que es subdirector, y lo escuchan en un programa de radio que combina información con vida cotidiana, pasión e inteligencia. Ahora es autor de una novela política, El puñal (Destino), de la que su colega español Arturo Pérez-Reverte, que presentó su libro anteayer en Madrid, ha dicho: “Dura, negra, violenta, desencantada y apasionante novela. Es tan argentina que estremece”. Jorge dice que es como la política de su país: “una novela negra”.

Pregunta. ¿El puñal puede ser un instrumento para entender la Argentina K de Kirchner, y ahora la Argentina M de Macri?

Respuesta. Es un instrumento para entender cómo la política en mi país se volvió gansteril. La política, allí y tal vez también aquí, es una novela negra. Una cuestión de gánsteres apoderándose del poder, de toma y daca territorial y financiero, y de acuerdos espurios. Manhattan para los Tattaglia y Brooklyn para los Pizzi. He querido con esta novela desvestir la política y el amor. Cuando uno desviste la política, le quita el ropaje biempensante, las promesas de campaña, lo que queda es esta mafia de camisa y corbata. En la Argentina hay un agravante, que se está convirtiendo en un actor decisivo: el narcotráfico.

P. ¿Y qué pasa con el amor?

R. Cuando desvestís al amor, sus grandes palabras, lo que queda es una pasión turbia, siempre pendiente de cosas misteriosas que no podemos dominar. Un filo resbaloso y cortante, plagado de incertidumbre. Porque si no hay incertidumbre no hay deseo, sólo la paz de los camposantos. Escogí dos personajes: uno es un agente de inteligencia, que se dedica a los chanchullos menores de los políticos, hasta que le piden investigar a una abogada española que se instala en Buenos Aires para hacer un negocio peligroso. Ese agente empieza a espiarla, a obsesionarse; desarrolla con ella una pasión salvaje. Nunca pronuncian la palabra amor, porque es una pasión entre dos samuráis, dos personas solitarias y crueles. Nuria es una mujer ambiciosa y despiadada, capaz de cualquier cosa para lograr sus objetivos, y entiende el amor como un modo de someter al hombre y de usarlo para sus fines. Y entiende la política como un negocio sin leyes ni moral. Juntos desarrollan un sofisticado negocio de exportación de cocaína. La Argentina es uno los principales exportadores de cocaína del mundo; mucha de la droga que viene a Europa parte desde Buenos Aires y desde otras ciudades del país. Para que eso ocurra se necesitan organizaciones muy refinadas. No se trata de cárteles sino de negocios que se cierran en los restaurantes de Puerto Madero, o en lugares glamurosos de Madrid. El puñal cuenta la trastienda de todo eso.

P. ¿Eso es ficción o realidad?

R. Es ficción y es realidad. Busqué siempre equivalentes ficcionales a lo que existe y está documentado. Es, en ese sentido, una ficción, y además una novela negra, una novela de misión, de aventuras y de espionaje, pero a la vez es la reconstrucción, el fresco de toda esa parte oscura de la política y del narcotráfico que nunca se ve. El narcotráfico de guante blanco.

P. ¿Y cómo sobrevive la política a esta realidad?

R. El financiamiento de los partidos es algo todavía oscuro pendiente de ser democratizado. Existe una idea de que hay que “robar para la corona”, es decir: queremos cambiar el mundo, “recaudemos” como sea para hacerlo, y es entonces cuando se empiezan a hacer los chanchullos. Ese es el punto de partida del sistema de corrupción. ¿Por qué no estalla? Lamentablemente, mientras la economía marcha bien se le perdona al político la corrupción. Por lo menos así ocurre en mi país, y puede llegar a suceder también en Europa si continúa la crisis.

P. ¿Y esta novela trata sobre la década kirchnerista o va más atrás?

R. No, se extiende hacia atrás y hacia delante. Pero te admito que la última década hubo un paroxismo de los negocios sucios. Acá hay dos frases que pronunciaron referentes del menemismo (neoliberal) y del kirchnerismo (nacionalista), respectivamente. Los primeros decían que había que “robar para la corona” y los segundos, “hay que hacer dinero para hacer política”. Los mensajes habilitaron desde la cumbre del poder las malas prácticas, formaron una cultura de la corrupción. Es imposible que el narcotráfico avance sin la anuencia de funcionarios, jueces y policías y gendarmes corrompidos que cobran protección en especies. Luego venden esa cocaína en el mercado interno, por eso se abarató y somos uno de los países con mayor consumo en América latina. ¿Cuál es la culpa del kirchnerismo? Que nunca le dio prioridad a la lucha contra el narcotráfico, y eso les hizo perder las elecciones en Buenos Aires hace exactamente un mes. Hay un clamor popular porque alguien haga algo, y el kirchnerismo no hacía nada.

¿Cuál es la culpa del kirchnerismo? Que nunca le dio prioridad a la lucha contra el narcotráfico

P. Pero El puñal es también una novela de espías.

R. Sí, muestra cómo en la Argentina el servicio de inteligencia se dedica a espiar a políticos, empresarios y periodistas, a acompañar a los narcos o la delincuencia, y a corromper jueces. Lo retraté sin saber que todos esos manejos oscuros iban a emerger a la primera plana de los periódicos, como sucedió con la todavía inexplicada y sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman. El puñal ya era un éxito, pero cuando murió Nisman, muchos fueron a releer el libro para comprender el submundo que rodea ese crimen.

P. ¿Qué dificultades ha tenido para convertir todo esto en una ficción? Porque ha contado también una historia de amor…

R. Cuando yo tenía 15 años, leí Goldfinger de Fleming, autor que fue despreciado hasta que de repente empezó a ser releído por Martin Amis, Boyd, Javier Marías y Pérez-Reverte. Mucho antes de eso, cuando Fleming era Pulp Fiction, yo quería escribir una novela de espionaje y amor turbulento. Por supuesto, fracasé. Porque yo no conocía ni la política ni a los servicios, y del amor sabía muy poco. Recién hace tres años me sentí preparado, con la mochila llena y la experiencia necesaria. He escrito 12 libros, me dije, puedo volver a intentar aquella novela imposible. Mi idea inicial no era escribir una novela negra, aunque adoro el género y también lo critico: últimamente casi todas son iguales, hay un crimen, acude un inspector, ponen las cintas amarillas, llega la científica... Yo me propuse, en cambio, escribir una de espionaje, sin tener consciencia de que los agentes de la Argentina se dedican a la política, y que ésta llena de mafiosos. Finalmente, termino haciendo una novela más parecida a El padrino que a Golfinger. Un thriller político y gansteril, que es un fresco de la sociedad en la que vivo; y también una historia pasional entre un hombre y una mujer.

- Cocaína y Gioconda (El País - **8/12/15**)

Novela política y novela negra, “El puñal” bascula sobre el énfasis sexual en la relación entre el guardaespaldas y la autoridad

(Por Justo Navarro)

Imaginemos a la policía y la política como organizaciones mafiosas: estamos en el mundo de El puñal, de Jorge Fernández Díaz (Buenos Aires, 1960). “Tengo muchos nombres, pero en el trabajo me conocen como Remil”, se identifica el narrador. “Hijo de remil putas” lo llamaba el sargento que le salvó la vida en las Malvinas, donde Remil acabó con un tiro en la barriga y fue un héroe. Si porque es negro no lo miran bien los porteros de discoteca, lo dejan pasar en cuanto lo miran dos veces. Puede ser peor que los malos. Del hospital psiquiátrico militar saltó a los servicios especiales del Estado, a un sótano tan secreto que ni siquiera existe.

Y entonces la organización necesita fondos y el héroe se ve protegiendo a algo parecido a la Gioconda: una abogada española, impresionante presencia acorazada, vicaria de un holding exportador. El género que mejor describe la política argentina es la novela negra, dice Jorge Fernández Díaz, que, periodista principal, sabe de las dos cosas y ha fabulado una agilísima trama de juristas prestigiosos, altos funcionarios, senadoras, delincuentes idolatrados por sus votantes, cocaína diluida en vino argentino para Europa, narcopolítica y cocacapitalismo. Policía y política tienen que financiarse para mantenerse, explica didácticamente el periodista. Cuando se goza de poder e inmunidad, por la patria se hace lo que sea: “No se puede cambiar el mundo sin ensuciarse las manos”.

Novela política y novela negra, El puñal bascula sobre un motivo popular literario-cinematográfico: el énfasis sexual en la relación entre el guardaespaldas y la autoridad a la que debe proteger, amante además del jefe supremo. Y de pronto roban la Gioconda. La mezcla de deber y deseo explota, desata los acontecimientos. “El amor es una droga psicosomática”, dice uno de los personajes, y la historia se dispara en un movimiento de ascenso y caída y vuelo de resurrección hacia el desenlace en España. Le retiran la pistola al héroe, lo dejan sin patria ni patrón, proscrito, seducido y abandonado, acosado, tiroteado, herido en un suburbio de momias y zombis, disparando un Kalashnikov en nocturna batalla campal contra el ejército del demonio.

El puñal cumple con rotundidad la norma básica de la novela negra: el investigador no analiza un crimen ya producido, sino que con sus movimientos desencadena una avalancha de acciones criminales. Remil va contando lo que sucede en acuciante presente, entre la ironía o el desapego y la incredulidad hacia sus propios sentimientos, y el público lector quisiera adelantarse, ver ya lo que pasa. Los actores del drama son perfectos, desde los podridos rateros suburbiales a los corruptos próceres patrios y al patrón paternal de Remil, el magnífico coronel Cálgaris, anciano aficionado al whisky, la pipa, el arte, el jazz y la navegación a vela, reencarnación quizá de aquel doctor Caligari que asesinaba manejando a un sonámbulo.

(El puñal. Jorge Fernández Díaz. Destino. Barcelona, 2015. 446 páginas, 19,00 euros)

**Cuando la realidad supera a la ficción (II): y la “reputa” Madre (Patria)… que la parió**

(De “El puñal”, al “submarino”, median 5 años. Pero en los “narcopaíses”, todo permanece)

- Galicia, la gran filial de la coca colombiana: lanchas de 18 metros desde el Atlántico hasta las rías (El Español - **6/9/20**)

La sobreproducción en origen, ha reverdecido el negocio del narco en tierras gallegas. Bandas de lancheros pontevedreses vuelven a trabajar para los cárteles latinoamericanos.

(Por Andros Lozano)

El pontevedrés Juan Carlos Santórum, de 40 años, casado y con dos hijos, acababa de desayunar dos cafés y un bocadillo de jamón en su casa de Vilanova de Arousa cuando supo que en la calle había dispuesto un operativo policial para detenerle. Un coche camuflado estaba aparcado a unos 50 metros de su chalet de tres plantas con la fachada pintada de salmón ceniza y las esquinas del inmueble reforzadas con robustas piedras.

Santórum, que no tenía por qué saberlo pero que conocía la información -habría recibido un soplo de un funcionario de Aduanas-, no dudó en huir. Vestido con vaqueros y camisa, se puso una chupa negra de piel y se montó en la Yamaha Tmax que guardaba en el garaje. Había comprado tres iguales.

Tras accionar el mecanismo de apertura del portón, apretó a fondo el puño del acelerador de su moto. El policía que estaba dentro del coche aguardando indicaciones de sus mandos no pudo evitar la fuga de Santórum. El agente intentó cortarle el paso, pero tuvo el reflejo instintivo de percatarse de que podría matarle si ambos vehículos colisionaban. Por eso aminoró la velocidad. Para evitar un drama.

Desde su coche, el agente, del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), vio cómo una de las presas más buscadas dentro de las estructuras del narcotráfico gallego actual se esfumaba escondida debajo de un casco oscuro de motorista.

La fuga de Juan Carlos Santórum sucedió en torno a las 10 de la mañana del 28 de abril de 2020. España vivía confinada. Desde entonces, el presunto narcotraficante continúa huido. Van ya cinco meses. Algunos dicen que está en Brasil. Otros, que se ha bajado al sur de España, donde tiene contactos en el mundo del hampa. Alguien susurra que nunca se movió de su tierra natal, donde se le protege y se le da cobertura para evitar su detención.

Si lo arrestan irá directo a prisión: sobre él pesa una orden de busca y captura para cumplir una condena de dos años de cárcel por recibir información de manos de dos guardias civiles acerca de diversas investigaciones (al menos cinco se frustraron) y fichas con información personal de compañeros en el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Pontevedra y del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) en Galicia. El fallo judicial deja claro que toda esa información no era para él y sí para alguien muy por encima suyo en el negocio de la cocaína.

Algunas de las fuerzas policiales consultadas sostienen que Santórum es el lanchero que debía acudir a alta mar a recoger los 3.050 kilos de cocaína que trasladaba el semisumergible que el 24 de noviembre del año pasado acabó hundiéndose a unos metros de la orilla de una playa gallega, en la ría de Aldán.

Se convirtió en el primer submarino cargado de “polvo blanco” que se incautaba en Europa. A bordo iban un gallego y dos ecuatorianos. El batiscafo partió desde Macapá, una ciudad de la costa noroccidental de Brasil. La droga llegó hasta allí desde la selva colombiana a través del Amazonas.

También señalan a Santórum como el hombre que debía llevar hasta tierra, junto a otras personas y en potentes embarcaciones, los 4.500 kilos que trasladaba en su vientre el Karar, un buque intervenido a 300 millas de la costa gallega el mismo día que el lanchero se esfumó.

Pero lo que realmente evidencia la huida de Santórum y esas dos incautaciones de cocaína es que la vía Colombia-Rías Baixas ha vuelto a reactivarse notablemente, según todas las fuentes consultadas por este reportero, desde fuerzas policiales a Agencia Tributaria y Fiscalía.

Tras unos años en los que la mayor parte de las incautaciones en Galicia llegaban mediante contenedores que tocaban puerto o a través de fardos balizados y lanzados al mar que después recogen pequeños barcos pesqueros o de recreo, desde 2018, y principalmente en 2019 y lo que va de 2020, pilotos como Santórum, al que se le dibuja como el heredero del histórico lanchero Sito Miñanco, han reverdecido un negocio que nunca se marchó de la serpenteante costa pontevedresa. Otros elevan a Santórum a jefe de una potente organización de narcolancheros, iguales, al menos, a otras tres con el mismo poder y también en la ría de Arousa.

“Sin duda hay una reactivación de la vía marítima”, explica Jaime Gayá, jefe de Aduanas en Galicia. “Como hay tanta producción en origen, principalmente en Colombia tras la caída de las FARC, los cárteles están reactivando la vía marítima gallega, que prácticamente tenían desaparecida entre 2010 y 2016-17. Lancheros siempre ha habido en Galicia, la clave es que les llamen o no les llamen. Parece que ahora eso sí está sucediendo”.

Aprovechando la efervescencia que vive la zona, EL ESPAÑOL viajó a Pontevedra a finales del mes de agosto para tomar el pulso actual del tráfico de cocaína en Galicia. Los narcos pontevedreses, tras años alejados de un papel destacado en el entramado internacional del tráfico de “dama blanca”, ahora ocupan una posición principal. Pero en lugares como Cambados, Vilanova, Vilagarcía de Arousa y la Isla de Arousa todo es silencio. Se palpa que sigue vigente la omertá. Al más puro estilo siciliano.

No es descabellado pensar que la mitad de la cocaína que llega en estos días a España entra por Galicia. Incluso algo más. Y que sólo se intercepte uno de cada tres o cuatro kilos que se envía desde Latinoamérica. Si en 2019 se incautaron 15 toneladas, una simple regla de tres dice que el año pasado se introdujeron entre 45.000 y 60.000 kilos. Cada uno, a un precio que oscila entre los 28.000 y los 33.000 euros, en función de la oferta, aunque el precio del gramo desde hace dos décadas sigue anclado en la calle en 50 euros.

“La asociación de narcotransportistas que encabeza Santórum pone de manifiesto que el escenario en el que se está desarrollando el narcotráfico actual en Galicia es ese, las Rías Baixas. Utilizan la ventaja operativa de la orografía de la zona, con múltiples recovecos. Vuelve a haber organizaciones gallegas especializadas en el narcotransporte y en la introducción en tierra del alijo”, explica a EL ESPAÑOL Pablo Varela, fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra y quien concentra la mayoría de procedimientos de narcotráfico investigados en las Rías Baixas desde 2017.

“El narcosubmarino, que en realidad era un semisumergible, fue una bofetada de realidad”, añade Varela. “Nos mostró cuál era la verdadera dimensión actual de las organizaciones del narcotráfico en las rías. Además, nada apunta a que fuera la primera vez que se usaba este tipo de embarcaciones. Al contrario, su intervención sólo nos confirma lo que ya intuíamos, que no sólo parten de Colombia hacia el norte de México o hacia EEUU. También llegan a Europa”.

La industria gallega del narco

“Esta lancha iba a ser un monstruo marino”, dice un agente del GRECO de Galicia mientras caminamos por una nave de la que no se puede decir su ubicación, más allá de que se encuentra en Pontevedra. Al fotógrafo y a mí nos acompañan otros dos miembros de este grupo de élite de la Policía Nacional. De repente, entre cajas apiladas que lo ocultan, emerge el molde de lo que pretendía ser una embarcación de 18 metros de eslora.

Sí. Un monstruo marino, en efecto. Impresiona verlo de cerca. El GRECO se la arrebató al clan de los Santórum en abril pasado. Una vez recubierto el molde de fibra, la base iba a tener una capacidad de 10.000 litros de combustible y una capacidad de carga de varias toneladas. Se le iban a instalar tres o cuatro motores de gran potencia.

“Los narcos tienen ingenieros que saben fabricar las lanchas. Estos bichos se cruzan el océano de parte a parte. Pueden ir a recoger una mercancía hasta donde quieran”, explica el jefe del grupo.

“El molde les iba a servir para producir en cadena. Necesito una, una que hago. Dos, pues dos. Esto nos hace pensar que el dinero está fluyendo de nuevo en la zona. El negocio está muy activo. Una inversión así no es de unos cientos o miles de euros”, puntualiza un miembro del GRECO.

Sólo la Patoca, la planeadora incautada en 2009 al difunto Manuel Abal Feijóo, apodado Patoco, tenía unas dimensiones similares. Él sí era el heredero del gran capo Miñanco, pero un accidente de moto en el casco urbano de su pueblo supuso su final. Paradojas de la vida: él, un Fitipaldi de la náutica.

En Galicia, donde en los años 80 y 90 hicieron fortuna los Miñanco, Charlín y Oubiña, apellidos históricos del tráfico de cocaína, existe una notable tradición de astilleros que trabajan para el narco. En España, desde 2018 está prohibida la compra de lanchas sin autorización previa.

Desde entonces, los traficantes gallegos están instalando sus propios talleres sólo unos kilómetros más al sur, al otro lado de a raia, en territorio portugués. “Son tan buenos mecánicos los gallegos que los narcos del sur se suben hasta esta zona para que les monten las gomas”, dice una fuente de la lucha contra el narco en Galicia.

Un año récord

Durante los últimos cuatro años se han superado las diez toneladas de cocaína incautadas en Galicia, un hito en la lucha contra el narcotráfico en la región. En 2017 fueron 12 de las casi 41 que se decomisaron en España (29%), frente a las 6,2 de 2016.

Al año siguiente, en 2018, fueron otras 12 toneladas más. En 2019 fueron 15: casi una de cada tres que llegaron al país (48,5). En lo que va de este 2020, pandemia incluida, ya se han superado los ocho mil kilos.

Pese a todo, la vía principal de entrada de coca a Europa es a través de contenedores que llegan a países del norte del continente. El año pasado, sólo en el puerto de Amberes se incautaron 60 toneladas. Sin embargo, los expertos advierten que Galicia se ha vuelto a convertir en un lugar predilecto de los cárteles colombianos para hacer llegar su cocaína al viejo continente.

“El narcosubmarino (noviembre de 2019) fue la llamada de atención de que esto estaba reactivándose”, explica Jaime Gayá, de Aduanas. “En lo que llevamos de año, si incluimos la vía marítima y aunque el alijo no haya llegado a costa porque lo hayamos intervenido en el mar, sobre la mitad de la cocaína que se ha incautado en España ha entrado por Galicia. Incluso puede que más”.

El piloto enllagado

El 25 de octubre de 2019, Agustín Álvarez, un vigués de 29 años, se subió a un avión en el aeropuerto de Barajas (Madrid) con destino a Brasil. Semanas antes se había sacado su último título de navegación, el de patrón de yate.

No fue un viaje de placer. Tenía una misión: cruzar de costa a costa el océano Atlántico, unos 6.000 kilómetros, en un semisumergible de 21,5 metros de eslora con 3.500 kilos de cocaína en su interior. Iría acompañado de dos ecuatorianos (notarios de la operación), Pedro Roberto Delgado (1975) y Luis Tomás Benítez (1977). Agustín haría de piloto de la embarcación, construida ex profeso. Llevaba instalado un motor nuevo de 2.000 caballos.

El joven cobró 90.000 euros por adelantado. Los funcionarios policiales entienden que en algún punto del Atlántico se tendría que haber hecho el trasvase a varias lanchas que transportarían después la droga hasta las Rías Baixas. Las embarcaciones pertenecerían al clan de Juan Carlos Santórum, el presunto lanchero que se encuentra en busca y captura.

Tras varios días recibiendo coordenadas distintas de la organización para entregar la mercancía sin que nadie apareciese, Agustín, exboxeador amateur, un tipo duro, valiente, decidió continuar a bordo del submarino hasta Galicia. En total, la travesía duró 25 días. Fueron jornadas agónicas. Durmieron sobre catres de madera y encima de los 153 fardos que llevaban a bordo.

Al décimo día surgió el primer problema mecánico. Los dos tubos que salían de popa para inyectar aire en el motor se estropearon. El aire del submarino se tornó irrespirable. Incapaces de arreglar la avería, los tres tripulantes se vieron obligados a ir abriendo la escotilla unas horas cada día para ventilar la nave hasta llegar a tierra. También se les rompió el depósito del aceite, que empapó la embarcación y algunos fardos.

A unos metros de llegar a la playa de Hío, perteneciente a Aldán (Cangas de Morrazo), Agustín hundió el semisumergible. Los dos ecuatorianos y el gallego se lanzaron al mar con trajes de neopreno. Agustín tuvo que ayudarles a llegar a la orilla porque apenas sabían nadar. Consiguió esconderse durante cinco días en una casa de madera a las afueras del pueblo, en la parte alta. Lo conocía porque su abuelo tenía una casa allí y él, de crío, había pasado muchos veranos en la zona.

Durante ese tiempo bebió agua de lluvia y sólo ingirió una naranja como alimento sólido. A los ecuatorianos se les apresó el mismo día de la intervención del semisumergible, que fue detectado por el servicio de inteligencia de Inglaterra y la DEA (la Administración para el Control de Drogas dependiente del Departamento de Justicia de EEUU). Sin embargo, en torno a una semana antes, la Guardia Civil, instructora policial de la causa, tenía constancia del envío de un batiscafo hasta Galicia.

Cuando los agentes del GRECO encontraron a Agustín, el joven vigués seguía con el traje de neopreno puesto. Ya en comisaría se le prestó atención médica en presencia de varios policías. Tenía llagas por medio cuerpo. También varias picaduras de mosquitos que le supuraban.

“La realidad es que las organizaciones actuales han sabido modernizarse y, por tanto, adecuar el sistema de funcionamiento de los años 80 y 90, donde tenían mayor pujanza, a las necesidades del siglo XXI”, admite el fiscal Pablo Varela.

En cuanto a la sobreproducción que existe en Colombia, de donde probablemente partió la mercancía del batiscafo, Varela relaciona este hecho con la lucha de poder que existe entre los distintos cárteles por los territorios que hasta hace unos años controlaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que en agosto de 2017 terminó de desmilitarizarse. Una de sus vías de financiación era el narcotráfico.

Ese año, precisamente, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), señaló que se había incrementado un 17% el número de hectáreas sembradas en el país. La extensión total creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño agregado de estos cultivos.

“Cuando se desmembra el control de una parte del territorio donde se instalaban los laboratorios clandestinos, hay una producción en stock a la que hay que dar salida”, sostiene el fiscal. “Eso puede explicar la entrada en Galicia de mayor volumen de cocaína, como hemos visto este último tiempo. Pero también implica de cara a futuro que el control sobre esos laboratorios se altere, y donde antes había una dirección única, pues ahora hay distintos agentes que concurren, compiten y alteran los sistemas de producción. Eso determina que haya más vías de suministro, más gente dispuesta a ofrecer por distintos canales”.

- ¿Es posible hacerse una idea aproximada de la cantidad de cocaína que entra a España por Galicia en la actualidad?- pregunta el reportero al fiscal Pablo Varela.

- Seguro que triplica o cuadruplica la cantidad de sustancia incautada, como mínimo. Sólo uno de cada tres o cuatro kilos que entra es lo que se incauta. Es lo razonable. Pero no hay posibilidad de saberlo con certeza. No hay parámetros para llegar a una conclusión matemática. Lo que hay que valorarlo es en función de parámetros objetivables, como el valor del cargamento incautado y su coste para la organización que la envía y para el que la recepciona.

- ¿Qué panorama se dibuja en Galicia a corto y medio plazo a su juicio?

- Si vemos lo que pasó desde noviembre hasta aquí, lo que creemos es que a mejor no vamos a ir. También tenemos que entender una cosa: este tipo de operaciones, como la del Karar o el narcosubmarino, han infligido un daño innegable a estas organizaciones.

“Non xove, danme de comer”

Entre las casi 30 detenciones que se produjeron el día que se intervino el buque Karar estaba la de Ricardo Santórum, hermano de Juan Carlos Santórum. Desde comisaría, Santiago llamó a casa para contar cómo estaba. En un gallego cerrado, típico de la ría de Aorusa, el vilanovés dijo: "Ben, aquí ben, non chove, danme de comer… Ben, ben”.

De aquella llamada ha pasado ya casi medio año. Mientras, su Juan Carlos sigue sin aparecer. Antes siempre se le solía ver yendo junto a su cuñado Emilio en una Citroën Berlingo gris o en un Peugeot 307 negro de su padre. Nada de alardes ni excesos. Ahora pocos saben dónde está. El lanchero más buscado se ha vuelto un fantasma.

**Così fan tutte: (España o Argentina, tanto monta monta tanto): las elites parasitarias necesitan de los gobiernos corruptos para prosperar y perdurar. Los políticos corruptos, necesitan de la colaboración inestimable del empresariado cleptocrático, para mantener a la ciudadanía empobrecida, dócil, aletargada, y manipulada por una prensa dócil. Objetivo: un estado de subsidio perpetuo, para amparar la corrupción eterna… Hasta que la ciudadanía asqueada, reaccione. ¿Lo hará? ¿Llegaremos a verlo?**